

100º PERIODO LEGISLATIVO

3ª REUNION — Continuación de la 1ª SESION ORDINARIA — MAYO 8 DE 1975

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca, Antonio Pereira
y Luis Antonio García

Secretario: señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
AGUIRRE, Mario D.
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
AMADO SALEME, José
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONES, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARCE, Rodolfo Juvencio
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRUE, Willebrordo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto
ÁVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BÁRBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BÉHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efraín
BONIFATTI, Arelinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAPILLO, José
CARDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Ángel
CASTELLANO, Hugo Luis
CATALANO, José Armando
CATEULA, Juan Jaime
CITATI, Angel
COELLO, Clemente J.
COMÍNGUEZ, Juan Carlos

CONTESTI, Rubén Ricardo
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
CHAQUIREZ de PALACIOS, María
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
DAVICO, Miguel Ángel
DAY, Alberto Ricardo
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURO, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALÚ, Ricardo Munir
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ, Juan Máximo
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNANDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FUENTES, Pedro Alfredo
GAITAN, Adelmo Alberto
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRÉ, Nilda Celia
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GOLÉ, Tomás Juan B.
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
GUZMAN, María Cristina
HAIEK, José
HARRINGTON, Luis José D.
HUEYO, Horacio
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSUA, Carlos Raúl
KELLY, Rodolfo Feliciano
LABAKE, Juan Gabriel
LASTIERI, Raúl Alberto
LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAZZARINI, José Luis
LÉPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, María Haydée A. de

LONCHARICH FRANICH, Cándido A.
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LÓPEZ, Miguel Ángel
LÓPEZ de GALLO, Amelia
LUCENA, Luis Arnaldo
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MARINO, Rafael Francisco
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLORENZO, Vicente
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio T.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIGUEL, Pedro Honorio
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isauro
MOLINA ZAVALÍA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MONSALVE, Evaristo A.
MONTENEGRO, Bernardo H.
MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Angel
MORENO, Antonio E.
MORINI, María Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NATALE, Ricardo T.
ODENA, Isidro J.
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
OVIEDO, José
PALACIO DEHEZA, Carlos
PARENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PATLAGOITIA, Osvaldo E.
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PUENTE de BONETTO, María Enriqueta
RABANAL, Rubén Francisco
RACCHINI, Juan Nicolás
RAFAEL, Juan
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos

RITVO, Miguel
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina
 ROJAS, Ramón Pablo
 ROMÁN, Irene Graciela
 ROMERO, Juana N.
 ROSAS, Alberto Horacio
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SAAVEDRA, Roberto O.
 SALIM, Luis
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo
 SAMBUEZA, Osvaldo
 SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Nelo I.
 SILVA, Analicio
 SLAMOVITS, Ludovico
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 STECCO, Alberto Eleodoro
 SUÁREZ, Leopoldo M.
 SULETA de ARRAYA, Arminda
 SVRSEK, Enrique A.
 TACHELLA, Eliberto S. J.

TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino
 TRÓCCOLI, Antonio A.
 TULA DURAN, Joaquín
 URDÍNEZ, Clotilde Isolina
 VALENZUELA, Héctor R.
 VALERI, Salvador
 VÁZQUEZ POL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VIALE, Jorge Omar
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 VINTI, Carmelo
 VITALE, Irma Lucía
 ZAMANILLO, José Miguel

AUSENTES, CON LICENCIA:

ÁLVAREZ GUERRERO, Osvaldo
 BRITO LIMA, Alberto
 CABEZAS, José Humberto
 CROCCO, Luis Ferdinando
 FRESCHI, Pedro José
 GASS, Adolfo
 GIL, Matilde Vedia de
 HUGHES, Gilbert
 LENCINA, Luis A.
 MOMBELLI, Fausto J.
 NARANJO, Decio B.
 NOSIGLIA, Plácido Enrique
 PETRUCELLI, Agustín
 PORTO, Jesús E.

SOLANA, Jorge D.
 SUÁREZ, Humberto F.
 SUELDO, Horacio Jorge
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES, CON AVISO:

BENNETTO, Hilario
 CAMUS, Jorge M.
 DE APARICI, Ricardo José Manuel
 EGUIREUN, Enrique
 GONZÁLEZ, Ricardo A.
 LAVALLE, Mario
 LORENCES, Mariano Rufino
 LUMELLO, José Erio
 MALDONADO, Clemente
 MARTIJENA, Ergasto Nereo
 MARTOS, Mario Saúl
 MONACO, Horacio Miguel
 MORENO FERRER, José Carlos W.
 NICOLICHE, Lisardo Oscar
 RIZO, Eusebio Victor
 ROLANDO, Esteban Domingo
 ROMERO, Carlos Alberto
 SANDLER, Héctor Raúl
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 SAÚL, Roberto
 TRABOULSI, Eduardo Elías
 VACCAREZZA, Eduardo H.

SUMARIO

1.—Continúa la **consideración del dictamen** de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Previsión y Seguridad Social en el **proyecto de ley** en revisión sobre **régimen para el Servicio Exterior de la Nación**. Se sanciona. (Pág. 210.)

2.—**Consideración del dictamen** de las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores y Culto en el **proyecto de resolución** del señor diputado Imbaud por el que se solicita al Poder Ejecutivo la **remisión al Congreso Nacional del Convenio Internacional del Azúcar**. Se sanciona. (Pág. 250.)

3.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 251.)

—En Buenos Aires, a los ocho días del mes de mayo de 1975, a la hora 16 y 5:

1

REGIMEN PARA EL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa la sesión. Corresponde continuar con el tratamiento del orden del día 1.121 sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación.

Tiene la palabra el señor diputado Parente, miembro informante de la minoría.

Sr. Parente. — Señor presidente: el señor miembro informante de la mayoría, diputado José Fernández Valoni, ha pronunciado una exhaustiva disertación sobre el tema que nos ocupa.

No obstante ello, creo necesario y útil traer al debate antecedentes y circunstancias sobre el particular para una mayor clarificación del proyecto de ley que estamos considerando.

En primer lugar, es dable destacar que toda sociedad política, desde los albores de la humanidad, cumple sus funciones de distinta manera según sea el grado de evolución alcanzado en el proceso de institucionalización.

Todas esas tareas las realiza la sociedad política por intermedio de los hombres que la gobiernan, pues resulta imposible que un gobernante pueda abarcar por sí solo todas las actividades. Necesita de colaboradores en quienes delegar un mayor o menor grado de autoridad.

Es así que una distinguida publicista del fuste de la doctora Frida M. Pflirter de Armas ha podido decir «... que cuando la sociedad política alcanza un mayor perfeccionamiento institucional aparecen órganos mediante los cuales se cumplen las funciones políticas y jurídicas de esa comunidad. Las relaciones exteriores son una de las principales manifestaciones de la actividad de ese tipo de sociedad, sobre todo cuando ellas adquieren las características del Estado moderno.

»En éste, aquellas relaciones se cumplen a través de varios de sus órganos; en principio es el jefe del Estado el que tiene la mayor responsabilidad, pero participan en distinto grado el Poder Legislativo, y, en ciertos casos, el Poder Judicial.

»Pero el Poder Ejecutivo, entre las múltiples tareas a cumplir, precisa ir creando organismos dependientes de él y es entonces como surge evidente la necesidad de que uno de ellos se ocupe específicamente de las relaciones exteriores bajo la dirección general del jefe del Estado.»

El orden del día que estamos considerando se refiere al proyecto venido en revisión del Honorable Senado de la Nación sobre el régimen para el Servicio Exterior de la Nación. Por lo tanto, creo que resulta conveniente hacer una breve referencia a la historia de la diplomacia.

Soslayo la opinión de algunos autores en el sentido de que en el Bajo Imperio existía el cargo de preboste del Servicio de Diputaciones, que realizaba tareas inherentes a las que actualmente corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el año 1253 aparece en Inglaterra un funcionario con características similares al que actualmente se encuentra al frente del Foreign Office.

Durante el reinado de Francisco I, en Francia, se inicia el funcionamiento del organismo que más adelante asume gran relevancia. La diplomacia francesa adquiere un papel preponderante bajo el reinado de Luis XIII, siendo el cardenal Richelieu su organizador y el cardenal Mazzarino su continuador. Son los artífices de la diplomacia del Estado moderno francés.

En España, bajo el reinado de Felipe II se crea un consejo especial para asuntos diplomáticos, designándose para desempeñar estas tareas a don Juan Manrique de Lara.

Resulta obvio agregar la gravitación que en esta materia le correspondió a Bismarck, el canciller de hierro. Y antes de éste hay que destacar la influencia de los nefastos Metternich y Talleyrand, inspiradores del Congreso de Viena del año 1815, que trajo como consecuencia la restauración del reinado de Fernando VII, personaje siniestro para su propia Nación y, particularmente, para los pueblos de América.

No deseo omitir la destacada actuación que le cupo al conde de Cavour, artífice de la unificación italiana, lograda a través de una habilísima labor diplomática.

Me referiré brevemente al desarrollo histórico de la diplomacia en la Argentina. En nuestro país el órgano encargado de cumplir con las relaciones exteriores ha sufrido diversas alternativas. En general esta función ha correspondido al gobierno nacional, pero en algunos periodos fue delegada a la autoridad provincial o ejercida directamente por ésta en propiedad.

Durante el gobierno surgido de la Revolución de Mayo de 1810 las relaciones externas estuvieron a cargo de la Secretaría de Gobierno y Guerra. Durante el Triunvirato continuaron en manos de la primera secretaría, es decir, de la de Gobierno. Fue recién en 1814, al establecerse el primer Directorio, que se le dio el nombre de Secretaría de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Producida la anarquía del año 20 y concretada la caída del gobierno, la provincia de Buenos Aires asume la atención de las relaciones exteriores. Y el 23 de enero de 1825, cuando el Congreso Constituyente promulga la Ley Fun-

damental rivadaviana, se confía interinamente al gobierno bonaerense el gobierno nacional y con ello el manejo de las relaciones exteriores.

La Convención Nacional de 1826 sanciona la ley de Presidencia, estableciendo cinco ministerios, entre ellos el de Relaciones Exteriores o de Asuntos Extranjeros, y el presidente Rivadavia designa como ministro a Francisco de la Cruz.

Cuando cae el gobierno de Rivadavia las relaciones exteriores vuelven al gobierno de Buenos Aires, manteniéndose esta situación hasta el derrocamiento de Rosas el 3 de febrero de 1852.

Después de Caseros se suscribe el Protocolo de Palermo entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Por este protocolo se confiaban las relaciones exteriores al general Urquiza y esta delegación es ratificada posteriormente por el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.

La Constitución de 1853 establece definitivamente la responsabilidad principal del gobierno nacional en la dirección de los asuntos exteriores y dispone que el presidente de la Nación estará secundado en sus funciones por cinco ministros secretarios de Estado, que enumera, siendo uno de ellos el de Relaciones Exteriores.

La Convención Nacional Constituyente de 1898 establece que los ministros secretarios de Estado serán ocho, sin fijar sus funciones. Es decir que se deja librado a una ley especial determinar cuáles serán las distintas carteras ministeriales.

En ese mismo año se sanciona la ley 13.727, de organización de los ministerios, y se establece que uno de ellos ha de ser el de Relaciones Exteriores y Culto. Las funciones de este ministerio han sido reglamentadas por distintas leyes y decretos. La ley 13.727 fue derogada por la que lleva el número 13.529, derogada a su vez por la 14.303, que fue dejada sin efecto por el decreto ley 5.600/55.

Durante el gobierno constitucional del doctor Arturo Frondizi se sanciona la ley 14.439, que establece nuevamente ocho ministerios, siendo uno de ellos el de Relaciones Exteriores y Culto.

Entrando al meollo de la cuestión, debo manifestar que consideramos una ley específicamente diplomática y, por lo tanto, de características muy particulares y especialmente delicada en su fondo y en su forma. La norma legal actualmente vigente es perfectible y considero que deben introducirse en ella algunas modificaciones para su actualización.

A esta altura del debate debo destacar especialmente las bondades de la ley 12.951, sancionada en 1947, en la que tuvo una intervención relevante el entonces diputado de la Unión Cívica Radical, ex embajador, doctor Candiotti.

El proyecto de ley orgánica del servicio exterior de la Nación que estamos considerando es originario del Poder Ejecutivo y fue remitido al Honorable Senado el 8 de marzo de 1974, siendo enviado a esta Cámara en revisión con varias modificaciones.

Antes de entrar en el análisis del proyecto deseo referirme a los antecedentes históricos que existen en nuestro país sobre las leyes orgánicas del servicio diplomático.

El primer proyecto sobre la materia fue enviado al Congreso por el presidente Nicolás Avellaneda el 4 de junio de 1879, siendo entonces ministro de Relaciones Exteriores el doctor Manuel Montes de Oca. Con anterioridad a la fecha citada la totalidad del servicio diplomático y consular se había regido por decretos del 7 de noviembre de 1862, 6 de abril de 1872, 10 de marzo y 24 de septiembre de 1873, 7 de octubre de 1876 y 6 de agosto de 1877. El proyecto del presidente Avellaneda, que he citado, jamás fue considerado por el Parlamento.

Durante la presidencia de Avellaneda se presentó un segundo proyecto, que tampoco fue considerado, como no lo fue igualmente el proyecto del entonces diputado Norberto Quirno Costa.

Si bien no recibieron sanción los proyectos de Avellaneda y de Roca, de 1880 y 1884, respectivamente, sus disposiciones fueron tenidas en cuenta años después, cuando el Congreso de la Nación sancionó en 1905 las leyes 4.711, sobre el servicio diplomático, y 4.712, sobre servicio consular. Estas leyes rigieron hasta que se sancionó la ya citada ley 12.951, en 1947.

Como con el transcurso del tiempo las leyes 4.711 y 4.712 dejaron de estar a tono con las necesidades de cada época, con posterioridad a su sanción fueron numerosos los proyectos presentados por legisladores de diversos sectores tendientes a su modificación.

Debo manifestar hidalgamente, a esta altura de mi exposición, que en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el señor diputado Fernández Valoni, se trabajó con un gran sentido de responsabilidad y dejando de lado todo interés subalterno. Otros diputados de la bancada radical se van a ocupar del informe del diputado Fernández Valoni, pero desde ya expreso que a nuestro juicio no traduce en su integridad el pensamiento de la Nación Argentina, sino más bien el de un sector, ya que debió hacerse referencia a la política nacional argentina y no a la política nacional justicialista.

Pienso que la ley que consideramos es muy importante para los destinos de la Nación, sobre todo en el momento actual, afectado por múltiples factores políticos, económicos y sociales, como por ejemplo la decisión unilateral de la Comunidad Económica Europea prohibiendo la importación de carnes procedentes de terceros países, que ha deteriorado gravemente los términos de nuestro balance de pagos, y la actitud de los principales países productores de petróleo, que ha desencadenado una profunda crisis en los países industrializados dependientes de esa materia prima.

Estimo, señor presidente, que el señor ministro de Relaciones Exteriores es un hombre que conoce la materia. No en vano el doctor Alberto

Vignes integró como auxiliar *attaché*, por designación de Hipólito Yrigoyen, la delegación argentina ante la Liga de las Naciones que fuera presidida por el entonces canciller doctor Honorio Pueyrredón, de memorable y brillante desempeño en oportunidad de pronunciar su histórico discurso de noviembre de 1920.

Quiero destacar algunos conceptos del entonces embajador argentino a la Liga de las Naciones, doctor Honorio Pueyrredón. Decía en ese memorable discurso, pronunciado el 16 de noviembre de 1920 en Ginebra, que «la historia internacional de nuestro país aparece como una serie de hechos y actitudes que son testimonio de una concepción rigurosa del derecho de gentes. Jamás la Argentina hizo fundar su derecho sobre el triunfo de la fuerza, y proclamó el principio de que la victoria no da derechos. Incorporó al derecho público que las deudas contractuales no deben ser exigidas por medio de la fuerza, el arbitraje obligatorio ilimitado y la igualdad de las naciones».

Evidentemente, Hipólito Yrigoyen, que conducía en 1920 los destinos de la República Argentina, era prácticamente un líder de América latina.

Voy a permitirme leer conceptos expresados por el presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Feliciano Viera, al inaugurar el segundo período legislativo el 15 de febrero de 1918. Decía el entonces presidente de la hermana República Oriental del Uruguay: «Con la Argentina se han intensificado aún más los sentimientos de solidaria amistad que vinculan a nuestros dos pueblos, afirmados no hace mucho tiempo por el presidente Yrigoyen con un gesto que hace honor a sus sentimientos americanos y que enaltece al gobierno que preside los destinos de la democracia argentina.

»Con motivo de abrigarse muy serias sospechas de que el gobierno alemán patrocinaba una insurrección de los colonos alemanes con el fin de producir un levantamiento en las provincias del Sur del Brasil, insinuándose a la vez que se pretendía llevar a cabo una invasión por el Norte de nuestro territorio, el gobierno uruguayo, al poner este hecho en conocimiento del presidente Yrigoyen, pidió se expresara cuál sería la actitud del gobierno argentino en caso de que el Uruguay se dirigiera a él en demanda de materiales bélicos para armar las milicias que movilizase.

»El presidente Yrigoyen hizo saber al representante de nuestro país en la Argentina que, en el caso de semejante atentado, el gobierno argentino pondría todo su concurso en defensa de la soberanía de la Nación uruguaya, asumiendo las responsabilidades consiguientes.»

Ese es el pensamiento cardinal de Yrigoyen y la idea esencial que nosotros respetamos y conservamos en toda su integridad.

Considero que la representación diplomática argentina debe ser fundamentalmente republicana y democrática, para lo que se impone una

cuidadosa selección de las personas que la integren. Ese ha sido el objetivo primordial que nos movió al elaborar las modificaciones.

Conceptúo que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en su fondo es bueno; por esta razón nuestra bancada lo aceptó con disidencias parciales.

Como los señores diputados Natale y Fernández Bedoya se referirán exhaustivamente al tema, me concretaré a impugnar los artículos 5º y 6º del proyecto, en cuanto el Poder Ejecutivo se autolimita en su facultad de designación de los miembros del cuerpo diplomático. Considero que toda limitación a este respecto resulta inconstitucional, atento a los siguientes fundamentos.

Las limitaciones a que aluden los artículos 5º y 6º del proyecto de ley afectan las atribuciones del Poder Ejecutivo, desde que la Constitución no las ha previsto. No discuto la finalidad de esa *conditio*, establecida por el proyecto con miras a dar mayor eficacia a las designaciones dispuestas por el órgano presidencial; pero anoto que se incurre en una transgresión al principio constitucional según el cual los preceptos de la Constitución no pueden ser alterados por las leyes reglamentarias.

Las leyes sancionadas con anterioridad a la llamada ley 19.300, de 1971, autorizaban al presidente a nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios sin más restricción que la relativa a la duración del desempeño del cargo, la que quedaba supeditada al mandato del presidente. Pero es precisamente durante la dictadura militar que se establece, en 1971, la llamada ley 19.300, cuyo artículo 8º dispone que el Poder Ejecutivo podrá designar «excepcionalmente» en la categoría «A» de embajador a personas extrañas al cuadro permanente en actividad que se hubiesen destacado públicamente por relevantes servicios prestados a la Nación. En el proyecto de ley que consideramos la restricción ha calado todavía más hondo, pues el artículo 5º permite al presidente designar en la categoría «A» de embajador solamente a personas que reúnan las condiciones precitadas, agregando que su número no podrá superar el treinta por ciento del total de cargos de la categoría «A» que existan en el escalafón.

Por otro lado, en este proyecto de ley, al igual que en la ley 19.300, se ha quitado al Poder Ejecutivo la atribución que tenía para nombrar ministros plenipotenciarios de las categorías B y C. Si se tiene en cuenta que los encargados de negocios en las representaciones diplomáticas son, por lo general, ministros plenipotenciarios, y que por administrar las embajadas en realidad son ellos las llaves y el control de lo que ocurre en las mismas, es dable apreciar la inconveniencia de esta autolimitación.

En concreto, el órgano presidencial tiene exclusivamente la potestad del nombramiento,

potestad que, no tratándose de empleos o funciones, condicionados por el acuerdo senatorial o pertenecientes a las esferas legislativa y judicial, ejerce sin otras limitaciones que las impuestas por la Constitución.

Por estos motivos estimamos que el valladar impuesto por los artículos 5º y 6º del proyecto está reñido con los principios constitucionales de los incisos 1º y 10 del artículo 86, ya que el órgano presidencial nombra por sí solo, siempre que la Constitución no haya reglado de otra manera la designación, tal como acontece, en este último aspecto, con los nombramientos de jueces de los tribunales de la Nación.

Tampoco me entusiasma, señor presidente, el concepto generalizado de que únicamente los funcionarios de carrera son los más aptos para el desempeño de los cargos diplomáticos. Al igual que lo que ocurre con los jueces, la historia nos enseña que son muchos los hombres que prestaron servicios eminentes a su país sin pertenecer a los cuadros diplomáticos. Tal es el caso Davis, ministro americano en Moscú, quien durante la última gran guerra consiguió llegar con Rusia a un acuerdo integral. En nuestro país tenemos también innumerables ejemplos. Es el caso del doctor Bernardo de Irigoyen que, con posterioridad al derrocamiento de Rosas, cumplió con señalado éxito la misión que le encomendara Urquiza ante los gobernadores del interior para concretar el Acuerdo de San Nicolás. Y si la Patagonia se salvó militarmente gracias a Alsina y Roca, diplomáticamente se les debe mucho en esta materia a Bernardo de Irigoyen y a Avellaneda.

Creo que en el aspecto de las relaciones exteriores el país ha de recibir su legado histórico sin beneficio de inventario. Fundado en este principio quiero rendir mi homenaje a todos los hombres que cumplieron en ese campo una misión histórica en la Argentina. Y para ello cabe mencionar, a riesgo de incurrir en omisiones, las figuras de Varela, Calvo, Drago, Estanislao Zeballos, Quintana, Roque Sáenz Peña, Murature y el ya recordado Honorio Pueyrredón, quienes tanto hicieron por prestigiar a nuestro país en el ejercicio de la diplomacia. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Gill.

Sr. Fernández Gill. — Señor presidente: sin lugar a dudas el Servicio Exterior de la Nación es uno de los sectores especializados más importantes de la administración pública.

Sin temor a caer en error o de cometer una injusticia con gobiernos anteriores, puedo afirmar que han sido muy pocas las administraciones del país que han compartido este concepto en su verdadera dimensión. Por el contrario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino ha constituido, casi invariablemente, salvo honrosas excepciones, uno de los botines postelectorales más importantes de los partidos políticos. Y casi con matemática regularidad las

designaciones en los distintos niveles de la Cancillería han sido para compensar alejamientos que se habían producido en las jerarquías máximas de la administración pública nacional. Parecería ser norma indiscutida que cada vez que un alto funcionario ha tenido una cuestión no muy enojosa con el Poder Ejecutivo nacional se lo debe indemnizar —yo diría que ésta es la palabra exacta— con un cargo importante de orden diplomático. Por otra parte, cada vez que alguien importante en la administración pública ha tenido algún problema político de trascendencia o se ha puesto un tanto molesto en su función, casi invariablemente se compensa su alejamiento con su inmediata designación como embajador de la República. Sería antipático dar nombres, pero esto es algo que está absolutamente vigente y que deben tener presente todos los señores diputados.

Estas circunstancias son las que le han restado al cuerpo del Servicio Exterior de la Nación una necesaria continuidad y eficacia. Si a ello sumamos el desaliento por la inestabilidad que han tenido muchos miembros del servicio exterior y la inexistencia —como ha sucedido durante tantísimos años— de normas rígidas para el ingreso de los funcionarios, comprenderemos el estado de ineptitud de cierto sector —no todo— de nuestro cuerpo diplomático y la imposibilidad de haberlo podido colocar a la altura de otros servicios diplomáticos, no ya de los europeos, con largas y viejas tradiciones, sino de los de otros países latinoamericanos, como pueden ser los de Brasil, México o Chile.

Ya el doctor Juan Bautista Alberdi en carta a Miguel Malarin, reprobaba la inestabilidad que caracterizaba al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y a fines del siglo pasado el ministro plenipotenciario Manuel R. García se refería al servicio exterior diciendo que era formado al azar y sin escuela.

Estanislao Zeballos, en la «Memoria» que elevó a la Cancillería explicando o justificando el laudo adverso que en la cuestión de Misiones favoreció al Brasil, decía estos conceptos: «El Brasil ha cosechado el fruto de la tradición diplomática de su Ministerio de Relaciones Exteriores, conservada con inteligencia y perseverancia por más de cuarenta años, a través de todos los cambios». Y el 8 de febrero de 1895, el diario «La Nación» decía textualmente lo siguiente: «No hemos hecho el debido esfuerzo para formar una falange de diplomáticos de escuela, colocando de este modo nuestra representación exterior arriba de los caprichos del acaso y de los vaivenes del espíritu partidista. Debido a esto, nuestra política exterior ha adolecido en determinadas circunstancias de incoherencia y falta de penetración porque carecía de tradiciones».

Si me he permitido hacer estas menciones históricas es para reiterar que los males de nuestro servicio exterior no son de ahora, ni de

quince o veinte años atrás, sino de muchísimo más tiempo. Si analizamos la actual coyuntura internacional, que nos presenta un mundo tremendamente conflictuado, con aspiraciones hegemónicas muy distintas y también nuevas, a veces con un mundo subdesarrollado que en algunos casos solidariamente y en otros no lucha con verdadera pasión para romper las cadenas de la dependencia y del atraso; si comprobamos la existencia de servicios de inteligencia extraordinariamente refinados, así como la de conflictos bélicos internos y externos que han roto todas las normas de lo convencional; si analizamos la existencia de gravísimos problemas de orden ecológico y alimentario, comprenderemos entonces cuál es la importancia enorme que debe tener la existencia de un cuerpo realmente coherente del servicio exterior de la Nación.

De ahí la necesidad de establecer normas legales que realmente lo hagan apto para cumplir con profunda vocación de grandeza y de patriotismo y con un alto sentido de eficiencia la difícilísima misión que tiene y tendrá por delante.

En definitiva, como lo manifestara un prestigioso integrante de nuestro cuerpo diplomático, «es necesario desterrar de nuestro país la idea, desgraciadamente tan arraigada, de que la función diplomática no requiere hombres especializados ni aptitudes naturales en quien la desempeña».

Y como expresaba un importante estudio de la UNESCO: «El Ministerio de Relaciones Exteriores representa el brazo derecho del jefe del Estado y de los ministros de su gabinete en todo lo tocante a las relaciones externas. Es el punto neurálgico de la coordinación de la política exterior global».

De los numerosos proyectos presentados en el Parlamento argentino, varios han sido extensos y serios y han enfocado en profundidad los problemas referentes al servicio exterior. Yo los he consultado y me permito asegurar que uno de los antecedentes más importantes y el mejor fundado —a mi criterio— fue el del diputado doctor Antelo, perteneciente a la democracia progresista. La vigencia plena de muchos de sus conceptos me ha hecho creer oportuno reproducirlos en este debate.

Decía el prestigioso legislador desaparecido: «La organización y el mejoramiento de nuestro servicio diplomático, consular y de cancillería, son una impostergable exigencia pública. El país necesita con urgencia ajustar los órganos de su política exterior a las nuevas normas y modalidades de la vida internacional. La función diplomática específica, concebida dentro de sus moldes tradicionales, va siendo desplazada por un nuevo espíritu que ya no computa ni concibe los recursos de refinada habilidad ni las dotes de cortesanía que daban jerarquía y predominio a los agentes diplomáticos de otras épocas».

Ya en 1933 el mencionado legislador comprendía que a aquellas virtudes se debían agregar otras, derivadas de una cultura más amplia y del carácter a veces muy técnico de los variados temas y problemas a los que el diplomático debía hacer frente.

Todas esas consideraciones, señor presidente, son precisamente las que motivan mi acuerdo en general con el proyecto oportunamente remitido al Parlamento argentino por el Poder Ejecutivo.

Puede afirmarse que el proyecto, no obstante ser un trabajo que califico como serio, meditado y profundo, podría ser completado con algunas normas que me voy a permitir explicitar más adelante.

Pero no quería entrar en ese aspecto de mi exposición sin antes hacer mención de las discrepancias formales que yo tengo con algunos de los artículos, tanto del proyecto del Poder Ejecutivo como del dictamen final de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Una de ellas se refiere a la norma que determina la creación —en forma orgánica y con carácter de adscrito al Servicio Exterior de la Nación— del servicio de agregados laborales. Yo quiero ser muy claro en esto, para evitar torcidas interpretaciones. Entiendo que el tema de la asignación de funcionarios especializados está suficientemente explicitado en el artículo 99 del proyecto del Poder Ejecutivo, que lo autoriza precisamente a designar funcionarios especializados, dándoles inclusive rango diplomático cuando determinadas circunstancias así lo exigieran.

Es decir que yo no me opongo a que en determinadas circunstancias el Poder Ejecutivo encomiende una determinada función a un hombre que pertenezca a determinado sindicato o a determinada organización gremial, y que le otorgue todas las inmunidades diplomáticas que corresponden. Pero de ninguna manera ello puede ser con carácter permanente; y paso a explicar por qué.

Entiendo que ello implicaría establecer un privilegio funcional en favor de determinado sector de la comunidad; y de seguirse otro camino parecido, es decir, de procederse a la designación de agregados empresarios, de agregados universitarios, de agregados técnicos o de agregados provenientes del sector cultural argentino, además de crear un impresionante aparato burocrático, ello también implicaría la necesidad de fortísimas erogaciones.

No me opongo a la designación circunstancial de agregados especializados, que por otra parte están claramente previstos tanto en el proyecto del Poder Ejecutivo como en el dictamen final de la comisión.

Lo que quiero destacar es la injusticia que implicaría, con referencia a otros sectores de la comunidad, la aceptación del artículo 29 del dictamen. Lo realmente importante es designar al

personal especializado cuando particulares circunstancias así lo exijan o hagan conveniente, pero nunca con carácter permanente.

Otra disposición de la ley que tampoco comparto es la de que los funcionarios que hayan cumplido setenta años de edad en la categoría A, sesenta y siete años de edad en las categorías B y C, y sesenta y cinco años de edad en las restantes categorías dejarán automáticamente de pertenecer a lo que el proyecto de ley del Servicio Exterior de la Nación considera Cuerpo Permanente Activo. En mi criterio esto constituye un serio error, porque las ciencias de la salud nos demuestran a diario, con sus estadísticas e informaciones científicas, que no solamente ha aumentado substancialmente el promedio de vida de los hombres, sino también el de las condiciones psicofísicas de todos aquellos que pasan con holgura los sesenta años de edad. Y una prueba concreta la tenemos observando la composición del actual gabinete nacional. La tuvimos también con el último presidente de la Nación, quien con setenta y ocho años a costas supo manejar —con la experiencia y con la efectividad que todos le hemos reconocido— nada menos que el país. Y tenemos integrando el gabinete nacional hombres muy arriba de los setenta años, con los cuales uno podrá discrepar pero que trabajan doce, catorce y hasta dieciséis horas por día, en algunos casos desempeñándose con verdadera eficiencia, aunque —lo repito— en determinadas circunstancias no podamos estar de acuerdo.

Por otra parte, si analizamos los fundamentos que da el Poder Ejecutivo cuando habla de la creación del Consejo Superior de Embajadores —institución que yo no preveía en mi proyecto pero con la cual estoy completamente de acuerdo— advertimos que se hace hincapié precisamente en el valor inmenso de la experiencia. Y yo pienso en un hombre en el nivel de ministro a los sesenta y ocho años de edad, o en un hombre en el nivel de embajador, concretamente el actual ministro de Relaciones Exteriores, cuya política interna en el ministerio la combato duramente, aunque no cabe duda de que ha tenido éxitos de importancia en materia de política externa concreta, pese a que creo que está por cumplir setenta y nueve años de edad, manteniendo el rango de embajador. Esto nos está demostrando que la posición del dictamen es errada y poco conveniente.

Por otra parte, es útil tener en cuenta que si lo que se teme son los taponamientos escalafonarios, éstos difícilmente pueden producirse cuando son varias las causales de retiro obligatorio o forzoso que de una manera natural producen las mermas necesarias en el cuerpo de personal.

Tampoco puedo compartir lo establecido en las disposiciones transitorias en el sentido de que a los 180 días de promulgada la ley el Ministerio

de Bienestar Social, de común acuerdo con el de Relaciones Exteriores y Culto, fijará un régimen previsional para el Servicio Exterior de la Nación. De ahí que en el proyecto que oportunamente presentara en esta Honorable Cámara sobre Estatuto para el Personal del Servicio Exterior, se establece el número de años de servicio prestados sobre la base de los cuales pueden retirarse con determinados porcentajes de sus haberes.

El mismo temperamento se adopta para los casos de retiros forzados por motivos de salud, originados en disminuciones físicas o psíquicas parciales. Asimismo, dentro del régimen previsional de mi proyecto se dispone que los beneficios del retiro serán móviles; es decir que participarán de los aumentos y de cualquier mejora que se dispense a los funcionarios de su categoría escalafonaria. Esto lo consideramos de estricta justicia teniendo en cuenta las especialísimas características de la función diplomática, que permiten en mucho asimilarla a las funciones que desempeñan las fuerzas armadas.

Esto en cuanto a las discrepancias de orden general. En lo que hace a las disposiciones que podrían ser complementadas o ampliadas, quiero referirme en primer término a lo especificado en el proyecto del Poder Ejecutivo en el sentido de que las designaciones de personal no permanente en la categoría de embajadores no podrán exceder del treinta por ciento del total de cargos que existe en dicha categoría. Creo que esto debe ser motivo de un capítulo particular, tal como lo propongo en mi proyecto con la denominación de «escalafón especial», sujeto al régimen que al efecto también se establece. En él se autoriza al Poder Ejecutivo la designación de 44 cargos, distribuidos de la siguiente manera: 12 embajadores, 12 ministros plenipotenciarios, 6 consejeros de primera, 6 de segunda, 3 secretarios de primera, 3 de segunda y 3 de tercera, todos los cuales terminarán su función junto con las del presidente que los designó.

Las condiciones principales son la de poseer título universitario o relevantes antecedentes. De ninguna manera esto significa violar el espíritu de la ley en cuanto a la rigurosidad para el ingreso al servicio exterior, teniendo en cuenta, primero, el carácter especial y transitorio del escalafón, y segundo, que no se ejerce ningún taponamiento o «paracaidismo» —recurriendo a un lenguaje común— en el escalafón permanente.

En cuanto al ingreso al cuerpo permanente del servicio exterior soy casi reglamentarista. Esto lo he hecho premeditadamente con la finalidad de no dejar librado al criterio del poder administrador —sea de éste o cualquier otro gobierno— la posibilidad de alterar en lo más mínimo el espíritu de la ley, que, repito, comparto plenamente. Por eso en mi proyecto se propicia la creación de una comisión preliminar para el ingreso del personal, que, con 15 días de

anticipación al llamado a concurso, procederá a examinar y seleccionar las solicitudes presentadas. También propicio un tribunal examinador, un examen de idiomas y otras materias entre las cuales menciono concretamente historia argentina, historia americana, historia universal, geografía universal física, económica, humana y política, derecho constitucional, derecho internacional público, derecho internacional privado, historia de la diplomacia y del derecho diplomático, derecho consular, arte y cultura nacionales. Además se prevé la necesidad de establecer un coloquio con el tribunal examinador.

Insisto en este aspecto porque para mí es fundamental, y vuelvo a repetir algunos conceptos que me parece tienen muchísima vigencia y que están relacionado, inclusive, con algunos de los conceptos que ayer vertió el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Fernández Valoni.

Decía el doctor Antelo, hace ya más de 40 años: «Es necesario substituir el favor por la selección, la ocasión por la profesión, el brillo por la solidez y la camaradería personal o política por la idoneidad. Necesitamos, mediante un sistema de promociones por concurso sobre bases serias y científicas, estimular la consagración del personal a la carrera y transformar con la vinculación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a la Universidad el personal de hoy en órganos vivos de acción y de progreso».

Este es un tema de fundamental importancia que ayer mencionó, con conceptos que yo comparto en su totalidad, el señor miembro informante de la mayoría. El señor diputado Fernández Valoni habló de la larga lista que había durante muchos años en la Cancillería, de los ascensos indiscriminados, de los ingresos fuera del escalafón, es decir de lo que yo recién denominaba «paracaidismo administrativo»; habló de la necesidad del reconocimiento de los méritos y de la antigüedad para ser ascendido e hizo mención también a un elemento muy importante, desde el punto de vista formal y legal, que constituye un antecedente valioso, que fue la ley de servicio exterior 12.951, sancionada en 1947.

Espero —y digo esto con absoluta sinceridad— que sancionada esta ley no vaya a ocurrir lo mismo que sucedió con la ley 12.951, porque pienso —seguramente los datos están a disposición de los señores diputados en la Cancillería— que el período comprendido entre los años 1946 y 1955, y el que va de 1955 a 1958, son precisamente los períodos en que más abusos se cometieron. Hubo ingresos fuera del escalafón, hubo cesantías a granel, hubo ascensos sobre la base de motivaciones políticas y en muy contadas ocasiones fue jerarquizado el servicio diplomático.

De ahí que cuando advierto la pasión sincera y la preocupación, que descuento también sincera, del señor diputado Fernández Valoni, pienso, de sancionarse este proyecto de ley, cómo se va a compaginar su espíritu con aquel con el que lamentablemente el actual ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina ha manejado la Cancillería.

Porque me tocó participar activamente en problemas relacionados con cesantías y con aplicación de la ley de prescindibilidad, me preocupa saber cuál ha de ser el espíritu con el que el actual ministro de Relaciones Exteriores va a aplicar esta ley, cuando ha sido un modelo de arbitrariedad, de injusticia y de atropello. Digo esto con absoluto conocimiento de causa, y porque además en ocasión de tratarse la ley de prescindibilidad pude enterarme de algunas de las reclamaciones absolutamente fundadas que hicieron prestigiosos funcionarios completamente apolíticos pertenecientes al Servicio Exterior de la Nación.

Me pregunto también cómo se van a compaginar algunas de las expresiones que el señor diputado Fernández Valoni ha vertido —compartidas además con los aplausos de los miembros de su propio bloque— y las durísimas críticas que ha formulado a lo que él denomina «camarilla militar», con varias e importantes designaciones que ha hecho y que ha propuesto también el actual canciller Vignes.

Concretamente le pregunto al señor diputado Fernández Valoni si sabe que el actual embajador en Italia —y no hago aquí ningún tipo de valoración personal—, general Betti, fue designado por este gobierno jefe del Estado Mayor Conjunto, y actualmente se desempeña en uno de los países más importantes del mundo. Pregunto también si el señor diputado sabe que el actual embajador en Australia, Raúl Desmarás, fue, hasta el último día de lo que él denomina camarilla militar, secretario del CONADE; y lo mismo ocurre con el embajador Guillermo de la Plaza.

Resulta antipático dar nombres, pero los menciono aunque entendía que este debate debía plantearse en un plano exclusivamente técnico, lo cual lamentablemente no ha ocurrido.

Sr. Fernández Valoni. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Fernández Gill. — Sí, señor diputado.

Sr. Fernández Valoni. — Es para preguntarle al señor diputado si desea atacar a la camarilla militar, a los funcionarios que ha nombrado o al presidente de la comisión.

Sr. Fernández Gill. — De ninguna manera; lo que quiero es destacar la evidente contradicción en sus aseveraciones. Aquí se da aquella frase atribuida al viejo cura: «Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago». Me preocupa que se hayan hecho una serie de apreciaciones políticas. Por eso preguntaba al señor diputado, con relación a lo que él denominó «camarilla militar», si ésta

incluye al señor Betti, que fue jefe de la Jefatura V, luego designado por este gobierno jefe del Estado Mayor Conjunto y posteriormente embajador en Italia.

Sr. Fernández Valoni. — Así es, señor diputado; sé perfectamente el cargo que ocupa el general Betti. Pero también sé que el general Perón puso por encima de la clásica metodología del liberalismo que siempre utilizó la Cancillería un espíritu de conciliación que llevara el proyecto nacional hacia el modelo argentino.

Sr. Fernández Gill. — Estoy totalmente de acuerdo con eso, señor diputado.

Sr. Fernández Valoni. — A este país lo arreglamos todos o no lo arregla nadie. Lamento que el señor diputado haya traído al debate el nombre de varios funcionarios.

Sr. Fernández Gill. — Yo también lo lamento, pero creo que de una vez por todas debemos manifestar las verdades de manera completa.

También hay otro aspecto que lamentablemente no ha sido contemplado: es el relativo al momento en que deben ser dispuestos los traslados y puestos en conocimiento de los interesados, tal como se encuentra en el capítulo VII de mi proyecto. Este aspecto creo que es fundamental para la tranquilidad espiritual de todos los integrantes del servicio exterior de la Nación, especialmente cuando se trata de funcionarios casados y con hijos. He tenido oportunidad de desempeñar una función diplomática y he podido comprobar los problemas de orden familiar, económico y educativo de muchas familias que están en el exterior y que imprevisiblemente reciben una orden de traslado, lo que les crea gravísimas complicaciones de orden privado.

Estoy de acuerdo con el agregado que el Senado de la Nación introdujo en el artículo 77, pues permite solucionar el grave problema que se había planteado con el personal prescindible, que por escaso tiempo perdía todo derecho a acogerse a los beneficios de la jubilación. El artículo 77 dispone que «los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales quince como mínimo computables en el servicio exterior de la Nación, y hubieran cesado en sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, con excepción de los incisos c) y d) del mismo, o hayan sido separados por razones ajenas a su voluntad, tendrán derecho al haber de retiro siempre que no hubieran percibido ningún tipo de indemnización en razón del cese de funciones, en cuyo caso deberán reintegrarla», con lo cual se cumple con un estricto deber de justicia.

No comparto las manifestaciones del señor presidente de la comisión cuando hizo una crítica muy dura, casi despectiva, de los tribunales de honor, cuyas funciones consideró de carácter medieval. Creo personalmente que ello no es así. Por eso los he incluido en mi pro-

yecto y por eso mismo he visto con satisfacción que el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Perón, incluyera una institución tan importante, capaz de producir fallos que quizá en algunos casos no pudieran tener valor legal pero que en determinadas circunstancias adquieren uno mayor, que es su valor moral.

Apuntadas estas discrepancias y hechas estas observaciones como aporte positivo al proyecto de ley que estamos considerando, vuelvo a reiterar mi acuerdo en general con la iniciativa oportunamente enviada por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Cabana.

Sr. Cabana. — Señor presidente: como lo determina la doctrina del justicialismo, la expresión política de la revolución justicialista es el movimiento nacional; y de ese cuerpo ideológico popular y colegiado su columna vertebral es la clase trabajadora organizada.

El pueblo tiene pleno derecho a participar en todas las actividades del país, las que debe realizar para su desarrollo tanto en lo interno como en lo externo. De aquí que el general Perón haya establecido la representación de agregados obreros en las embajadas argentinas. Esta fue una verdadera y revolucionaria conquista social, porque gracias a la labor de esos agregados obreros se materializa la unión de los pueblos como base fraterna de la unidad continental, más allá de los tratados culturales y comerciales y de las enmiendas jurídicas, más allá de la vida transitoria de los gobiernos.

El sindicalismo sabe que la unión, la solidaridad y la organización de los trabajadores es la base de la unidad nacional; y esa misma unión y la misma solidaridad que nosotros hemos alcanzado tras años de lucha, ese cúmulo de beneficios de que disfruta el obrero, en posesión de las conquistas que ganara con el general Perón, debemos tratar de aportarlos a las luchas de los pueblos hermanos para la defensa de la clase trabajadora del continente. Así como la base de la unidad latinoamericana es la unión de los pueblos, la base del futuro universalismo tiene que ser una construcción cimentada sobre la clase obrera del mundo, haciendo efectivo el apotegma de que para un trabajador no debe haber nada mejor que otro trabajador. No se construyen pirámides empezando por las cúspides; es menester hacerlo comenzando por las bases, y esas bases son las organizaciones sindicales.

La política exterior de la Nación está de acuerdo con lo que siente el país cuando esa política, en sus lineamientos generales y en sus realizaciones, expresa y sintetiza el sentir del pueblo. Quiere decir que si en la política exterior no se da toda la gama de la vibración popular, ella no representa lo nacional.

Esa es la mejor expresión y testimonio de nuestra revolución justicialista, y así se muestra a los pueblos como un camino hacia su felicidad

y en procura de la grandeza de las naciones y continentes por intermedio de las representaciones laborales, porque transmiten la realidad de nuestra Nación como propuesta de liberación, porque reciben las experiencias convergentes hacia la unidad de los pueblos, porque expresan nuestra propia cultura a través del nacionalismo cultural, cuyas muestras, exposiciones y demostraciones del potencial folklórico, artesanal, del trabajo y la intelectualidad, nos identifican frente a la diversidad cultural de otros pueblos, al tiempo que consolidamos nuestra fuerza de identidad para contrarrestar los embates de la disociación organizada por el obscurantismo proimperialista; porque difunde la concepción revolucionaria del justicialismo, sus realizaciones en lo interno, que es la propuesta válida de liberación universal a partir de la tercera posición; porque intercambia experiencias en el marco de la clase trabajadora del mundo; porque motoriza la unidad, de los trabajadores; porque impulsa la organización sindical continental, ámbito de nuestra unidad ecológica, seguridad relativa y geopolítica de liberación; porque relaciona a las distintas organizaciones sindicales y concreta la organización continental como ATLAS (Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas), frente a las propuestas de las organizaciones sindicales proimperialistas.

Señor presidente: el agregado laboral no es un funcionario ni un burócrata con especialización laboral, ni su representatividad está dada por el dominio de las tradicionales formalidades del escalafón diplomático, sino que su condición de trabajador es legítima y, además, es el representante auténtico de su organización.

Con estos preciados títulos el agregado laboral está ejerciendo la funcionalidad activa, en totalidad, de la cultura y la conciencia histórica de los trabajadores.

En la nueva situación internacional de mayor acercamiento entre las naciones y de unidades mayores hacia el universalismo, son los trabajadores los que, con sus virtudes de unidad y solidaridad, y de afirmación de nuestra identidad y autodefinición a través del nacionalismo cultural, se oponen a los vicios del expansionismo avasallador de los pueblos y a la disociación nacional, métodos ambos de la dominación imperialista.

Los agregados laborales, vehículos de la unidad de los pueblos, son expresión cierta e irrenunciable del avance de los trabajadores por determinismo histórico, conducido genialmente por el general Perón; son expresión del fin del poder oligárquico; son expresión del contralor político contra las maniobras de las burguesías, y son una formal y legítima garantía para que ni el poder oligárquico ni el burgués puedan alzarse con el santo y la limosna.

Lo que antecede no es más que una rápida valoración del contenido del proyecto de ley del

Servicio Exterior de la Nación, que por su estructuración eficiente y por las modificaciones que hemos creído oportuno introducir, en lo que atañe al orden de los agregados laborales, espero que cuente con la aprobación de este honorable cuerpo legislativo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Marino.

Sr. Marino. — Señor presidente: no tenía intención de participar en este debate. He firmado el despacho juntamente con los señores diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que no formularon disidencias. Me obliga a hacerlo un deber de lealtad para conmigo mismo y para con el resto de los señores legisladores de esta Honorable Cámara.

Mi intervención va dirigida a sostener el principio fundamental del pluralismo partidario y el pluralismo ideológico, que pareciera que hubiera quedado cancelado merced a la forma y el modo con que se expresó el señor presidente de la comisión.

Cuando firmé este despacho sin disidencias lo hice en la inteligencia cabal y absoluta de que estábamos legislando para el gobierno de la República y no para un gobierno partidario determinado, de que estábamos trabajando —como lo dijo con posterioridad hoy en el recinto, pero no ayer en la exposición, el señor diputado Fernández Valoni—, en convivencia, en armonía y en participación, porque también comparto el apotegma de que el país va a salir adelante con el trabajo común, en la convivencia democrática y con el diálogo. Pero esa circunstancia no quedó aclarada a través de la forma en que el señor miembro informante rindió ayer su informe. Lo señalo con toda seriedad y sin el ánimo de hacer imputaciones de ninguna naturaleza, y lo hago porque ése es mi deber y mi obligación.

Estuve de acuerdo con cada uno de los artículos que se fueron modificando y con las distintas disposiciones que constituyen el cuerpo de este estatuto, en cuya elaboración intervinimos todos los diputados integrantes de la comisión, quienes representan a todos los sectores que componen el espectro político que presenta la Honorable Cámara. Y digo que esto me obliga a participar en el debate para dejar aclarado —repite— que firmé el despacho sin disidencias en la inteligencia de que estábamos dictando una ley para la República Argentina, y no para un partido determinado.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Señor presidente: el tema que nos ocupa ha sido y es motivo de profunda preocupación para la bancada de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, por entender que el proyecto de ley que la Cámara considera constituye una de las herramientas fundamentales de la política exterior del país. Por todo ello entiendo que es menester definir

claramente el significado de los medios y fines que expresa la política exterior en defensa de la soberanía y los intereses nacionales.

La política exterior no es un capítulo estanco de la política nacional. Es el instrumento para lograr la satisfacción de los intereses externos del país, con el propósito de garantizar nuestra independencia política y nuestra autonomía económica frente a los efectos negativos de una coyuntura internacional.

La historia nos enseña que solamente los países que tuvieron una política exterior adaptada a sus pretensiones nacionales y a las circunstancias históricas, sobresalieron en las competencias internacionales que debieron dirimir.

El aislamiento ha desaparecido por la interrelación cada vez mayor de la vida universal; la distancia física ha sido vencida por la aproximación política. Los intereses económicos, la estrategia militar, la electrónica y la energía nuclear son elementos que han achicado el margen de distancia de los pueblos. El riesgo como la colaboración, el peligro como la ayuda, son factores que han acercado a los países. Vale decir que nuestra vecindad ya no es de fronteras solamente, ni se detiene en una región: es universal, es cósmica. Los espacios que antes aparecían marginados en el tiempo y el espacio, como en el fondo del mar o en los confines ultraterrestres, se han ido achicando en función de las disputas en perspectiva que cada uno de los pueblos tiene como consecuencia de sus aptitudes y en defensa de sus intereses nacionales.

Tales circunstancias nos hacen concebir la política exterior como la proyección de la política interna al campo internacional, con sus esencias fundamentales y objetivos comunes, para prolongar, procurar y mejorar las soluciones nacionales, regionales y universales.

Cuando el accionar exterior de un Estado es eficiente, tiene como misión relacionar las conveniencias de la nación de ahora con las que se puedan prever en el futuro aún lejano; debe ubicar a la nación en un mundo que varía continuamente, en un mundo heterogéneo, dinámico, pero en cierta medida coincidente. No se lo debe encerrar en un simple acontecimiento, no se lo debe agotar en una simple instancia. La eternidad de la nación deberá estar siempre salvaguardada y sin mengua de las armas; es a la diplomacia a la que le corresponde principalmente esa misión.

El desarrollo de una política exterior eficiente determina una sistemática tarea de negociación y concertación de políticas, que no se agota en meras declaraciones, discursos ni slogans de fácil consumo.

Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional, en vez de mandarnos una formulación coherente, orgánica y definitiva de una política exterior para el presente y el futuro, nos envía un estatuto para el Servicio Exterior de la Nación que

debería haber venido *a posteriori* y aún después de haber proyectado una eficiente y jerarquizada Cancillería.

El bloque radical espera con ansiedad el debate sobre política exterior; sobre la que es, sobre la que no es, y sobre la que debería ser. De todos modos, nos interesa esta oportunidad ligada a la política exterior para formular muy rápidamente algunas consideraciones que se refieren a la misma.

Cuando se analiza la política externa ejecutada por la actual Cancillería se deben evaluar no sólo los logros alcanzados sino también los que pudo hacerse y no pudo concretarse. Uno de los objetivos fundamentales de la política definida por el actual gobierno ha sido y es consolidar un proceso de integración latinoamericana. Nadie puede desconocer la importancia que significa para nuestro país este tipo de política. Cuando en 1960 se firmó el Tratado de Montevideo, por el cual se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, fue una de las obras fundamentales para que esta integración se pudiese proyectar en el tiempo en una realidad cierta. Pero hoy día nos encontramos con que dentro del marco de la ALALC nuestra política exterior en estos dos últimos años, sin dejar de reconocer los obstáculos de un resabio del pasado, ha hecho muy poco. Podemos significar que en 1974 la Argentina, dentro del marco de la ALALC, sólo ha otorgado cinco concesiones en su lista nacional y no ha suscrito ningún tipo de acuerdo de complementación económica.

Evidentemente, con respecto a medidas concretas en pro de la integración latinoamericana, hemos avanzado muy poco. Todavía el país no ha podido materializar una relación permanente con los países del Acuerdo de Cartagena, a pesar de las declaraciones del canciller Vignes hace un año en la reunión de Lima. El señor Vignes, en esa reunión de Lima, expresó que uno de los objetivos de la Argentina era intensificar las relaciones con los países miembros del Pacto Andino y que era necesaria una acción inmediata, pero hasta ahora nos hemos quedado en una simple política de formulación de buenos deseos.

La proyectada participación de nuestro país en los programas sectoriales de desarrollo industrial, en los proyectos andinos de desarrollo tecnológico y en la concertación de un estatuto argentino sobre inversiones mixtas dentro de las producciones asignadas por los programas sectoriales establecidos por los países del Acuerdo de Cartagena, no han logrado aún concretarse y no sabemos cuál es el futuro inmediato.

Consideramos que éstos hubieran sido pasos positivos, tendientes a establecer las bases de un tipo de relación futura con estos países tan importantes para la comunidad latinoamericana y para consolidar la tan mentada y deseada unidad latinoamericana.

En un tema que hace tanto a nuestra defensa nacional y a nuestra soberanía como es el de la

Cuenca del Plata, las resoluciones adoptadas en la última conferencia de cancilleres siguen siendo tan intrascendentes como las anteriores.

El problema fundamental que trava cualquier intento de desarrollo armónico y equilibrado en la región, en lo concerniente a las relaciones argentino-brasileñas y paraguayas, ha sido motivo de debate y de consulta permanente dentro de este Parlamento, en sus comisiones especializadas y en los proyectos presentados por varios legisladores que representan diferentes corrientes políticas.

No voy a negar que la Argentina ha obtenido algunos triunfos de carácter diplomático sobre el tema, pero en los foros internacionales la tesis argentina ha triunfado siempre porque es justa, porque es la tesis de la información y la consulta previa. Pero no hemos logrado en este aspecto ningún éxito en el campo donde sí debemos obtener triunfos de carácter inmediato, es decir, en el propio seno de la Cuenca del Plata. Porque mientras la tesis argentina ha sido favorablemente acogida en diferentes foros internacionales, los países miembros de la Cuenca del Plata han votado inversamente a la posición adoptada por la República Argentina. Y no escapará al criterio de los señores legisladores la incidencia geopolítica, económica y social que tiene para nosotros este tema de tan candente actualidad.

Debo señalar aquí, señor presidente, que a pesar de todas estas actividades diplomáticas realizadas por nuestra Cancillería, el gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al día de la fecha no ha solicitado información oficial a las cancillerías del Brasil y del Paraguay sobre el tema de Itaipú.

Ante las propuestas presentadas por los Estados Unidos de América en la Conferencia de México, reunida en febrero de 1974 —conferencia que debía tener una importancia significativa para los pueblos de América latina, que de una vez por todas están haciendo sólidos esfuerzos en busca de una verdadera integración latinoamericana, tendiente a consolidar un frente firme y homogéneo que les permita disputar en el campo internacional la política hegemónica de los países de mayor alcance productivo y que tienen una mayor relación de fuerza—, mientras se debatían temas candentes que hacen a la política latinoamericana, nuestro canciller Vignes solamente tuvo expresiones referidas a la política económica de Latinoamérica, pero no hizo ninguna formulación de carácter político concreto que tendiese a consolidar los objetivos que estaban en discusión en esa conferencia.

Debemos señalar, asimismo, que en la conferencia realizada en Quito se debatió el levantamiento de sanciones impuestas a Cuba. Esta fue una tesis sustentada por el gobierno de la República Argentina, política nueva que la Unión Cívica Radical ha acompañado en sus enunciados y con la que ha coincidido plenamente en lo que se refiere a la apertura, sin límites, con

todos los países del mundo y en lo concerniente al respeto por la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Y mientras en esta conferencia de Quito se discutía el ingreso de Cuba al seno de la Organización de Estados Americanos, nuestro canciller Vignes —que había sido uno de los que habían impulsado, a través de una acción diplomática, el ingreso de Cuba al seno de la OEA— dialogaba en Roma con Kissinger sobre problemas que no tenían relación con el tema en cuestión.

Lo mismo debemos señalar con respecto a la conferencia realizada en Atlanta (Estados Unidos), donde la ponencia de los intereses que hacen a la comunidad latinoamericana no estuvo expresada a través del vocero de la República Argentina sino por intermedio de los voceros de los países hermanos de Venezuela, México y Guyana.

Es decir, que no hemos avanzado en forma eficiente y acelerada en lo que se refiere al sistema interamericano, porque hay que señalar la política que ha seguido el actual ministro Vignes con respecto a la OEA. La Organización de Estados Americanos, creada en Bogotá en 1948, viene siendo criticada o discutida desde hace mucho tiempo por los diferentes países que la integran. No sabemos cuál es la posición que tiene la Argentina respecto a la OEA. Aún no conocemos la opinión oficial del gobierno: si debemos permanecer dentro de la OEA, si debe ser modificada, si tenemos que postular otro tipo de organización americana. En tanto, países amigos como Venezuela y México están haciendo formulaciones concretas al respecto.

Tenemos urgentemente que revisar todo lo concerniente a la OEA, para tratar de proyectar un organismo al servicio de los intereses de Latinoamérica más allá de los intereses hegemónicos de algún tipo de potencia. Es decir, en concreto, que la OEA no puede estar al servicio de intereses sectoriales sino de la comunidad latinoamericana, para que ésta, en un tipo de igualdad de condiciones, pueda participar en el concierto internacional, planteando sus necesidades y aportando sus proyectos en lo que hace a un mundo tan conflictivo como el que estamos viviendo hoy en día.

Y ya que hablamos del tema de la dependencia, cabe recordar que la Argentina aún no ha tomado posición concreta respecto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito en el año 1947 en Río de Janeiro, tratado que en cierto modo nos significa una relación de dependencia con una potencia hegemónica como la de los Estados Unidos de América. Necesitamos urgentemente repensar este tema, analizar sus consecuencias y procurar proyectar una política que tenga como único sentido la defensa de los intereses nacionales, es decir, los intereses que hacen a nuestro pueblo.

En lo que se refiere a la política que ha sostenido nuestro gobierno con respecto a los Es-

tados Unidos de América, no escapará al criterio de los señores legisladores la necesidad de una buena política con el país hermano del Norte. Pero no hemos tenido propuestas concretas al respecto. Mientras el canciller Vignes dialogaba con el señor secretario de Estado Kissinger, y éste, entre otros aspectos, se comprometía casi públicamente a tratar de que los Estados Unidos levantasen las restricciones a las importaciones argentinas; mientras el canciller Vignes exhibía públicamente su diálogo con el señor Kissinger, su correspondencia con él y sus triunfos sobre otros cancilleres latinoamericanos porque aquél dialogaba cinco o diez minutos más, al poco tiempo nos regalaban una ley de comercio exterior que es otra forma de dependencia y de querer coartar la unidad de los países de América latina.

Necesitamos una política concreta para con los Estados Unidos de América. Necesitamos definir nuestra política en lo que se refiere a este gran país, porque la Argentina no solamente debe redefinir su política general sino también su política económica. En estos diez últimos años la República Argentina exhibe, para con los Estados Unidos, un saldo de balanza comercial desfavorable del orden de los dos mil millones de dólares. Es decir que urge un inmediato replanteo total de esta política. No podemos estar pendientes de un llamado telefónico del señor Kissinger o de su capricho para querer asistir o no a una conferencia de cancilleres, como la que había sido programada para celebrarse en la ciudad de Buenos Aires y que por motivos aún inexplicables no se ha celebrado, lo cual ha significado un agravio para nuestro país en su calidad de organizador de esa reunión.

Como lo señalara oportunamente, el dictado de una ley para fijar el régimen del personal del Servicio Exterior de la Nación es una herramienta; pero si en esta materia no tenemos una política clara y definida, la herramienta no habrá de servir absolutamente para nada. Más allá de los acuerdos comerciales y políticos alcanzados con los países del Tercer Mundo, y luego de la postulación argentina mantenida en la Conferencia de Argel, necesitamos urgentemente impulsar una política acelerada y continua con tales naciones, más allá de los acuerdos comerciales celebrados con Libia, que podrán ser acertados o no, y que aún la opinión pública no conoce sus términos, dado que no han sido remitidos al Parlamento, al igual que otros cincuenta y siete tratados suscritos por el gobierno. Necesitamos efectivizar una política de concertación con estos países, que tienen una importancia significativa no solamente en el aspecto político sino también en el económico.

Entrando concretamente al tema que nos ocupa, quiero hacer algún tipo de reflexiones. Señalé anteriormente que el Poder Ejecutivo, previo a haber enviado a este Honorable Congreso

el proyecto que tratamos hoy, debió haber remitido una formulación completa en lo relativo a una política exterior argentina y un proyecto de organización institucional de la Cancillería. Hay que reconocer, de una vez por todas, que tenemos una Cancillería cuyas funciones específicas están distribuidas en distintos ministerios.

La política exterior es una unidad conceptual. Cuando un funcionario de cualquier área del gobierno viaja a un país amigo a concertar o a tratar de celebrar un convenio comercial, cultural, económico o político, debe hacerlo previa consulta con nuestra Cancillería, porque la Cancillería argentina y la política exterior argentina no están al servicio de un gobierno, sino al servicio de la Nación toda. Es decir, la política exterior de un país es la que trasciende en el tiempo, la que no queda pura y exclusivamente circunscrita al partido político o al grupo que le ha tocado dirigir en un momento transitorio la vida institucional del país. Por esto es que es importante una acción común y una consolidación de todos los vasos comunicantes de un país. En un Estado moderno no se conciben compartimientos estancos.

En una anterior definición expresé que la política exterior es la continuación de una política interna, es decir, lo que un pueblo quiere ser, lo que un pueblo entiende que debe hacer. Y esta política exterior nos ayuda, dentro del marco de las relaciones internacionales, a armonizar nuestras necesidades con las posibilidades que se nos ofrecen. Por eso es importante el diálogo y que todo acto gubernamental fuera del área específica del Ministerio de Relaciones Exteriores sea previamente consultado con este ministerio, que en definitiva es el órgano encargado constitucionalmente de definir y explicitar una política exterior. Para ello debemos contar con una Cancillería con mayor independencia, capacidad institucional y recursos para elaborar, conducir y cumplir una política. Requiere que ella tenga seguridad en la continuidad de su jurisdicción, casi siempre invadida por sectores influyentes o simplemente por quienes se olvidan de que exclusivamente a la cancillería compete trazar la política exterior.

Es indudable que al diplomático se le confía una de las más delicadas y trascendentes misiones que la Nación puede asignar a un ciudadano. Es indudable que el diplomático es el representante genuino de un pueblo; es el hombre que en el extranjero representa el modo, las costumbres y el sentir de una nación.

No creemos, pues, como decía Henry Wotton, el embajador inglés del siglo XVII, que el diplomático sea un hombre honesto enviado al exterior para mentir en favor de su patria. Tampoco creemos en aquellos que sostienen que el único atributo del diplomático debe ser hablar bien, comer bien y no decir absolutamente nada.

Creemos en lo que enseña Morgenthau: «Si la guerra fuese inevitable, este libro podría terminar aquí. Si la guerra no es inevitable, las condiciones para revivir la diplomacia para su operación efectiva al servicio de la paz merecen ser consideradas». La cita es de un libro suyo sobre el poder y la paz.

Concebimos al diplomático como un militante y un técnico, como un creyente y un profesional, puesto que debe creer en el pensamiento de la Nación, en sus instituciones, en su política exterior, posibilitando sus realizaciones, su aceptación en el mundo exterior. De ahí que el diplomático deba tener una política para orientarse; de otra manera sería un soldado sin bandera y sin rumbo. Pero, además, el diplomático debe ser una persona capacitada y especializada, dotada de una disciplina y una mentalidad funcional, una capacidad de persuasión y una flexibilidad de negociación, para todo lo cual se exigen conocimientos muy amplios y actualizados de la política nacional e internacional.

Para formarse, ese creyente y ese profesional ha de tener títulos adecuados, cursos y escuelas de capacitación especializada, conciencia nacional y responsabilidad moral. Pero también se requiere estabilidad, promoción reglamentada y respeto permanente por parte de sus superiores del ministerio o del gobierno.

No concebimos, entonces, cómo en la ley se puede hablar de estabilidad cuando en los últimos dos años han sido declarados prescindibles más de 150 funcionarios, algunos por causas justificadas y otros por causas no conocidas.

¿Cómo se puede hablar de estabilidad si en el artículo 18, inciso a), del proyecto de ley que estamos considerando se admite declarar fuera del servicio a los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11, que son las condiciones establecidas en esta ley para ser designado funcionario, previo asesoramiento de una junta calificadora? Como este artículo contiene consideraciones sometidas a valoraciones discrecionalmente personales, o comprende por aplicación del inciso h) a todos los funcionarios que han ingresado al servicio fuera de las normas actualmente en vigencia, viene a resultar una puerta abierta para nuevas cesantías.

La ley tiene que sentar la regla de que a nadie se lo puede remover sin haberse substanciado un sumario, sin haber acusación, sin existir defensa y sin que exista un dictamen de la junta calificadora y no un simple asesoramiento. Esta junta no puede simplemente asesorar, sino que debe investigar sobre la conducta y aptitud del funcionario en cuestión.

¿Cómo se puede hablar de escalafón si continuamente se asciende vertiginosamente a ciertos funcionarios de una categoría a otra en detrimento de otros? Sobre este particular voy a referirme a dos casos concretos.

Uno de esos casos está relacionado con la señorita Marta Natale —con quien, casualmente,

sólo coincidimos en el apellido—, actual secretaria privada del ministro de Relaciones Exteriores; y el otro, con la señorita Nelly Freyre Peñabad, quienes fueron ascendidas en tres categorías del escalafón diplomático en el lapso de seis meses, es decir que pasaron del cargo de segundo secretario al de ministro, contraviniendo todas las disposiciones reglamentarias. Más allá de las condiciones particulares que pueda tener cada una de ellas, entiendo que realmente han hecho una carrera vertiginosa.

¿Cómo se puede hablar de escalafón cuando se da al canciller, aunque sea por sólo ocho meses, derecho a promover discrecionalmente de tal manera que pueda hacer de la noche a la mañana de un secretario de tercera clase un embajador o un ministro?

La arbitrariedad no deja de ser arbitral porque sea pasajera o temporaria, puesto que sus efectos son permanentes. No vemos cómo el Congreso puede conceder a este canciller una atribución de esta magnitud, y pretender negarla mañana a otro canciller, con lo cual la arbitrariedad se habría hecho permanente.

La división de los ministros plenipotenciarios en dos categorías significará que la carrera, incluido el cargo de embajador, exigirá tres acuerdos del Honorable Senado aplicando la exigencia de la Constitución Nacional: para el embajador, categoría A; para el ministro plenipotenciario, categoría B, y para el ministro plenipotenciario, categoría C.

No escapa al criterio de los señores legisladores lo que significa, para el Poder Ejecutivo nacional y para este Honorable Congreso, el tremendo perjuicio que importa para el servicio exterior la circunstancia de que transcurra un lapso tan importante entre los trámites que se requieren para la postulación de los funcionarios y el acuerdo que pueda prestar o no el Senado de la Nación.

Deseo señalar que la bancada de la Unión Cívica Radical va a proponer que —como en esta ley se incluye con acuerdo del Senado el ministro plenipotenciario categoría C— sea incluido el cargo de ministro consejero sin acuerdo del Senado. Esta proposición tiende a permitir que los funcionarios del servicio exterior de la Nación, más allá de las circunstancias políticas y de hechos que a veces son ajenos a su propia carrera, puedan llegar al máximo grado del escalafón posible, que sería el de ministro consejero.

También nos preocupa la creación de un órgano superior de asesoramiento en la política exterior, el Consejo Superior de Embajadores, al que yo denomino consejo de ancianos. Según el espíritu de esta ley sólo estarán en condiciones de asesorar con conocimiento los funcionarios de categoría A que hayan pasado los 65 años de edad. No dudo, señores diputados, que existen personas de gran capacidad y gloriosa

lucidez en edad mayor. Hay ejemplos notorios en nuestra vida política: Yrigoyen y Perón. Pero tampoco debemos dejar de reconocer que últimamente hay ejemplos notorios en el país de que la concertación de la experiencia con el trabajo fecundo y de investigación de los hombres de menor edad está dando frutos positivos a éste. No podemos crear lo que voy a denominar una gerontocracia en la Cancillería. No podemos aceptar que esta Cancillería esté, pura y exclusivamente, en manos de hombres que han transcurrido toda una vida al servicio de una política exterior, pero que por circunstancias de los años pueden estar desactualizados.

Si el señor canciller siente la necesidad de tener un consejo asesor, tal como se expone en este proyecto de ley, podría recurrir a las comisiones especializadas del Honorable Senado y de esta Cámara. Nadie mejor que nosotros puede asesorar al gobierno y al ministro de Relaciones Exteriores sobre política internacional, porque en definitiva nosotros somos los representantes del pueblo, y la política exterior se nutre de lo que los pueblos sienten y viven.

La bancada de la Unión Cívica Radical, que ha firmado el despacho de comisión en disidencia parcial, va a formular una serie de objeciones tendientes a lograr su modificación y de esa manera contar con un vehículo más eficaz para nuestra política exterior.

Si se lograra destruir la civilización dentro de los próximos treinta años, estoy seguro de que no va a ser consecuencia de una peste o de una guerra, sino el resultado de la falencia de la política internacional, pues ésta regula los actos y la vida de los pueblos. Ha pasado el tiempo en que los países querían actuar en forma prepotente el uno sobre el otro. Hoy estamos saliendo de la guerra fría para entrar dentro de la política del ahogo económico. Por ello es importante tener claridad conceptual sobre esa política y no solamente hay que definir una política exterior —con la cual se puede estar o no de acuerdo— sino que también hay que preparar una metodología para lograr concertar esa política exterior y llevarla a sus fines.

En medicina, un ignorante bien intencionado no es un médico sino un curandero, y en una emergencia puede matar al paciente. En nuestra época las ruinas de Hamburgo, de Berlín, de Hiroshima y de Vietnam se erigen como monumentos a la ignorancia en política internacional.

Nosotros debemos tratar de fijar una política clara. Tenemos la obligación de fijar los rumbos para que en la Argentina no tengamos a corto plazo ningún tipo de monumento como los que acabo de señalar.

La política exterior puede hacerse de poder cuando realmente hay poder político, económico y militar. Cuando no hay poder, la política exterior debe hacerse con razón, con justicia y con

precaución, porque una cosa es buscar hacerse fuerte y otra es buscar la provocación de la fuerza.

La Unión Cívica Radical entiende que la política exterior no es patrimonio de un partido político ni de un sector de la comunidad. La política exterior es la síntesis de todas las fuerzas que conviven y viven dentro de un país. Debe ser la síntesis apresurada en el orden internacional de lo que un país siente y vive.

Es por ello que no considero oportunas las declaraciones del señor diputado Fernández Valoni, miembro informante de la mayoría, cuando nos habla de una política exterior al servicio del justicialismo y de un proyecto nacional.

Me permito señalar, señor presidente, que aún no conocemos ese proyecto nacional, y si alguna vez lo llegamos a conocer y vemos que logra reunir y concretar todas las aspiraciones del pueblo argentino, la política exterior no estará al servicio de una ideología o de un partido sino al servicio del país todo.

Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen se da un episodio que se convierte en una página histórica de nuestra política exterior. En el año 1919, cuando el crucero «Nueve de Julio» llevaba a México los restos de Amado Nervo, al acercarse a las costas de un país hermano, la República Dominicana, se observa que en el mástil de la fortaleza de Santo Domingo estaba izada la bandera del usurpador. En ese momento el querido país hermano estaba ocupado por las fuerzas de los Estados Unidos de América.

En esas circunstancias el comandante de la nave de guerra, que había recibido precisas instrucciones del presidente Hipólito Yrigoyen basadas en el respeto por la autodeterminación de los pueblos, ordenó que no se disparasen las 21 salvas que correspondían de acuerdo con lo que ordenaba el protocolo diplomático. Sin embargo, a los pocos minutos, en unas ruinas de Santo Domingo un grupo de patriotas dominicanos izó la bandera de su país, que se encontraba usurpado. Entonces nuestra nave de guerra, que no representaba al gobierno radical sino al país entero, saludó con 21 cañonazos.

En recuerdo de este episodio en la ciudad de Santo Domingo hay una calle que lleva el nombre de Hipólito Yrigoyen, y en ella se ha colocado una placa que dice: «Gracias por dos horas de libertad». Por ese episodio no debemos rendir homenaje a Hipólito Yrigoyen, porque él en ese momento expresaba la voluntad creadora del pueblo argentino.

Vivimos un momento que hace necesario sumar voluntades y no marcar antinomias. Todos tenemos la responsabilidad de hacer la Argentina del futuro. Si vivimos dentro de una pluralidad ideológica debemos respetar nuestras creencias y ser conscientes de que en el devenir que nos queda, aunando todos los esfuerzos de los argentinos que tenemos la idea de una patria grande, independiente y de acuerdo con nuestros

dictados nacionales, podremos lograr una política de unidad nacional que se hace con realizaciones y no con slogans. (*Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Pereira). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Fonte.

Sr. Fonte. — Por error aparece mi nombre subscribiendo el despacho de la mayoría en el orden del día 1.121. Por las razones que acaban de exponer los representantes de la bancada radical debe entenderse que ese despacho fue firmado en disidencia. Además deseo aclarar que mi firma fue registrada en carácter de miembro de la Comisión de Previsión Social y no como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Formulo esta aclaración en mi nombre y en el de mi colega, el señor diputado Lencina.

Sr. Presidente (Pereira). — Quedará constancia de la aclaración que formula el señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Señor presidente: como surge claramente de las expresiones de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, el presente debate sobre la ley del servicio exterior argentino desborda indudablemente el marco meramente reglamentario del texto normativo proyectado. Ello es así por dos razones fundamentales que lo determinan: en primer lugar, por el momento político que atraviesan la República y el concierto internacional de las naciones; y, en segundo término, porque las motivaciones y las finalidades políticas que han de determinar en el orden internacional la aplicación del proyecto en cuestión han de ser, desde luego, mucho más importantes que el frío texto proyectado, que —repito— reviste características reglamentaristas.

Indudablemente el país atraviesa un tiempo de crisis: en lo político, en lo social y en lo económico. A nadie escapa la veracidad de este aserto, ni a los sectores del gobierno, ni a los de la oposición, ni a los políticos, ni a los gremiales, ni a los económicos.

La violencia, que aún se empeña tenazmente en sacudir los cimientos institucionales de la Nación; una desmedida inflación que ha determinado la pérdida del control financiero del país por parte del gobierno; y una situación social crítica nos hacen esforzar a todos en la búsqueda de soluciones comunes que permitan la defensa de las instituciones republicanas, a la vez que el logro del progreso material y espiritual de la Nación.

En este contorno del ámbito interno del país se procura definir para la Argentina una política exterior con pleno sentido nacional, bajo el signo de la denominada liberación por el movimiento político mayoritario. Este signo de la liberación nos obliga a algunas precisiones acerca de su contenido y del ámbito geográfico en que esta filosofía política se desenvuelve. Pienso

que las precisiones a las que en esta materia arribemos de común acuerdo, o tal vez en desacuerdo, en búsqueda de una síntesis final, han de ser sumamente útiles a la República para la obtención de una efectiva política independiente o al menos, constructivamente interdependiente cuando así deba ser.

El signo de la liberación aparece vinculado al Tercer Mundo, cuya composición política, así como la composición económica y social de los respectivos países, presenta manifestaciones de una señalada heterogeneidad y aun de actitudes ambivalentes y contradictorias de los respectivos países en el plano de las relaciones políticas y económicas internacionales, que vuelven a este espectro sumamente confuso para una ponderada evaluación de su eventual eficacia respecto de la Argentina.

En nombre del Tercer Mundo se han llevado a cabo guerras de liberación en los países de África y de Asia; pero en nombre también del Tercer Mundo se alientan el terrorismo y la subversión, y hasta se logran posiciones encumbradas en altos organismos internacionales para reivindicar derechos surgidos de una contienda bélica. En nombre del Tercer Mundo se afianzan a veces pretensiones de países productores de determinado mineral, mientras que en otros casos se reclama contra idénticas pretensiones que pueden perjudicar intereses de países aparentemente alineados en el mismo sector.

Frente a este esquema polivalente, heterogéneo y confuso del Tercer Mundo, nosotros tenemos, en cambio, una realidad concreta que abordar, un deber insoslayable que cumplir, una misión histórica que nos viene señalada desde el pasado, que se proyecta con una urgencia cada vez mayor en el futuro de nuestro pueblo y que es la responsabilidad de la hora.

Tenemos muy cerca nuestro al resto de la América latina, un continente ávido de progreso y de superación, un conjunto de seres humanos que reclama con ansiedad justificada un mayor bienestar. En tanto aparece proclamada o declamada como meta común la integración económica latinoamericana desde hace más de una década, y mientras el énfasis político exterior de este gobierno se pone en el logro de esta integración, advertimos una singular pobreza en la obtención de realizaciones concretas y una falta de actitud decidida para marchar progresiva y aceleradamente hacia la conquista de esta tan ansiada realidad para Latinoamérica.

La política exterior del actual gobierno presenta señaladas contradicciones en el orden mundial, como la apertura marcada hacia los países socialistas durante la administración del anterior ministro de Economía, y un retorno apresurado hacia Occidente durante la gestión del actual ministro de Economía, como si se hubiera aprendido que la ruptura de las fronteras ideológicas no se puede hacer únicamente en un sector.

La política del actual gobierno, que —como di-

go— es contradictoria en el ámbito universal, aparece reticente y declamatoria en el orden latinoamericano, donde no ha habido una actitud de convocatoria para la integración de los países de nuestro continente, en el que indudablemente corresponde a la Argentina un papel señero y rector. Diría que se actúa con un inexplicable complejo de inferioridad, porque quienes en mayor o menor medida hemos tenido oportunidad de advertir cuál es el real poder económico y político de negociación de nuestro país en el exterior no acabamos de comprender cómo a veces se prefiere hasta el desaire de naciones de menor entidad que la Argentina, alineadas en agrupaciones políticas y económicas.

Debemos marchar firmemente con el fin de imponer nuestro poder de negociación en mérito a la tradición jurídica, la capacidad económica y la necesaria voluntad política que nos asisten.

A esta falta de actitud de convocatoria sigue una consiguiente inexistencia de concreciones en los dos aspectos más importantes que la integración económica reclama de los países de América latina, que son la complementación industrial y la complementación tecnológica. Aparecen allí como casos aislados, y hasta objeto de una deficiente normativa jurídica internacional, los tratados de Yacaré y el del Río de la Plata, cuyos instrumentos normativos han sido objeto de cuestionamiento en oportunidad de su ratificación legislativa, y que además no son logros originales de esta administración. Pero, en cambio, aparecen como elementos seriamente amenazadores de nuestra soberanía, y en cierto modo hasta de la dignidad y de los principios de la moral pública, algunas contrataciones, como las llevadas a cabo en materia petrolera con Libia, y algún tratado, como el de la Organización Latinoamericana de la Energía, donde la Argentina renunció a su inalienable derecho a ser consultada para la explotación de los recursos naturales compartidos. Y por último se produce la delegación de la jurisdicción soberana de los tribunales argentinos en árbitros y jueces extranjeros, mediante la ley permanente de presupuesto.

Esto evidentemente contradice los últimos esfuerzos de la Cancillería para lograr en diferentes escenarios internacionales —por ejemplo, africanos, o de las Naciones Unidas— que para la explotación de los recursos compartidos se recurra a la consulta necesaria de los países interesados. Digo que estos esfuerzos aparecen contradichos, porque en los propios países protagonistas del hecho fundamental de la explotación de esos recursos —que son los países de la Cuenca del Plata— se niega este derecho que la Argentina trata de defender en otros foros frente a terceros.

En este orden de ideas es donde entiendo que debemos analizar cuáles son los fines a cuyo servicio debe estar el sector exterior de la Re-

pública. En esta materia quiero destacar dos aspectos fundamentales: uno, de carácter político y preferentemente diplomático, que consiste en la constitución de un cuerpo idóneo para el logro de acuerdos decisivos en búsqueda de las fundamentales finalidades políticas del país en el exterior; otro, de carácter económico internacional, donde la promoción de las exportaciones argentinas en el mundo y la integración latinoamericana constituyen dos objetivos fundamentales.

Pero si analizamos la marcha del aspecto político y diplomático en procura del logro de acuerdos concertados y con vistas al ejercicio de la influencia argentina para que en el orden político los países latinoamericanos, o aquellos que tengan intereses similares a los nuestros, constituyan grupos homogéneos que lleven a cabo una influencia decisiva en el orden mundial, advertimos que nuestro país aparece desubicado entre naciones que responden a diferentes ideologías, sin terminar de ejercer un papel protagónico en ninguno de los grupos y adoptando, por el contrario, actitudes duales o ambivalentes que la opinión pública no termina de explicarse.

Así se advierte con alguna sorpresa que frente a la nominación del secretario general de la Organización de Estados Americanos y ante la posibilidad de que esa nominación recaiga en el representante argentino en los Estados Unidos, el gobierno de la Nación adopta una postura de reticencia en el apoyo de esa designación que sería un factor indudable de orgullo para la Argentina, por encima de las calidades que puedan asistir al funcionario de turno.

En lo que atañe al segundo aspecto —esto es, el que se relaciona con el orden económico internacional— hay dos ejemplos de carácter coyuntural que van adquiriendo signo permanente y que son motivo de preocupación en nuestro país. Por un lado está la crisis del sector externo de la economía, motivada en parte por una situación mundial también crítica en orden a la valuación de la moneda y originada en los déficit crónicos de los balances de pago estadounidenses, y que se continúa con la crisis petrolera mundial.

Esta motivación, no obstante, asume rasgos mucho más alarmantes en los países donde la tasa de inflación supera más que con creces la de aquellos países a quienes se pretende adjudicar el carácter determinante de los problemas que afectan a nuestro territorio.

A esta inflación desmedida, acompañada de una recesión o sea de un estancamiento de la economía, de una falta de crecimiento y de expansión —que podría darse en alguna medida a favor de esa inflación y de la propia expansión de los medios de pago—, se agrega el desabastecimiento interno de productos fundamentales; y la falta de insumos consiguiente vuelve así a

desalentar a la producción; y en esta carrera cíclica se agrede a los sectores de la producción por la vía misma de esta política de precios y de esta política exterior. Agrávase aún más el cuadro porque en el marco externo de los acontecimientos internacionales se ha producido un cierre para las posibilidades argentinas en otros mercados que no han sabido ser ganados a tiempo.

Si a ello se suma la falta del auxilio internacional a nuestra economía, parece quedar demostrado que tampoco en esta materia se han logrado avances positivos en el orden internacional, ni por el concurso de los préstamos de organismos financieros internacionales, públicos o privados, ni por la radicación de capitales que —como lo ha reconocido la propia autoridad económica del país— no vienen a la Argentina. No hay proyectos de radicación de capitales extranjeros para la Argentina, pero hay en cambio magros proyectos de préstamos financieros que originan, naturalmente, un pesado servicio de amortización de la deuda que agobia a nuestro ya deficitario balance de pagos.

Esta crítica situación de la economía argentina, especialmente vulnerable en su sector externo, nos demuestra la urgente necesidad de revertir un proceso de estrangulamiento exterior reflejado en la balanza de pagos, y de afianzar el desarrollo de los capitales en el país con el concurso exterior sobre bases naturalmente ecuanimes y justas que garanticen el poder de decisión argentino.

Por otra parte, la formación de bloques económicos en el mundo, de cada vez mayor poder político y económico— y, por consiguiente, de mayor poder de negociación en todos los escenarios internacionales— nos persuade de la urgencia de aglutinarnos en un bloque de naciones que concurren al mundo económico internacional con un sólido y creciente poder de negociación, para emprender el camino de la integración económica con seguridad y no con la actitud acomplejada a que hicimos referencia hace unos instantes.

Pero desde el punto de vista humano, este conjunto de necesidades requiere algo quizás previo y mucho más importante. Es necesario formar un elenco estable en el país, capacitado para desempeñar estas altas tareas del Estado en la búsqueda de soluciones permanentes y que exceda el límite temporario de vigencia de un gobierno. Se han de encontrar de tal manera las respuestas idóneas a demandas, coyunturales, algunas y de estructura otras, que hacen a este convulsionado y distorsionado mundo económico de nuestro tiempo y a las relaciones políticas propiamente dichas del orden internacional.

Pero esto no se logra con este proyecto de ley y menos aún con la política llevada a cabo en la materia. Porque la existencia en el ámbito de la Cancillería de grupos de funcionarios que se

turnan en sus estadias en el país y en el exterior, permaneciendo menos tiempo en aquél, no da lugar a la posibilidad de formar elencos técnico-profesionales capacitados en el conjunto de las materias relativas al mundo de nuestro tiempo y a la desesperada realidad de muchos países por lograr condiciones superiores de progreso.

Y en tanto esto no ocurre, tampoco hay políticas permanentes elaboradas por funcionarios técnicos idóneos, que tengan una formación suficiente para abocarse luego a la tarea constante de análisis y de proyección de soluciones para los grandes problemas económicos y políticos de nuestro tiempo.

De ahí que el Instituto del Servicio Exterior —cuyo proceso selectivo de aspirantes, su formación y planes de estudio deben ser objeto de especial atención en su formulación, para que respondan precisamente a estos reclamos de nuestra época— debe servir también de centro formativo de funcionarios permanentes que en el país, con esporádicas y necesarias visitas al exterior, a los centros económicos, financieros y políticos del poder, elaboren las políticas permanentes de la República —sin tener que turnarse en su función con misiones diplomáticas en el exterior que les quitan la posibilidad de observar el panorama con la amplitud requerida— y proyecten las soluciones necesarias manteniendo contacto con los organismos representativos del país respecto de aquellas políticas a que hacíamos referencia.

En cuanto al proyecto de ley en sí, no innova mayormente respecto de las disposiciones legales vigentes. Introduce, sí, alguna modificación que motiva nuestra disidencia como, por ejemplo, la de los agregados laborales. Ninguna objeción nos merece la participación de representaciones sindicales o gremiales en la vida exterior de la República, ni en su vida interior. Pero lo que nos preocupa es que se quiera introducir con carácter estable y permanente, a representantes de un sector de intereses —muy respetable por cierto—, en una función que no le es atinente. Aceptamos que, en hipótesis determinadas y para funciones concretas, se pueda designar, en una misión en el exterior, a un funcionario especializado de la Cancillería en esas cuestiones o aun a un dirigente gremial, por razones políticas. Pero esto de establecer un privilegio sistemático en todas las embajadas creando un cargo de agregado obrero, en desmedro de todos los otros sectores de la vida social y económica, no parece tener otra explicación que alguna de corte demagógico o en todo caso corporativo, que la naturaleza de nuestra representación parlamentaria se niega a aceptar.

Por otra parte, la necesidad de la propuesta de la Confederación General del Trabajo para la designación inhibiría al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo para formular las designaciones del caso cuando la propuesta no fuera

hecha, lo cual parecería hacer depender de una entidad sectorizada la designación de estos agregados laborales previstos en la ley.

Y lo que es más grave: en el artículo 107 se delegan facultades exclusivas del Congreso en representantes del Poder Ejecutivo y de la C.G.T. para la elaboración de un estatuto especial que regle la actividad de estos agregados especiales. Recalco que ésta es función del Poder Legislativo, el que así quedaría al margen de la regulación correspondiente de la futura actividad de estos agregados. Y esto vuelve a ser peligroso en la medida en que al otorgársele carácter permanente a tales agregados no se asegure su debida capacitación e idoneidad para las funciones que puedan cumplir.

La introducción del Consejo Superior de Embajadores en el proyecto —lo que ha sido motivo de opiniones encontradas entre los legisladores— nos parece un rasgo meramente simbólico de la ley que, en definitiva, no incorpora ningún factor decisivo para la marcha de los asuntos de la política exterior, por cuanto sólo tiene un carácter accesorio.

Se incurrió en un error en el artículo 42 cuando se incluye a la disponibilidad entre las sanciones, mientras que más adelante se la regula entre los derechos o las posibilidades a que pueden acogerse los funcionarios del Servicio Exterior. De manera tal que sólo en un caso muy aislado podría ser tomada como una sanción.

Finalmente, en el texto normativo se neutralizan todas las ventajas derivadas del sistema de estabilidad, concursos y procesos selectivos cuando se da a la Cancillería ocho meses de plazo discrecional para designar funcionarios, sin reunir los requisitos de antigüedad ni haber cursado el servicio exterior. Si se considera la discrecionalidad con que ha sido aplicada la ley de prescindibilidad en las distintas áreas del gobierno y específicamente en el Servicio Exterior de la Nación, advertimos cuán peligroso resulta este nuevo plazo para designar funcionarios sin reunir los requisitos de la ley, cuando de lo que aquí se trata es de aplicar con objetividad y con criterio levantado un proyecto de ley que va a contar con la sanción del Congreso de la Nación.

Volviendo al aspecto inicial de nuestra disertación y al gran marco de la política exterior de la Argentina (donde debemos definir una actitud independiente pero, al mismo tiempo, una seria personalidad internacional —de la que hoy el país carece— al servicio del poder de decisión argentino, integrado en la comunidad latinoamericana, para así aparecer ante el mundo con un sólido y renovado poder de negociación puesto al logro de los grandes objetivos de progreso material y espiritual), nos parece necesario replicar algunas formulaciones del miembro informante de la mayoría.

Cuando el señor diputado Fernández Valoni se ha referido a la crisis de los imperialismos y a la necesidad de la ruptura de las fronteras

ideológicas, advertimos una especial y señalada crítica al imperialismo norteamericano, en tanto se agregaba como factor de progreso en las relaciones internacionales —si no hemos entendido mal —la influencia chino-soviética, y se decía que era preferible un agregado cultural en Pekín o Moscú y no en París, Londres o Washington. Creemos que esto habla mal del principio de la ruptura de las fronteras ideológicas, porque si de rechazar los imperialismos se trata parecería necesario rechazar ambos extremos imperialistas y asumir una actitud independiente en el orden económico internacional.

Por otra parte, la refirmación del principio que consubstancia y que asimila la doctrina nacional, en este caso del servicio exterior, con la doctrina nacional justicialista, vuelve a hacernos temer a quienes creemos en los valores de la democracia que por lo menos sectores responsables del movimiento político mayoritario no terminan de creer en los beneficios de ésta y, en cambio, prefieren ciertas formas corporativas que cada vez se insinúan con mayor peligrosidad en el ámbito político argentino.

Si atendemos a que uno de los propósitos del actual gobierno es la reforma de la Constitución, hemos de observar cuán peligrosos resultan estos engendros corporativos, que se intenta introducir por diversas vías, para la vida de la democracia representativa y la plena vigencia de las instituciones republicanas.

Con estas observaciones de índole general en cuanto a la filosofía de la política exterior argentina y al articulado en particular, dejo expresado nuestro voto en disidencia parcial con el proyecto del Poder Ejecutivo y de las comisiones. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: no por obvio dejaré de señalar que la función específica de este Cuerpo es la de redactar y aprobar las leyes, y quiere el Reglamento que el debate que se origine alrededor de las mismas se enmarque en el análisis de la letra de la ley, de su articulación y de sus objetivos.

Tenemos inicialmente que señalar que este marco ha sido desbordado. Se trata de una ley formal y no substancial; de una ley por la cual se pretende instituir un régimen orgánico para la admisión, promoción y retiro del cuerpo del servicio exterior, incluyendo deberes, derechos, prohibiciones, cláusulas especiales para traslados, formación de un instituto de preparación del cuerpo del servicio exterior, ventajas asignadas a los diplomáticos frente a las disposiciones aduaneras, situación y *status* jurídico de sus familias, un organismo consultor y asesor del ministro de Relaciones Exteriores y otras fórmulas que se vinculan exclusivamente con el aspecto reglamentario.

De manera tal que esta ley no señala una política. No hay un solo artículo de la misma, con exclusión del 1º, poco sobrio, en el que se pretende la definición del servicio exterior, que diagrama o fije una política, ni que la proyecte ni adopte. De modo que no vemos cómo ha podido ser traído a este debate el análisis de una determinada política exterior del gobierno de la Nación, lo que evidentemente estaba fuera de tema. Y no solamente lo ha hecho el señor miembro informante sino también algunos de los diputados que analizaron el proyecto de ley.

Yo diría que el señor miembro informante no fue ni intérprete ni exégeta de la ley, porque no habló de la ley, o si lo hizo, fue incidental y ligeramente. En cambio, introdujo determinadas consideraciones, algunas infortunadas y otras de mal gusto, que no podrían disimularse.

Nos habló, en primer término, acerca de que el proyecto moviliza una filosofía de independencia. Me pregunto en qué artículo del proyecto la encontramos. Se trata sólo de un esquema, nada más, de la funcionalidad de una rama administrativa. ¿Dónde está la filosofía de la liberación? Esta ley ni siquiera es un instrumento, porque dicese que instrumento de una política es aquella ley que inequívoca y ciertamente está destinada a servirla, es decir, la que enfoca exclusivamente las metas de esa política.

Pero esta ley vale para cualquier política. Es como si se tratara de una máquina trituradora de granos con la que se supone que se va a obtener café molido en la parte final del mecanismo si se pone grano de café en el buche.

Aquí caben todos los tipos de política, precisamente, porque una política sin diagrama es solamente un sistema o un régimen para la armazón de un cuadro que después puede servir a una determinada orientación.

Pero, de cualquier manera, no obstante haber señalado exceso y desborde, no podría dejar de considerar algunas de las apreciaciones del señor miembro informante que parece ser —para su atenuación— que no son compartidas por todos los miembros de las comisiones especiales intervinientes.

Decía el señor miembro informante, dando lugar a un interrogante que planteaba el señor diputado Natale, que esta hora nos encuentra con un proyecto nacional ya lanzado. ¿Es posible que los diputados de la Nación, que estamos en el más alto nivel político de decisión nacional, ignoremos cuál es el proyecto nacional del que nos habla el señor miembro informante? Se le podría preguntar qué dice ese proyecto nacional, si es secreto de pocos, sobre la política agropecuaria, que la ignoramos; qué dice sobre la política minera, qué dice sobre la reactivación de nuestra industria decadente, qué dice sobre la futura política fiscal o impositiva; es decir, sobre cada uno de los rumbos de las políticas nacionales.

Tendríamos muy alto interés en saber de qué proyecto nacional se está hablando para no pasar por indiferentes ni por ignorantes. Y entonces, si yo tuviera razón, en el sentido de que oficialmente no se ha dado cuenta de ningún proyecto nacional, al que por lo menos nosotros no hemos contribuido en su confección, estaría de más el aludirlo o el invocarlo como si fuera una cosa hecha, ya lanzada y de conocimiento público.

Decía el señor miembro informante que esto llevaría a imponer el proyecto de justicia social para una comunidad organizada universalmente. Como esto ha sido motivo de objeción por parte del señor diputado Marino, adhiero a lo que él ha manifestado. Si este concepto de justicia social es el valor común y no la diferenciación programática de un partido político en particular, con sus singulares interpretaciones, entonces sí cabría; pero no tendría lugar si es que a través de un proyecto del Congreso de la Nación, considerado y tratado por comisión, de conformación pluripartidista, podría filtrarse la aseveración de que se está trabajando exclusivamente para concretar el ideario de un partido político en particular.

El señor miembro informante ha sostenido en una de sus afirmaciones, también excedido del continente, que el Estado liberal hacía trascender por sobre la conducción política a los ministerios de Guerra y de Marina, y analiza seguidamente: «Es así que como resabio de todas aquellas estructuras el agregado militar es producto de la política exterior de la fuerza y no el agregado de defensa, producto de la política interior del pueblo». Esta acre observación para el pasado de nuestro país tampoco podría ser disimulada. Habrá ocurrido con las fuerzas armadas, como en todos los otros sectores, que se dieran expresiones que no interpretaran cabalmente el sentido nacional, pero que eso se generalice con todo el pasado de nuestras fuerzas armadas es injusto e históricamente ingrato. Nosotros no lo podríamos aceptar, y sobre este punto señalamos la seria discrepancia que existe con respecto a los valores de nuestra tradición entre la opinión del señor miembro informante y el discurso presidencial del 1º de mayo, en donde se dejó muy claramente expresado que el ser nacional no podría tener existencia ni prosperar si no se mirara en los cristales de su pasado.

Y voy a citar no más, sin réplica. La réplica estará en los centros de cultura, en la conciencia ciudadana sin rencor, en las expresiones de la elevación espiritual sin resentimientos.

Cuando se dice que los agregados de cultura en estos momentos —la afirmación está dirigida a estos momentos y no sólo al pasado— importan la cultura de los imperios y exportan la cultura de Borges, siento una sensación de temor interior.

Si en este momento en que es preciso afirmarnos, en que es necesario tener plena seguridad en nosotros mismos, en que es indispensable quintaesenciar el espíritu nacional, le damos este mal trato a las más altas expresiones de la cultura, que conforman, definen e interpretan el espíritu nacional inequívoca e indudablemente, ¿qué le puede pasar a este país?

Si de esta manera queremos borrar lo selecto y lo depurado, si nos vamos a convertir de pronto en enemigos de lo exquisito del espíritu, si nos va a molestar que alguien en la cumbre intelectual produzca lo que millones de seres no pueden producir porque no tienen la tensión interior y sus vivencias para poder trasladarlas con lenguaje universal a todos los seres de la tierra, si los argentinos vamos a decir que se exporta el pensamiento de Borges como si habláramos de una mercadería, cabe preguntar: ¿qué es esto, señor presidente?

Creo que habría que tomarlo irónicamente. Diría que es el segundo intento en muy poco tiempo en que se ha querido repartir plumas en el seno del Parlamento.

Por último, dice el señor miembro informante que han deshechado la idea del tribunal de honor porque conceptúan que se trataría de una estructura o de un instituto medieval. Esto me llama la atención particularmente porque la introducción del tribunal de honor la hace en su proyecto el Poder Ejecutivo, firmado a la fecha de su emisión por el ex presidente Juan Domingo Perón. Sin pretender incursionar en el seno del partido oficialista, me parece que es una variante de la verticalidad en cuanto a la concepción del honor. Esto lo digo fuera del tema para no dejar sin contestar algunas aventuradas apreciaciones.

Vamos ahora a analizar este proyecto de ley, respecto del cual algunos señores diputados se han preguntado si ciertamente da garantía de inamovilidad. Otros señores legisladores se han preguntado si ciertamente da garantía de un justo ascenso, de un escalafón, de una promoción ecuánime.

Como dijera el señor diputado Fernández Gill, es cierto que se da una línea tradicional, porque con esto nada se inventa. La ley 12.951 y otras disposiciones siguientes, también reglamentarias como ésta, trataron casi todos los puntos, y en algunos casos se reproducen textualmente algunos de sus artículos. No obstante esto, frente a la supuesta promesa en cuanto al ingreso, a la promoción y a la inamovilidad que daría la ley, nos encontramos con las disposiciones de los artículos 5º, 6º y 7º.

El artículo 5º da al Poder Ejecutivo la facultad de designar en la más alta categoría —en las jefaturas, según dice otro artículo— al 30 por ciento del personal para los cargos existentes en la categoría A, fuera de las condiciones establecidas en la ley. Aquí no se dice —y sería muy importante que el señor miembro informante lo aclarara— si esta designación del Poder Eje-

cutivo requerirá o no el previo acuerdo del Senado, porque la condición general establecida por el artículo 12 es que «el ingreso, promoción y separación de los funcionarios del servicio exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación». Pienso, entonces, que debe entenderse que esa designación fuera del escalafón hecha por el Poder Ejecutivo en la primera de las categorías no escapa a la exigencia del acuerdo del Honorable Senado que impone el artículo 12.

Además, se quebranta el escalafón en el artículo 69 al establecerse que el Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al cuerpo permanente del servicio exterior de la Nación. Y en el artículo 79 la facultad se concede al ministro de Relaciones Exteriores, aunque respecto de otras categorías, pero también desatendiendo la carrera diplomática.

Frente a estas variantes podríamos preguntarnos si existe una garantía para la promoción dentro del cuerpo diplomático, o si esa garantía existe relativamente.

Lo mismo ocurre en cuanto a la inamovilidad. Una ley de esta naturaleza no puede dejar un resquicio por donde se puedan filtrar con carácter de excepción la mayoría de los casos, haciendo que la excepción se convierta en generalidad.

En virtud del inciso a) del artículo 18 podrá separarse a los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas por el artículo 11, previo asesoramiento de la junta calificadora. Es decir que se da amplio margen de interpretación acerca del mantenimiento de las condiciones requeridas para militar establemente en el cuerpo diplomático. Y se le da facultad de separación de funcionarios del servicio exterior al Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pero de cualquier manera, aun cuando se establezca que debe ser con acuerdo del Senado —artículo 12—, no es menos cierto que por esa vía puede perder el derecho a la inamovilidad todo el personal del servicio activo exterior de la Nación.

Con esto quiero significar —y ya se ha dicho— que el proyecto en consideración no va dirigido ciertamente a garantizar en plenitud la inamovilidad del personal, el ingreso en las condiciones requeridas y los ascensos o promociones justos.

En algunos de los artículos observamos, señor presidente, una muy mala redacción, por ejemplo, en el artículo 20. La parte inicial de todo artículo debe tener siempre relación directa —me refiero a la estructura gramatical— con cada uno de los incisos. El artículo 20 dice: «Son funciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación... c) Los funcionarios del Servicio Exterior...; d) Sin perjuicio de

las facultades previstas...». Por lo tanto, no tienen gramaticalmente ninguna relación con el párrafo inicial, que orienta todo el artículo.

Por otra parte, más de una vez nos hemos preguntado cuál podría ser la fórmula para tener conocimiento fiel de lo que realizan nuestros representantes diplomáticos. En el proyecto se arbitra una exigencia que no considero idónea, que es la del artículo 21, inciso f), que aunque está bien intencionada no es tan rígida como debiera serlo. Impone: «informar periódica y documentadamente sobre los diversos aspectos del Estado ante el que están acreditados».

Una buena ley de este tipo debe exigir que los jefes de embajadas y de misiones hagan un informe comprensivo de ciclos ciertos y que incluso tal informe tenga el carácter de pieza pública, con acceso a cualquier funcionario, a cualquier representante del pueblo y hasta a cualquier ciudadano que pueda tener legítimo interés de conocer qué hacen sus representantes oficiales en el extranjero.

En el artículo 21, inciso r), no obstante que comprendemos algunas exigencias para la conducta de los agentes del servicio exterior, advertimos que existe una seria limitación a la libertad al requerirse o imponer la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que el agente contraiga matrimonio. La fórmula debió ser otra; cuando más, establecerse condiciones mínimas dentro de las cuales el matrimonio de un diplomático deba celebrarse.

El capítulo III trata del Consejo Superior de Embajadores, organismo que —no obstante alguna crítica que aquí se ha formulado— consideramos un buen instituto, ya que es conveniente que quienes han adquirido experiencia, tras una larga vida de actividad, continúen siendo servidores del Estado en la materia de su conocimiento a través de ese cuerpo asesor. Pero señalamos al señor presidente de la comisión y miembro informante del dictamen que en el proyecto no aparece la forma de integración de aquel organismo respecto a la autoridad para designar a los miembros de este Consejo Superior de Embajadores, vacío legal que convendría cubrir.

Con respecto al capítulo XI consideramos una buena innovación la creación de un instituto, que incluso signifique financiación para los estudios, con el que se prepare, se discipline y se conforme al futuro agente del servicio exterior. Esto es muy importante porque, como aquí se ha dicho, los éxitos de la diplomacia en esta época los logran aquellos pueblos que tienen personal especializado y permanente, citándose al respecto el ejemplo de algunos Estados que desde hace treinta años tienen el mismo personal con una misma orientación, una misma formación y una misma política.

Con relación al artículo 99 nos preocupa que, por conexión con el artículo 105, el Ceremonial del Estado centralizado anule a todas las orga-

nizaciones similares que puedan existir en otras reparticiones. Es posible que nosotros estemos en un error si tal disposición se refiriese a las oficinas del ceremonial en el extranjero, en cuyo caso la norma sería procedente; pero si de lo que aquí se trata es de la centralización del ceremonial de todas las reparticiones del Estado en el interior del país, es indudable que constituiría una invasión a otras ramas de la administración en las que la conducción del ceremonial responde a razones específicas; y no vemos los motivos por los cuales el jefe de ceremonial de otro ministerio tendría que ser necesariamente substituido o reemplazado por un único jefe de ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por último, sumándonos a la observación que ya formularan otros señores diputados —entre ellos el señor diputado Balestra, a cuyos fundamentos adherimos—, no vemos muy claramente las razones por las que se hace el agregado del artículo 99 y se introduce en la conformación del cuerpo diplomático nacional a delegados obreros. Y lo decimos con muy buena fe, porque ni el proyecto del señor diputado Gallo, ni este dictamen que lo recoge según el informe, aclaran cuáles habrán de ser las funciones de los delegados obreros.

El proyecto del señor diputado Gallo, en el artículo 39, parecería decir que no van a cumplir funciones diplomáticas sino cursos de aprendizaje, porque dice: «Créase en el Ministerio de Relaciones Exteriores el curso de agregados laborales para perfeccionamiento de éstos en la carrera diplomática». Suponemos que esto está limitado a lo interior, porque una vez que el delegado obrero es designado para una embajada, ya no va a seguir cursos sino que va a cumplir una función. ¿Y qué función va a cumplir el representante de un sector del país? Cuando se sabe, considerando el promedio de los delegados obreros, que no hay una especialización determinada, ¿con quién o con qué organización va a hacer contacto el delegado obrero? ¿Acaso va a substituir al jefe diplomático en la representación de la sensibilidad y del pensamiento de su pueblo? Si existiera una línea política que se quisiera transmitir a otros Estados en las relaciones diplomáticas, ¿no es válido el contacto del señor embajador y de los demás funcionarios? ¿Es necesaria la presencia del delegado obrero? ¿No resultaría mucho más importante que se enviaran representaciones de técnicos de alto nivel? Por mi experiencia en países extranjeros tengo particularmente noción de la extraordinaria utilidad que tendrían representantes técnicos y científicos de las universidades, de las organizaciones empresarias, de las escuelas técnicas, porque a este nivel y por este conducto se puede dar un útil intercambio de las técnicas de los distintos países.

Pero sigo preguntándome —y sería importante que el señor miembro informante lo aclarara— qué función va a ir a cumplir un delegado obrero en una embajada del Estado, pregunta que dejo en suspenso hasta la oportunidad en que el señor miembro informante lo aclare.

Sr. D'Angelo. — No irá para aprender sino para enseñar.

Sr. Falabella. — Yo creo que en eso tenemos que seguir las normas tradicionales. Que no se le ocurra a los obreros pilotear un avión, suponiendo que tienen derecho y aptitud para todo, porque entonces sí van a perder el equilibrio.

Sumándome ahora a una observación, que es seria porque está ligada con otros aspectos atinentes a esta Honorable Cámara, señalo que el artículo 107 delega una facultad reglamentaria en un cuerpo que estaría integrado por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y por la Confederación General del Trabajo. No creo que sea lícito que el Congreso de la Nación pueda dar esta facultad de reglamentar a quien no es un poder atribuido de esa facultad.

Y viene al caso una deformación similar que opera también como un peligroso antecedente. Hace poco tiempo la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por medio de su señor presidente —si es que la versión periodística es exacta—, puso en funciones a una comisión asesora sectorial o de origen sectorial. Cabría preguntarse si el señor presidente de una comisión está facultado para designar asesores y para ponerlos en su cargo, y además cabría preguntarse si la comisión necesita asesores de ese tipo.

Y además de este interrogante, ¿no equivaldría a reconocer públicamente que el Honorable Congreso de la Nación no está dotado de aptitud suficiente para legislar y que los señores representantes del pueblo no pueden por sí y directamente realizar la tarea para la que fueron convocados, máxime cuando el sector que ha constituido o integra esa comisión de auxilio asesora es un sector que a su vez ha nominado a ciudadanos argentinos para ser diputados de la Nación, oportunidad en la cual debió hacerse la selección que ahora se pretende, incluyéndose en las listas a los hombres que tenían conocimiento técnico para la formación de las leyes?

De manera tal, señor presidente, que tenemos que entender que es necesario, para el prestigio del Parlamento, aclarar estas situaciones y que corresponde decidir que ninguna comisión especial de la Cámara posee la facultad de designar a terceros con carácter de asesores, dárles el título e investirlos de facultades.

Sr. Ponce. — Me permito señalar, señor presidente, que el señor diputado está fuera del tema.

Sr. Falabella. — El ochenta por ciento de un discurso que hemos escuchado ayer estaba fuera del tema y no se tuvo el escrúpulo que ahora se tiene para señalarlo.

Concluyo con estas observaciones, señor presidente. En la discusión en particular nuestro bloque hará las proposiciones rectificatorias del despacho.

Sr. Davico. — Pido la palabra para una breve aclaración referida a las expresiones del señor diputado Falabella.

Sr. Presidente (Pereira). — Para una breve aclaración tiene la palabra el señor diputado Davico.

Sr. Davico. — Señor presidente: cuando hace breves momentos ingresé a este recinto, alcancé a escuchar algunas palabras vertidas por el señor diputado Falabella que hacían alusión a la presidencia de la Comisión de la Vivienda, que tengo el honor de ejercer.

Debo aclarar al señor diputado Falabella que todo diputado de la Nación tiene facultades para nombrar asesores, porque el hecho de ser legislador de la Nación no significa ni el derecho ni la obligación de que sepa legislar en todas las materias. Es por ello que tenemos facultades para pedir la colaboración de los asesores que nosotros creamos necesarios.

Si el señor diputado Falabella se siente molesto, debe ser sin duda porque será propietario de varios departamentos y resultará perjudicado cuando la ley de alquileres que estamos estudiando entre en vigencia.

Sr. Presidente (Pereira). — La Presidencia invita a los señores diputados a no realizar alusiones personales.

Sr. Falabella. — Si me permite, señor presidente...

Precisamente iba a decir que no me he referido al señor diputado Davico, por quien tengo una alta estima; me he referido al presidente de la Comisión de la Vivienda, y de ninguna manera el señor diputado debe considerar que mis expresiones constituyen una alusión personal.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Rafael.

Sr. Rafael. — Señor presidente: a esta altura del debate ya se han oído muchas voces distintas aunque coincidentes en lo fundamental, pues todas han revelado la preocupación de que nuestro país tenga un servicio exterior eficiente y que responda a una política nacional efectiva.

No quiero analizar si estamos en presencia, simplemente, de una ley formal, como se ha preopinado. Pienso que aun admitiendo esa calificación, no es una ley neutra, sino que ha sido concebida para servir a una determinada política exterior argentina. Por ello es que, sin entrar en aspectos pormenorizados de la ley, he de centrar mi preocupación en lo que caracteriza al mundo actual y en cuál debe ser esa política exterior argentina para la que debe ser-

vir la ley que habremos de votar esta noche, aunque soy un convencido de que la eficiencia del servicio exterior argentino no depende de un acto de legislación.

El mundo actual se caracteriza por una consolidación de las soberanías nacionales y por una estructura interdependiente de alcance universal. Es cada día mayor la evidencia de que los problemas nacionales trascienden las fronteras de un país. He ahí la importancia creciente que adquieren las relaciones internacionales, con sus cambios constantes y alineamientos a escala continental y universal. Se debaten problemas vinculados con la integración económica, la cooperación internacional, las agrupaciones regionales y el comercio mundial. De la solución que se dé a estos problemas depende el porvenir de muchos pueblos y el futuro de muchos millones de hombres.

Nuestro país, enclavado en América latina, debe fortalecer los vínculos con las hermanas repúblicas latinoamericanas por ser éste el ámbito natural de nuestra presencia internacional. Somos un pueblo joven, empeñado, al igual que las demás repúblicas latinoamericanas, en completar nuestra soberanía política mediante la independencia económica.

Los pueblos atrasados y dependientes están siempre expuestos a las fluctuaciones de una economía exterior. Por eso resulta necesario encarar un enérgico plan de expansión económica basado en el desarrollo de nuestros recursos naturales.

Ya el estadista John Kennedy, cuando definió a América latina, dijo que era la zona más crítica del mundo; pero agregé, y esto es lo más importante: aquellos que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta. Los que hacen imposible la revolución pacífica son los que se aferran a un pasado cuya caducidad se advierte y que irremisiblemente está condenado a cambiar.

Las crisis que afectan al mundo subdesarrollado afectarán tarde o temprano a las naciones desarrolladas. Es la revolución científica y tecnológica que acerca a los pueblos hacia un destino común. Los planes de desarrollo social condicionan el desarrollo económico, que requiere de los conductores de los pueblos audacia e imaginación para enfrentar con valentía y con coraje el desafío de esta hora. Por ello es que sorprende y llena de indignación constatar que una potencia occidental presta «ayuda» para mantener un estado de beligerancia que sembró la muerte y dejó a miles de refugiados sin familia, sin techo y sin pan.

Podemos también señalar el hecho histórico contemporáneo de la independencia política del mundo colonial, pueblos éstos que buscan consolidar la soberanía política mediante la independencia económica. Todo ello motivó la aparición de lo que se llama Tercer Mundo. Aunque milenarios, se trata de pueblos jóvenes en la conquista

de su independencia política, que integran el Medio Oriente y el África. En tanto, las repúblicas latinoamericanas llevan más de un siglo de independencia política, pero aún persisten en la lucha por lograr la independencia económica para terminar con la dependencia que agobia y que oprime.

Las antiguas colonias afroasiáticas no quieren tomar partido en el conflicto ideológico entre las grandes potencias. La tercera posición implica la lucha contra todo tipo de imperialismo, aunque algunas de las naciones hayan adoptado un régimen más o menos socialista. Tienen un signo común, que es la neutralidad, y una ideología, que es el nacionalismo, que se manifiesta en el no alineamiento.

Esta tendencia por la liberación une a los pueblos afroasiáticos del Tercer Mundo con los pueblos latinoamericanos. Por ello es que constatamos que en el panorama político internacional la tendencia está encaminada hacia la afirmación de un proceso político-económico nacional, y la supremacía mundial en el campo militar ha sido superada por la disputa en el campo de la competencia económica y tecnológica.

Todo ello tiene incidencia en nuestro país en razón de esa interdependencia del mundo actual de que hemos hablado. En un pasado reciente le ha faltado a nuestro país una perspectiva nacional para el análisis de los sucesos internacionales. Nuestra política exterior debe ser trazada y ejecutada al servicio de una política nacional. Si uno de los objetivos de la política nacional es la ruptura de la dependencia externa debemos alterar profundamente las líneas tradicionales de la política exterior argentina. Si queremos pasar de una economía dependiente a una economía en expansión debemos comenzar por romper el esquema de la división internacional del trabajo —y con ello una modificación en el tipo de relaciones que vinculaba a nuestro país con el área europea—, acentuando nuestras relaciones con los países del Tercer Mundo para una acción solidaria y eficaz en la defensa de nuestras materias primas.

En forma paralela al proceso interno nacional debe girar la política internacional, sin subordinación a pronunciamientos ideológicos, manteniendo la libertad de decisión, elaborando una estrategia internacional a partir de su ámbito natural, que es Latinoamérica, sin pretender ni admitir liderazgos cuya presencia ya no admite el múltiple movimiento de afirmación nacional, que sabe bien que detrás de esas ideologías se ocultan siempre pequeños intereses de facción o grandes intereses antinacionales.

La empresa continental es nuestra empresa.

La Argentina que muchas veces quiso evadirse de sus contornos geográficos y proyectarse hacia Europa, la Argentina enajenada, la Argentina indiferente, la Argentina en otra cosa, debe volver sus ojos hacia su ámbito natural, sin añoranzas de metrópoli, debe proyectarse para el

reencuentro de sus hermanos latinoamericanos y reconciliarnos con nosotros mismos para la gran empresa.

Latinoamérica unida, superando sus contradicciones, haciendo jugar todas sus energías en el plano mundial, junto a las naciones afroasiáticas, liberadas unas y oprimidas otras, debe elaborar una estrategia nueva y de tono positivo, poniendo una genuina marca en nuestro tiempo y debe contribuir a hacer más digna la vida de las futuras generaciones.

Por ello es que celebro la sanción de este proyecto de ley que voy a votar. Pero lo celebraría mucho más si esta ley fuera el instrumento idóneo para servir a una política nacional que respondiera auténticamente a los intereses nacionales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Señor presidente: quiero decir unas pocas palabras con respecto al tratamiento de este proyecto de ley en lo que pueda rozar la consideración del tema de la política exterior nacional. El planteamiento del proyecto de ley en consideración de ninguna manera da pie para entrar en consideraciones sobre el diseño de una política exterior nacional ni la estrategia de la política continentalista.

Nos parece importantísima y decisiva la consideración y ventilación de estos temas. Ojalá tengamos la oportunidad de poder centrar la discusión de estos puntos relacionados con los más elevados intereses del país.

Quede pues en claro que no creemos que en la oportunidad de este debate deban ser puestas en consideración las definiciones —como el señor miembro informante lo ha hecho, quizá en una expresión o en un propósito de dar un marco teórico de referencia, un telón de fondo donde debe insertarse este proyecto. Evidentemente, no es afortunada la temática asumida por el miembro informante para fundamentar el proyecto en consideración.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Lucena. — De la exposición realizada por el señor miembro informante se desprende que este proyecto de manera alguna coarta o entorpece las estrategias que con toda razón y derecho tiene elaboradas en esta coyuntura histórica el gobierno nacional. Interpretamos, pues, que este proyecto haría viable el desarrollo de esas estrategias por parte del Poder Ejecutivo, y entendemos que este instrumento así elaborado facilitaría el control de esas estrategias a nivel internacional. En tal sentido somos respetuosos de esa posición y desde ya anticipamos el consentimiento y nuestro apoyo a este instrumento legal que —reiteramos— a juicio del señor miembro informante no ha de entorpecer la política oficial nacional. Pero de ninguna manera puede

extraerse del proyecto de ley en consideración el encuadramiento de una política internacional o la institucionalización de una estrategia global dentro del sistema latinoamericano continentalista.

En particular, me voy a referir a la institucionalización de ciertos dispositivos, respecto de los cuales no alcanzamos a comprender su fundamentación, para que luego el señor miembro informante tenga oportunidad de dar respuesta a algunos interrogantes y dudas que surgen de la redacción de esta norma legal.

En primer término, queremos dejar aquí expresado nuestro firme apoyo a la sanción del artículo 99, pues aunque disiente con el texto enviado por el Poder Ejecutivo, tal como está proyectado en el dictamen de la mayoría, queda perfectamente fiel a la intención del mensaje del Poder Ejecutivo en cuanto pretende la incorporación al servicio exterior de agregados laborales. Nuestro apoyo al artículo 99 se fundamenta desde dos puntos de vista: el primero, por lo que el trabajo importa como valor fundamental dentro de la economía del país, y el segundo, porque este trabajo organizado a través de las fuerzas sindicales tiene una respuesta política que dar dentro y fuera del país y tiene un puesto que ocupar en el servicio exterior, para bosquejar y coadyuvar no solamente una política global nacional sino de sector. Al trabajo le cabe un lugar importante en la formulación de la política nacional y, por ende, en las formulaciones de las políticas internacionales en el área específica.

Nosotros hemos sostenido en oportunidad de considerarse la ley de contrato de trabajo que las fuerzas del trabajo están en el deber moral de dar respuestas políticas al país. Ello no implica de ninguna manera crear una confusión de planos entre lo que significan los intereses sindicales y la obligación de suministrar al país el apoyo necesario para la búsqueda de otras soluciones que no están sólo dentro del marco estrecho de las conquistas sindicales, sino que hacen a la conquista de los objetivos fundamentales vinculados con la liberación del país.

En nombre de mi bloque señalo que no disiento con que sea la Confederación General del Trabajo la que proponga ante el requerimiento del ministerio competente. Esta es la voluntad de la clase trabajadora, es la voluntad de la clase organizada del país.

Hemos sido coherentes en el seno de la Honorable Cámara porque ya en oportunidad de tratarse el paquete de medidas económicas e impositivas, sostuvimos la necesidad de dar entidad y jerarquía representativa a la Confederación General del Trabajo y no así a otra institución que quiso equipararse con el mismo nivel de jerarquía.

Aceptamos a la C.G.T. como el instrumento organizado que representa auténticamente los intereses de la clase trabajadora. En tal sentido

reiteramos nuestra posición de reconocimiento de la legitimidad de que surja de su seno la elección de estos agregados especiales.

La redacción del artículo 10 del proyecto plantea una primera duda. Se dice en él que «el Poder Ejecutivo podrá designar agregados especializados...». Y más adelante, en el mismo artículo, se determina que «este servicio de agregados especializados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen. Formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango protocolar».

La redacción de ese último párrafo del artículo modifica substancialmente la iniciativa del Poder Ejecutivo. En consecuencia, solicito que el señor miembro informante aclare los siguientes aspectos: por un lado parecería que se establecen canales paralelos al jefe de servicio en abierta contradicción con una disposición contenida en el mismo proyecto, en virtud de la cual el jefe de la misión es el que representa a la República y a él están subordinadas todas las autoridades que integran la misión diplomática (artículo 96).

Por otro lado, y ésta es la segunda duda que se plantea, el Poder Ejecutivo en su proyecto excluye la dependencia directa única y expresamente en lo atinente a las fuerzas armadas. Pensamos que dentro del espíritu del mensaje esto ha sido así por el hecho que aquéllas se vinculan con la seguridad y soberanía del país. Por lo tanto, hay problemas reservados a estas áreas que deben mantenerse en estricta reserva y secreto.

Se justifica, entonces, que todo eso pueda ser objeto de un tratamiento directo con los mandos naturales y con las autoridades competentes en el área de la defensa nacional en resguardo de los intereses que hacen a soberanía territorial de nuestra patria.

Lo que sucede es que esta especificidad y este tratamiento particular referido a las fuerzas armadas se extiende en el dictamen de la comisión a cualquier otro agregado especial, pero con una contradicción al final del párrafo donde toda esa documentación debe ser pasada por el visto bueno y el informe del jefe diplomático. Para que quede perfectamente aclarado el sentido de esta disposición quisiera que el señor miembro informante nos dijera si con esta redacción no estamos creando, en primer lugar, canales paralelos al jefe de la misión diplomática y, en segundo término, si no estamos dejando de lado el tratamiento directo por parte del Poder Ejecutivo de aquello que concierne a la soberanía y a la seguridad del país.

Deseo vincular los artículos 99 y 10 con la redacción que el dictamen de la comisión ha dado al artículo 105, que se menciona como artículo nuevo, pero que en verdad está formado por párrafos de otros artículos insertos en el proyecto del Poder Ejecutivo. Dice así el primer párrafo del artículo 105: «Los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los 30 días de la publicación de la presente».

El artículo 96 es precisamente el que hace referencia al jefe de la misión, y expresa que «será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado y, en virtud de tal investidura, les serán subordinados jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal».

Si las exigencias del artículo 105 están fundadas en lo previsto en el artículo 96, que ni siquiera excluye a los niveles ministeriales nacionales, ello refuerza mis dudas en cuanto a la correlación del artículo 105 que comentamos, con la directa dependencia de las agregadurías especiales con los ministerios de origen.

El último párrafo de este artículo 105 también suscita interrogantes. Dice que «igualmente, en el plazo y forma que establezca la reglamentación, quedarán disueltas las oficinas de ceremonial o de audiencias diplomáticas de todas las dependencias del Estado nacional, las que transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para facilitar la gestión del ceremonial de Estado mencionado en el artículo 99, los créditos existentes en sus respectivos presupuestos destinados a la atención de gastos protocolares». Si esta redacción tiene como finalidad comprimir el gasto público, reducir al máximo el gasto burocrático diplomático, cuenta entonces con nuestra total aprobación; pero si ha de servir para invadir innecesariamente otras áreas ministeriales que tienen razón para justificar un tratamiento con niveles diplomáticos y una organización de ceremonial a fin de recibir sectorialmente a las misiones extranjeras también sectoriales que llegan a nuestro país, creo que la redacción no es feliz y que debe buscarse otra forma que satisfaga estas exigencias diarias de la labor diplomática sectorial.

Quiero destacar que en otra parte del proyecto se da un tratamiento particular al sistema jubilatorio. Por la forma en que está redactado —y a ese respecto recabo nuevamente la opinión del presidente de la comisión— estaríamos en presencia de un régimen jubilatorio discriminatorio en favor del cuerpo diplomático, porque pueden tener derecho al haber del retiro quienes tengan 20 años en la administración

pública, de los cuales 15 como mínimo deben ser computables en el Servicio Exterior de la Nación.

El artículo 78 establece que el haber de retiro mensual es equivalente al 2,5 por ciento de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicio computable para el retiro.

Si el mínimo de antigüedad en la administración pública es de veinte años, y por cada año de servicio computable tiene derecho a un haber del 2,5 por ciento de la retribución del que está en actividad en el país en igual jerarquía, nos encontramos con que puede retirarse sin límite de edad con el 60 por ciento del total de lo que pueda percibir el funcionario en ejercicio. Ello importa, evidentemente, una modificación substancial al régimen común de jubilaciones.

Además el artículo 78 no incluye previsiones para poner al diplomático en una paridad no discriminatoria con respecto al resto de los trabajadores argentinos, pues el párrafo final expresa: «Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario tenga sesenta años de edad, si estuviere entonces en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y hasta los 65 años en caso contrario».

Como condición para inscribirse como aspirante —a lo que me voy a referir después— se requiere ser «menor de 35 años de edad». Esto supone, según está redactado el inciso, que incluso desde el punto de vista de la capacidad jurídica pueden ser aspirantes —siguiendo el léxico empleado en el dictamen— «menores» de 21 años, y hasta pueden tener menos de 20 años. Se crea así una situación jubilatoria especial a un hombre que a los 40 años normalmente está en la plenitud de su vida y en la capacidad total de su experiencia para brindar el talento necesario en la función diplomática, tan delicada para los intereses del país.

Como hombre que vive en zonas marginadas, en regiones inhóspitas, me sensibilizo ante este tratamiento discriminatorio, porque al trabajador común del campo, al obrero sufrido que labora de sol a sol, se le exigen condiciones mínimas para el sustento de su economía familiar, que van más allá de sus posibilidades físicas. Porque es a todas luces evidente que las remuneraciones que perciben los diplomáticos son muy superiores —y en el caso del hombre de campo, infinitamente superiores— a las remuneraciones básicas o escalafonarias de otros sectores. Entonces, el hombre de campo, que vive la penuria de un presupuesto estrecho, no tiene la posibilidad de un seguro jubilatorio que sea compensatorio para veinte años de sacrificio rudo, sacrificio que en definitiva constituye la base de sustentación de la riqueza del país. Insisto en que no desconozco la importancia del servicio diplomático, pero señalo que el trabajo de un agente de ese servicio no puede ser com-

parado con el que realiza el hombre del surco, el que labora la tierra. Por eso pregunto en función de cuáles razones de equidad y de justicia se acuerda a ese sector un tratamiento discriminatorio tan liberal.

Con respecto al capítulo XI, que regula el funcionamiento del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, antes de ocuparme de las funciones que a ese organismo se encomiendan por el artículo 82, quiero formular el interrogante acerca de los motivos por los que se ha modificado el proyecto del Poder Ejecutivo que otorgaba a aquel instituto la jerarquía de un organismo descentralizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, descentralización que ha sido suprimida en el dictamen de la comisión, donde se dice simplemente que tal instituto «es un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto». Desearía que el señor miembro informante diese una explicación, por cuanto en el derecho administrativo, y con relación a la capacidad del ejercicio de funciones, es substancial la diferenciación entre un órgano directamente dependiente y subordinado y un organismo descentralizado.

Los incisos a) y b) del artículo 82 del dictamen de la comisión introducen un distingo o dos requisitos que no figuraban en el proyecto del Poder Ejecutivo. En efecto, el artículo dictaminado por la comisión se refiere a dos niveles con respecto al ingreso. El primer nivel está constituido por la selección de los candidatos a ingresar al instituto, con una redacción cuya lectura he de omitir para no cansar a mis pares; sin embargo, debo preguntar las razones por las que se ha adoptado esa redacción, y de manera particular, qué se quiere decir cuando la ley establece el requisito de «ser menores de treinta y cinco años de edad».

El inciso b) del artículo 82, que alude al segundo nivel del ingreso, habla de la incorporación «en calidad de aspirantes de quienes resulten admitidos en el instituto, a los efectos de su formación y capacitación profesional, teórica y práctica». Esta redacción es genérica y vaga, por lo cual decimos que desde el punto de vista legislativo se incurre en un déficit de técnica, ya que la ley debe ser clara y precisa.

Para finalizar con el análisis del inciso a) deseo expresar la sorpresa que el texto legal provoca en el caso de que la redacción con respecto a la edad sea de una inteligencia literal. Por un lado se establece el Consejo Diplomático para aquellos que han superado los sesenta años de edad; en cambio, aquí se dispone lo que pareciera ser una iniciación en la carrera diplomática desde antes de los treinta y cinco años de edad, lo cual podría ser quizá prudente para formar nuestro cuerpo diplomático. Pero yo me pregunto, y dejo expuesto el interrogante: ¿los hombres que no han alcanzado los treinta y cinco años, aquellos que apenas han superado los veintiún años o quizá no —y con esto no quie-

ro plantear ningún conflicto generacional, pues muy lejos está ello de mi ánimo—, qué madurez, qué equilibrio o qué conocimiento de los altos intereses internacionales pueden tener para poder entrar a desempeñar un papel de representación dentro de la diplomacia argentina?

En este caso la cuestión de la edad no plantea los problemas comunes a otras áreas, donde el talento puede superar la edad biológica. En diplomacia el capital fundamental es la experiencia, la vida transcurrida, la prudencia, el haber pasado la época de las tormentas ideológicas y de los apasionamientos teóricos, que es cuando se adquiere la ponderación del juicio suficiente para contribuir a que una nación tenga coherencia en su quehacer diplomático.

He dicho, y en este momento lo reitero, que no voy a entrar en el problema de la política internacional ni de la experiencia de la diplomacia argentina de los últimos cincuenta años, es decir, desde que nosotros hemos institucionalizado dogmáticamente nuestra Constitución de 1853. Simplemente dejo anotado cuánto hace falta corregir en este sector y cómo tenemos que tener en cuenta un ejemplo demostrativo de un país vecino que nos está señalando en qué manera tenemos que hacer los ajustes necesarios para que la Argentina en el exterior tenga una unidad y una coherencia nacional, pues aquí no puede haber fisuras ni sectorizaciones de ninguna naturaleza.

También, señor presidente, quiero preguntarle al señor miembro informante de la comisión por qué se ha suprimido el artículo 89 del proyecto del Poder Ejecutivo, donde se insertaba un hecho totalmente previsible e insoslayable en el momento en que se produce, como es el fallecimiento de uno de los miembros del cuerpo diplomático. ¿Por qué se suprime el derecho a percibir los gastos del sepelio y los llamados gastos de luto? Evidentemente, es un interrogante que en el texto no tiene respuesta.

Finalmente, quiero referirme al artículo 107, donde, concordantemente con el artículo 9º, se fija un plazo de noventa días para que pueda redactarse un estatuto que satisfaga las previsiones del artículo 9º, y se integre una comisión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes de la Confederación General del Trabajo.

Personalmente, me hubiera agradado que esta previsión del artículo 107 —con la cual estoy totalmente de acuerdo e identificado con su espíritu por las razones que he expuesto cuando analicé el artículo 9º— no fuera unilateral, porque se establece un estatuto solamente para los agregados laborales y no se prevé con igual precisión una situación participativa para los otros agregados especializados que pueden intervenir en el cuerpo diplomático. Como prueba de ello señalo la ausencia de dos sectores fundamentales:

no se prevé la participación de los ministerios de Economía y Agricultura de las provincias ni tampoco la de los ministerios de Educación provinciales. Cuando se habla de la posibilidad de incluir personal adscrito especializado es evidente que queda abierta la posibilidad de la designación de cuerpos especializados que respondan a los intereses de las regiones argentinas. Creo que no solamente hay que sectorizar de una manera vertical sino también en una forma espacial. Cada región tiene una estructura específica. Esta Argentina no es unifacética sino polifacética. Cada región y cada área geográfica del país necesita un tratamiento específico y especializado. Yo no pretendo que los hombres del Norte sean expertos en los problemas de la Patagonia, pero reservo sí para el Norte el derecho de que sus hombres sean sus expertos en los problemas propios y nativos y no que las soluciones les vengan de los hombres de la Patagonia.

Con mucha más razón reservo el derecho de que el país todo se sienta relevado de ser representado en sus intereses solamente, por muy especialistas que sean, por los hombres que han nacido en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Su especialidad no los habilita para compenetrarse de los grandes problemas de todas las regiones y mucho menos de la nación toda.

Por eso yo desearía en forma vehemente buscar una fórmula inteligente que no sólo incorpore estas relaciones laborales, con lo cual estoy consustanciado, sino que también incorpore esta realidad nacional y que ello quede claramente expuesto en el texto de la ley y no sujeto a la reglamentación variable y contingente del poder administrador. Así quedaría definitivamente esclarecido que cuando se habla de adscripciones específicas no solamente se consideran las cuestiones sectorizadas verticales sino también las de los espacios geográficos y económicos sobre los cuales debe tenerse fundamentalmente una estrategia geopolítica, cultural, técnica y social.

En este sentido, señor presidente, dejo expuesta, en primer lugar, nuestra decisión favorable al dictamen de la mayoría del proyecto de ley, en cuanto significa para ella el instrumento idóneo para poder expresar una política internacional que está en sus manos orientar y definir. Pero formulo estas reservas a fin de que sean recogidas por el miembro informante y en su oportunidad les dé el tratamiento y la respuesta solicitados.

Dejo, por lo tanto, fijada nuestra posición en el sentido de aprobar en general el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

Sr. Fernández Bedoya. — Señor presidente: voy a entrar en la consideración de este proyecto de ley que ha demandado ya un considerable tiempo desde que iniciamos su estudio. Al

hacerlo, y en homenaje a la brevedad en el empleo del tiempo —deseo que adivino en los rostros fatigados de los colegas—, trataré de ceñirme estrictamente al articulado de la ley, señalando, definiendo y destacando cada una de nuestras observaciones. En algunos casos señalaré también las soluciones preanunciándolas; en los demás casos abordaremos su tratamiento cuando el proyecto sea considerado en particular.

De esta manera, el trabajo de los legisladores de la bancada de la Unión Cívica Radical se complementa, dado que ya con anterioridad el diputado Parente ha incursionado en temas generales, y en la línea política lo ha hecho el diputado Natale.

Por esa razón, en la consideración concreta del articulado del proyecto, vamos a formular observaciones que estimamos pertinentes para lograr un mayor perfeccionamiento de su texto. Estamos de acuerdo en líneas generales con los conceptos que informan el proyecto, estimando que implican un avance y un mejoramiento con relación a la ley 12.951, que fuera sancionada en 1947.

Creemos, sin embargo, que para que esta ley merezca la aprobación general sin ninguna clase de rechazo deberíamos detenernos todo lo que fuera necesario en cada uno de sus artículos para rectificar, en algunos casos, meras desviaciones de carácter formal que hacen más que nada a cuestiones idiomáticas, y en otros subsanar aspectos conceptuales que estimamos oportuno enmendar.

Así, el artículo 1º merece para nosotros la siguiente objeción. Estimamos que, con la actual redacción, este artículo en alguna manera reedita el acápite del proyecto original que fuera oportunamente suprimido por el Honorable Senado. En este acápite se decía equivocadamente, que el Servicio Exterior de la Nación es el órgano del Estado ante la comunidad internacional. Este es un concepto equivocado, porque el único órgano que representa al Estado es el Poder Ejecutivo, como bien se puso de manifiesto en el ya referido debate sostenido en el Senado.

En el proyecto en consideración se utiliza una terminología casi equivalente cuando se refiere a la «organización fundamental del Estado nacional», incurriéndose así en un error capital, ya que esa «organización fundamental» no es otra que el propio Poder Ejecutivo nacional.

Tampoco se puede sostener que el Servicio Exterior de la Nación sea el instrumento de ejecución de la política exterior nacional porque —lo reiteramos— ese instrumento es el Poder Ejecutivo. En el mejor de los casos podría decirse que ese instrumento es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conforme al artículo 99 de la ley de ministerios, pero de ninguna manera cabe afirmar que ese instrumento es el cuerpo de funcionarios del servicio exterior. No es usual ni hace a una correcta técnica legislativa

el definir en una ley que organiza un cuerpo de funcionarios en qué consiste ese cuerpo. Ello así, por dos razones principales; la primera porque se corre el riesgo de errar el concepto o de darlo restringido incurriendo en omisiones substanciales. La segunda razón consiste en que en esta ley se da la noción del cuerpo al decir cómo está constituido y cuáles son sus funciones.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta de un modo muy especial que este proyecto de ley es el estatuto de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, por lo que el artículo 1º debe referirse exclusivamente a su ámbito de aplicación, como se lo ha hecho siempre con otros estatutos. Tal el caso del decreto 6.666 del año 1957, ratificado por la ley 14.467 de personal civil de la Nación.

En la redacción de este artículo 1º se consigna un enunciado más apropiado de la ley de ministerios que de este estatuto de funcionarios.

Además, los enunciados que ahora se incluyen en este artículo ya figuran con mayor amplitud en el artículo 9º de la ley de ministerios. Por otra parte, si se entiende que ese enunciado corresponde establecerlo en la parte que habla de las funciones específicas del funcionario, esto ya es materia de una norma expresa de este proyecto de ley, puntualizada en su artículo 20. Por estas razones no es necesario ni práctico hacer un preenunciado de esas funciones en forma restringida. Por lo expuesto, en el tratamiento en particular propondremos la modificación de este artículo.

En cuanto al artículo 2º, también merece objeción de nuestra parte. Toda ley debe estar redactada siempre en tiempo presente y no en tiempo futuro. Por lo tanto, en este caso consideramos que debe reemplazarse el vocablo «estará» por «está». También hay que modificar la palabra «cuerpo», cambiándola por «cuadro». Este término resulta más propio, dado que «cuerpo» implica el todo y «cuadro» sería la parte del todo. Como ejemplo podemos traer a colación lo que ocurre en la organización castrense, donde se habla de «cuadro» al referirse a los distintos estamentos de oficiales y suboficiales que forman parte de un cuerpo. Por eso es que queremos en este caso hablar del cuerpo del Servicio Exterior y de los cuadros activos y pasivos permanentes, agregados laborales, especializados, etcétera.

Respecto del artículo 3º hacemos la siguiente observación: como ya hemos dicho, esta ley se refiere al estatuto del Servicio Exterior de la Nación y, por lo tanto, debe reemplazarse la expresión «el personal» por «los funcionarios». Asimismo, por las razones que hemos dado precedentemente se deberá reemplazar «estará» por «está».

La redacción de este artículo 3º resulta también observable en un aspecto que hace al tec-

nicismo del escalafón de los funcionarios del Servicio Exterior, tal como está reglamentado en las legislaciones más modernas. En el primer proyecto de despacho de comisión se establecía una sola categoría de ministro y dos de consejeros de embajada. Empero, en el despacho definitivo se establecen dos categorías de ministros plenipotenciarios, lo que para nosotros no es acertado, porque no contempla el tecnicismo moderno de las relaciones diplomáticas ni responde a las necesidades de nuestro Servicio Exterior. Por estas consideraciones, en la oportunidad del tratamiento en particular también propondremos una modificación al artículo.

Por las mismas razones expresadas al referirme al artículo anterior debemos reemplazar la expresión «el personal» por «los funcionarios» en el artículo 4º, y, como consecuencia de ello, después de la palabra «Nación» debe decir «desempeña» en lugar de «desempeñará».

En el artículo 5º vamos a solicitar la supresión de la limitación consignada en la última parte, que dice: «Las designaciones previstas en el presente artículo no podrán superar el treinta por ciento del total de cargos existentes en la categoría A del escalafón».

Durante la discusión en particular haremos llegar a la Presidencia la redacción que estimamos conveniente, de acuerdo con nuestro punto de vista.

Proponemos que en el artículo 13 se reemplacen las palabras «la incorporación al cuerpo» por «el ingreso al cuadro», tal como lo sancionó el Senado.

También merece una objeción la redacción del artículo 17. Estimamos que debe suprimirse el párrafo que dice «y que el Poder Ejecutivo no hubiere decidido ascender», porque la ley no puede sancionar tan abiertamente un excesivo discrecionalismo del Poder Ejecutivo que resulte contrario a los derechos fundamentales que la ley consagra. Resulta inconcebible que en el artículo 21, inciso b), se establezca el derecho de los funcionarios a ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley; que la junta calificadora aconseje que sea promovido un funcionario por reunir los requisitos que la ley exige y que el Poder Ejecutivo, por puro discrecionalismo, haga tabla rasa de la ley, consagrando un criterio distinto y arbitrario como norma.

Con respecto al artículo 18 propiciamos, siempre de acuerdo con lo anteriormente señalado, reemplazar la palabra «cuerpo» por «cuadro» y, en el inciso d), proponemos agregar después de «condena criminal» las palabras «por delitos dolosos» puesto que la intención ha de ser siempre la de excluir los delitos culposos, como surge del artículo 25, inciso c), de este proyecto de ley. Proponemos en el inciso f) reemplazar la frase «de antigüedad en su nuevo rango» por «permanencia en la categoría superior». Ello es así

porque tratándose de un plazo de gracia que se acuerda no se puede hablar de antigüedad, porque no les da derecho a continuar en carrera.

En el artículo 21 corresponde suprimir la expresión «con arreglo a las disposiciones legales que las reglamenten», pues el proyecto en consideración reglamenta esas obligaciones, de modo que no pueden ser restringidas ni modificadas por ninguna norma reglamentaria.

En el inciso j) del artículo 22 se debe agregar, luego de la expresión «Recurrir por vía administrativa», las palabras «o judicial», por cuanto no se le puede negar al funcionario la opción de interponer un recurso administrativo o promover una acción judicial.

En el inciso m) del mismo artículo 22, también es objetable su redacción, pues se ha incurrido en una omisión fundamental que lesiona los derechos de los funcionarios en situación de retiro o jubilados. En efecto, si a estos funcionarios el mismo proyecto en consideración, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 20, los declara comprendidos en el cuerpo permanente de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, no se les puede negar el uso del pasaporte diplomático, porque éste es un derecho que hace al estado diplomático del cual gozan tales funcionarios. Por consiguiente, se trata de un derecho cuyo uso no se puede restringir o impedir, y corresponde que se agregue al inciso m) el párrafo que en el dictamen en consideración se ha omitido, pero que se encuentra en la sanción del Honorable Senado, cuyo texto es el siguiente: «Como asimismo el uso de pasaporte diplomático por parte del funcionario retirado o jubilado y su cónyuge o viuda».

Entendemos que en el artículo 23 no se puede incluir entre las incompatibilidades el ejercicio de la docencia. Como única excepción se establece en el inciso d) el ejercicio de la docencia universitaria. Con igual lógica y por las mismas razones creemos que esa excepción debe hacerse extensiva a la docencia secundaria. En consecuencia, proponemos que la última parte de este inciso sea modificada y se redacte de la siguiente manera: «excepto las referidas a la docencia, siempre que no interfieran en el rendimiento y la dedicación debida a la función específica».

En virtud de la modificación propuesta para el inciso d) del artículo 23, y por las razones precedentemente señaladas, debe suprimirse el inciso f) del artículo 24.

Con respecto al capítulo III, Del Consejo Superior de Embajadores, propiciamos su supresión total por las siguientes razones: una larga experiencia aconseja agilitar el tratamiento de los asuntos que deben debatirse en el área del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evitando que la burocracia demore y entorpezca el tratamiento de esos asuntos. Con el organismo que ahora se pretende crear por medio de este capítulo se sobrecargará excesivamente la buro-

cracia sin necesidad alguna que lo justifique, todo lo cual redundará en perjuicio de la gestión ministerial sin resultado práctico alguno.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Luis Antonio García.

Sr. Fernández Bedoya. — En efecto, debe tenerse en cuenta que el normal asesoramiento llega al ministro de Relaciones Exteriores por medio de las áreas políticas y los organismos específicos en primera instancia, para luego ser supervisados en segunda instancia por la Dirección Nacional de Política Exterior y, en una tercera instancia, por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Con este consejo se agregaría una cuarta instancia totalmente inconducente, con el agravante de que se crea un organismo colegiado que en la práctica no dará resultado alguno, ya que será semillero de conflictos más que fuente de un asesoramiento eficaz y oportuno.

La experiencia ha demostrado que mientras mayor es el número de funcionarios que intervienen en la consideración de un asunto, mayores son las dificultades y problemas que se deben sortear para obtener un solución adecuada, rápida y eficaz.

En cambio, cuando los asuntos son específicamente tratados por los funcionarios de las áreas competentes y que están permanentemente actualizados, se resuelven rápidamente porque actúa un número reducido de funcionarios con conocimiento y experiencia en la materia sobre la que están constantemente trabajando.

Una situación muy distinta se planteará cuando estos asuntos lleguen ocasionalmente a consideración de este consejo, porque al no estar actualizado en los problemas tendrá que estudiarlos de nuevo, con la necesaria recopilación de antecedentes.

Por otra parte, y en un aspecto práctico, dada la forma en que se prevé la integración del Consejo, esto dará lugar a la formación de esos pequeños grupos de funcionarios que siempre se han aprovechado de estas circunstancias para monopolizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en detrimento de los derechos de otros funcionarios verdaderamente capaces y de reconocida experiencia.

La actuación de esas camarillas siempre ha sido nefasta en la Cancillería, y hasta ahora se escucha el clamor de quienes constantemente reclaman para que ese estado de cosas sea superado.

En el artículo 41 del proyecto solicitamos la supresión del párrafo que dice: «...que dispondrá el ministro de Relaciones Exteriores y Culto», porque tratándose de funcionarios para cuya remoción debe solicitarse el correspondiente acuerdo del Senado, el ministerio no es compe-

tente para disponer tal remoción. Además, esta mención se contradice con el correcto tecnicismo empleado en los artículos 42 y 44.

En el artículo 42 se establecen las sanciones disciplinarias y en el artículo 44 se determinan cuáles son los funcionarios o autoridades competentes para aplicarlas.

También debe suprimirse el inciso b) del artículo 41 porque el retiro, de acuerdo a como está legislado en el artículo 77 del proyecto, no constituye una sanción disciplinaria. Es decir, que por medio del inciso cuya supresión proponemos no se puede establecer una sanción contraria al espíritu del proyecto. El retiro no puede transformarse en una sanción disciplinaria.

En el artículo 44 se ha incurrido en una seria omisión, que resulta fundamental, por cuanto en el mismo se determina cuál es la autoridad que aplicará las sanciones mencionadas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 42 y se deja sin establecer cuál es la autoridad encargada de aplicar las sanciones establecidas en los incisos e) y f) del mismo artículo. Por lo tanto, corresponde reemplazar el inciso e) del artículo 44 por lo siguiente: «Cesantía y exoneración por el Poder Ejecutivo». Este agregado es ineludible para suplir una deficiencia técnica del proyecto que estamos considerando.

En el artículo 49, en el inciso a), solicitamos reemplazar la expresión: «diez años» por «cinco años», tal como lo había sancionado el Honorable Senado, ya que no existe fundamento válido para establecer un plazo tan excesivo en detrimento de los derechos del funcionario.

En el artículo 53 proponemos que se suprima el último párrafo que dice: «La reincorporación se producirá por resolución ministerial». La reincorporación se opera de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo, de manera que no puede quedar supeditada al discrecionalismo de una resolución ministerial. En lugar del párrafo que proponemos sea suprimido sugerimos se agregue este otro: «El reintegro al servicio se producirá automáticamente por el mero vencimiento del plazo que se fijó, sin necesidad de que así se resuelva por resolución. El funcionario está obligado a reintegrarse antes de los 45 días de vencido el plazo; si no lo hiciera, quedará separado de sus funciones».

La razón por la que aconsejamos este agregado es la siguiente. Por un lado se otorga una garantía al funcionario para que su reincorporación no dependa del discrecionalismo de una resolución ministerial que puede prolongar indefinidamente su derecho a ser reincorporado; por otro, se impone una condición al funcionario para que, por su parte, no prolongue indefinidamente la reincorporación.

En el artículo 54 proponemos substituir en el segundo párrafo las palabras «por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto», por las siguientes: «por el Poder Ejecutivo». La

razón de esta proposición es que el traslado de los funcionarios del servicio exterior es una facultad del Poder Ejecutivo, facultad que por propia iniciativa el Poder Ejecutivo podrá delegar cuando lo estime necesario; pero el Congreso no puede imponer por ley esa delegación de facultades porque ello importaría interferir en la división de los poderes.

Por elementales razones de discreción y de tacto político proponemos que en el artículo 55 se supriman las palabras «con mejor calificación deberán ser destinados prioritariamente a los países de América latina», en el primer párrafo, y «todo funcionario» en el comienzo del segundo párrafo, de modo que el artículo quedaría redactado así: «El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tendrá en cuenta en las designaciones y traslados que los funcionarios, en el transcurso de su carrera, deberán servir en dos períodos como mínimo en países latinoamericanos, y alternar en países de los cinco continentes; asimismo deberán prestar servicios por lo menos en dos oportunidades en funciones consulares, tanto en la Cancillería como en el exterior».

El fundamento de esta modificación que sugerimos reside en que la ley no puede establecer públicamente diferencias sobre la base de una distinta calificación de los funcionarios. De acuerdo con las condiciones que impone para el ingreso, la ley debe presumir que todos los funcionarios son capaces y responsables. No es aconsejable mantener la frase cuya supresión solicitamos, porque ello pondría de manifiesto poco tacto político por parte del Congreso al sancionar una cláusula que podría provocar la susceptibilidad de otros países que están fuera del área latinoamericana. Ello, además, traería apareados problemas con esos países, que lógicamente pensarían que no se envía a ellos a los mejores funcionarios, y con sobradas razones podrían aplicar por reciprocidad un régimen análogo respecto de nuestro país.

En el artículo 56 proponemos que se introduzcan las siguientes modificaciones: «a) Dos años consecutivos como mínimo y cuatro como máximo durante su permanencia en la República; b) Cuatro años consecutivos como máximo durante su permanencia en el exterior». Propiciamos estas modificaciones con las que se vuelve al régimen original de rotación establecido para los funcionarios del servicio exterior, porque contemplan más adecuadamente las necesidades del servicio y propenden al mismo tiempo a una mayor capacitación del funcionario al actuar en otro país, lo que no se logra si se establecen plazos de permanencia excesivamente prolongados como el fijado en la norma cuyo reemplazo proponemos.

Si un funcionario se ve obligado a permanecer, por ejemplo, cuatro años en el país y seis en un destino en el exterior, con dos permanencias de este tipo habría podido actuar en el

extranjero únicamente en dos países en un período de veinte años. Esto equivale a que en las dos terceras partes de su carrera habría sido destinado en dos oportunidades al exterior, lo que no es equitativo ni responde a una adecuada distribución de la función diplomática.

En el artículo 63 proponemos reemplazar «al personal» por «a los funcionarios», a fin de que se mantenga la necesaria concordancia con las demás disposiciones de la ley.

En el artículo 64 propiciamos que se agregue como último párrafo lo siguiente: «Siempre que no exceda la retribución total correspondiente al titular de la misión». Este agregado resulta indispensable porque el sobresueldo que se pague a los encargados de negocios *ad interim* no puede ser superior al que perciba el titular de la misión diplomática.

En el artículo 73 proponemos suprimir la siguiente frase: «para ser usada en el país en que presten servicio». No hay fundamento alguno para restringir de ese modo la libertad del funcionario en cuanto a la utilización de su licencia ordinaria. En ninguno de los precedentes legislativos se estableció tal restricción y tampoco existen razones de servicio que impongan una limitación de esta índole porque siempre el funcionario que sale de licencia es reemplazado por otro, lo que hace innecesaria la permanencia de aquél en el mismo lugar en esas circunstancias. Durante el tratamiento en particular proponemos una nueva redacción.

El artículo 76 merece una impugnación total, pues su contenido constituye un contrasentido con el régimen de estabilidad que consagra la misma ley, ya que la norma básica del artículo 18, inciso g) que establece un límite para la baja del servicio activo, está contradicha con una excepción condicional, que trae apareada inseguridad y que también dará lugar a bajas arbitrarias.

La norma genérica y básica del citado artículo 18, y también el límite de edad para asegurar la estabilidad del funcionario no son coherentes, por supuesto, con esta otra norma, redactada en modo condicional, al decir que «podrán ser jubilados». Se deja así librada la estabilidad del funcionario a un discrecionalismo ilimitado, que puede ser ejercido caprichosamente para producir vacantes por razones de favoritismo hacia otros funcionarios. Técnica y jurídicamente esta norma debe suprimirse por la razón que apuntamos.

Por otra parte, la norma que objetamos crea una desigualdad, al dejar librada al simple discrecionalismo la baja de algún funcionario en relación con otros que se encuentren en las mismas condiciones que aquél y que por obra de ese mismo discrecionalismo pueden continuar en la carrera. Esto no es legítimo ni equitativo, porque se viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley.

Pero se acentúa aún más este contrasentido de la norma con el régimen de estabili-

dad consagrado por la propia ley cuando permite desvirtuar ese régimen con la aplicación de la ley común de jubilaciones para el personal de la administración nacional; de donde resulta que por el solo discrecionalismo como fundamento principal se anula aquel régimen, aplicando otra ley extraña a este estatuto de los funcionarios del servicio exterior.

Estos fundamentos aconsejan, por tanto, la supresión total de este artículo, y nosotros así lo dejamos propuesto.

En el artículo 83 proponemos se suprima la siguiente frase: «... e inscriptos en el escalafón del Servicio Exterior de la Nación...». La razón de esta proposición es simple. De hecho, y sin necesidad de que la ley lo diga, los funcionarios al ser promocionados son automáticamente incluidos en el escalafón. Se trata de un mero trámite administrativo, que no es necesario que esté reglado por ninguna ley o reglamento. Resulta, por lo tanto, impropio incluir esta frase, cuya supresión proponemos.

Aconsejamos también la supresión de la siguiente frase: «... al solo efecto de la jubilación o retiro...». Esto lo proponemos por lo innecesario de la mención.

En el artículo 91 solicitamos se suprima la siguiente frase: «... o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional...». La razón es la siguiente. Esta ley orgánica de los funcionarios del servicio exterior no puede entrar a legislar en una materia que no le es propia y con respecto a personas ajenas a dicho servicio. La frase que proponemos se suprima es propia de una norma de la ley 346, de ciudadanía y nacionalización, pero no de esta ley orgánica.

En el artículo 96 solicitamos la supresión de la siguiente frase: «... y, en virtud de tal investidura, les serán subordinados jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal». El jefe de la misión diplomática es, por la esencia de la relación diplomática, el representante político de la República ante el país en que está acreditado. Sus funciones, por ello, son otras muy distintas de las de jefe administrativo de cuanta oficina dependiente de alguna repartición argentina se instalase en el exterior, además de que con esa tarea se desnaturalizaría la verdadera función del jefe de misión. En la práctica sería sumamente complicado ejercer esa jefatura administrativa, y daría lugar a muchos conflictos por la tan dispar materia que tendría que considerarse respecto de cada oficina. Prácticamente esto no podría aplicarse, por la complejidad que trae aparejada esa jefatura administrativa. Por añadidura

la norma resulta inconstitucional en cuanto se avasalla el sistema federal respecto de los derechos de las provincias. Por estos fundamentos también aconsejamos, y así lo proponemos, suprimir la reterida frase.

Ya en el capítulo XIII, en relación con los artículos 97 y 98, vamos a hacer la siguiente manifestación. Con la inclusión de este capítulo en la ley orgánica de los funcionarios del Servicio Exterior se ha cometido la incongruencia más notoria e inexplicable. El personal administrativo tiene su estatuto propio, el decreto ley 6.666/57, ratificado por la ley 14.467. El artículo 29 de este estatuto sólo exceptúa a los funcionarios del servicio exterior y no excluye al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por consiguiente, es impropio que esta ley orgánica les conceda la categoría, derechos y obligaciones establecidos para los funcionarios. Esto es absolutamente inadmisibles en una ley como ésta porque se desvirtúa totalmente su finalidad, que es la de organizar el cuerpo de funcionarios del servicio exterior.

En efecto, con los dos artículos que se incluyen en este capítulo se crea un cuerpo de funcionarios paralelo que no reúne las condiciones de título, estudio y conocimiento de idiomas que se exige para el ingreso de los funcionarios al cuerpo del servicio exterior. Vale decir que con sólo dos artículos se desnaturaliza completamente la organización del cuerpo de funcionarios dispuesto por los 96 artículos precedentes.

Aquí la ley adolece de un vicio contra elementales principios jurídicos y de técnica legislativa y consagra un privilegio y favoritismo que sólo beneficia a los agentes administrativos en detrimento de los derechos fundamentales de los funcionarios a quienes se les imponen condiciones de las que quedan exentos estos agentes. Y ese favoritismo crea una desigualdad que repugna al principio constitucional de igualdad, puesto que a los funcionarios se les exige una idoneidad que no se les exige a los agentes administrativos.

Esto también repugna a un elemental principio de equidad y de ética profesional. Tan grave es el error que se comete con esta inclusión en la ley, que puede acarrear consecuencias imprevisibles, como la de anular en la práctica al cuerpo de funcionarios del servicio exterior, pues bastaría para ello que con un simple discrecionalismo orientado con alguna interesada finalidad se reemplazara a los funcionarios por los agentes administrativos.

Llegamos así a la conclusión de que la misma ley consagra su propia destrucción, porque puede llegar el momento en que los funcionarios desaparezcan por haber sido reemplazados por agentes administrativos mediante el procedimiento de destinar al exterior exclusivamente a esos agentes.

Esto atrae aparejada otra incongruencia aún más grave, pues muestra que nuestras representaciones en el exterior carecerán de agentes administrativos, ya que todos serán funcionarios, lo que resentiría fundamentalmente las necesidades del servicio.

Llegamos así a otra conclusión negativa: la de la imposibilidad material de proveer a nuestras representaciones de empleados administrativos, pues por el solo hecho de ser destinados éstos al exterior adquieren la categoría de funcionarios. Semejante incongruencia no se puede mantener en el proyecto que tratamos.

Dijimos que todo esto es contrario a toda técnica legislativa, y así se entendió cuando se sancionó la ley 12.951, que en su artículo 71 expresamente disponía que el personal administrativo, técnico, profesional y de servicio se rige por las leyes y disposiciones generales que conciernen a la administración pública.

Con estas consideraciones creemos dejar debidamente fundadas las razones por las que debe suprimirse totalmente este capítulo XIII, con sus dos artículos, y así lo proponemos.

En el artículo 100 pedimos sea suprimido el segundo párrafo por no estar vigente la ley 20.713.

En relación al artículo 103 manifestamos lo siguiente. Muy fundadas razones aconsejan suprimir totalmente este artículo. Es público y notorio que en los últimos años se han violado constantemente todas las normas relativas a la promoción de los funcionarios, procedimiento pernicioso en el que se ha seguido hasta hace poco tiempo. Son numerosos los ascensos efectuados contraviniendo abiertamente esas normas y que han tenido como único fundamento el favoritismo, el discrecionalismo excesivo y aun la voluntad caprichosa, habiéndose dado el caso de que en el plazo de un año algunos funcionarios han sido ascendidos hasta tres categorías. No es del caso señalar cuáles son las normas transgredidas y en qué oportunidad, pero lo que es evidente es que tales irregularidades no se pueden legitimar aprobando una norma como esta que impugnamos. Si se han efectuado ascensos irregulares sin disponer de una norma legal que los autorizara, fácil resultaría imaginar qué sucederá si se aprueba esta norma: permitirá con toda seguridad el favoritismo y la voluntad caprichosa.

Por estas consideraciones reiteramos nuestro pedido de que se suprima totalmente este artículo que consagra un discrecionalismo excesivo y sin limitación alguna.

Por último, pedimos la supresión total del artículo 105 por ser absolutamente inconstitucional al avasallar el régimen federal. Es inconcebible e impracticable la acumulación que esta norma establece, porque tendría que crearse un superorganismo que no daría resultado práctico alguno y que materialmente no podría afrontar la tarea enorme que se le asigna, al margen de

los insolubles problemas de competencias jurisdiccionales que se le plantearían incluso con los organismos militares, por ejemplo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Fernández Bedoya. — Señor presidente. en la exposición que hemos formulado dejamos reseñadas cuáles son nuestras observaciones y pedimos al señor presidente de la comisión que en oportunidad del tratamiento en particular se sirva acogerlas, tenerlas en cuenta y darles curso, porque ésta es una ley permanente de la República, no una ley para un gobierno; es una ley para el país. A todos nos interesa su perfección porque ella será una garantía para todos bajo distintos gobiernos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Valoni.

Sr. Fernández Valoni. — Señor presidente: la variedad de los argumentos referentes a las distintas disidencias parciales y a la conceptualización total de la ley a consideración de esta Honorable Cámara que han señalado los distintos legisladores de los bloques minoritarios hace que la mayoría de ellos, paulatina y progresivamente, se haya ido anulando entre sí, y una vez más los justicialistas nos encontramos con una demostración acabada de que cuando se nos critica por la derecha y por la izquierda es señal de que nos encontramos en el justo equilibrio revolucionario.

Hay más gente preocupada que nosotros por la estabilidad, y simultáneamente hay gente mucho más ansiosa que nosotros por eliminar las rémoras que podían quedar todavía en el servicio diplomático.

Nosotros, como tantas veces lo dijo el general Perón y dentro de la orientación que continúa impartiéndonos la señora presidente de la Nación, Isabel Martínez de Perón, sabemos que hemos de hacer todo lo necesario para que este cuerpo diplomático del proyecto nacional sea efectivo como brazo ejecutor de la política exterior del pueblo argentino. Y lo haremos dentro del mismo marco general que nos rodea, que es el de una transformación en paz y con orden, sin ninguna clase de violencia, ya sea física o legal. ¡Quédense tranquilos los preocupados por esta ley porque a todo ello vamos a llegar en su medida y armoniosamente!

Pero aquí se han dicho algunas cosas que como peronistas no podemos aceptar, como no aceptamos en esto el mote del desarrollo partidario porque consideramos que el peronismo es mucho más que eso; tenemos un partido pero no somos un partido, como podría decir que tenemos una vaca pero no somos una vaca. El peronismo es un movimiento nacional de liberación, y por serlo estamos en la creación permanente de nuestra propia cultura revolucionaria.

Se ha hablado aquí de cultura, de refinamiento y hasta de buen gusto. En el campo de la teoría del conocimiento podríamos echar mano a los más lúcidos argumentos de los doctores en gnoseología cuando tratan los problemas del criterio de verdad. Los peronistas sabemos hace treinta años que el criterio de verdad fundamental es la aprobación de la masa popular. Nos parece que los burdos imitadores de los ejemplos fáciles no pueden estar a la altura de las parábolas de Cristo como tampoco pueden estarlo de las frases inolvidables del general Perón ni de los ejemplos simples que, como decía nuestro general, es la forma en que los grandes conductores lo esclarecen todo. Por eso, cuando se habla de la máquina de café primero hay que saber lo que es el café; y debemos hablar de éste antes de analizar el estilo de la máquina o la forma en que saldrían molidos los granos.

Es por ello que comprendemos que no se interprete lo que es la verticalidad, ya que el movimiento nacional de liberación, que es el peronismo, tiene su propio lenguaje, su propio esquema de pensamiento y una coherencia que se enraíza en nuestra propia historia en nuestra geografía y en la sangre derramada por las masas populares a lo largo de 150 años en la lucha por la liberación nacional. Nos enseñó Perón —e insiste en ello Isabel Martínez de Perón— que la verticalidad es el argumento de conducción por el cual los peronistas trabajamos como soldados por una causa, aportando lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestro acervo.

Pero lo que no podemos admitir desde ningún punto de vista es que los que intentaron prohibir al pueblo por un decreto que se lo nombrara a Perón en esta tierra nos hablen hoy de Perón para explicarnos lo que es la verticalidad. (*Aplausos*) Tendrían que ponerse de pie para hacerlo porque nosotros sí respetamos las tradiciones nacionales.

En forma particular, como oficial retirado del Ejército, del cual me siento orgulloso, porque lo conozco profundamente al haber ingresado a los 11 años en el Liceo Militar de la Nación puedo decir que sé muy bien, no por las críticas o las definiciones de la derecha o de la izquierda sino por la vivencia personal, que siempre hubo a lo largo de toda la historia de nuestras fuerzas armadas una línea nacional y una línea antinacional, una línea en favor del pueblo y una línea en favor del antipueblo. Puede ser que nos quieran empaquetar los que siempre estuvieron con la segunda, pero nosotros no nos vamos a enredar con estos argumentos que, dichos con tono de refinamiento, no exceden el nivel de la barricada.

Cuando el general Perón llegó a la Argentina y desembarcó prácticamente solo en un territorio ocupado por 43.000 soldados de un ejército, en ese momento conducido por enemigos, generó un hecho político e histórico de magnitud universal. Mal haríamos en comparar al general Perón y a esa actitud con alguna otra circuns-

tancia histórica, porque este pueblo argentino no tiene comparación. Cuando Perón vino, en vez de levantar su mano para castigar a los que habían estado deleznando las mejores aspiraciones de su pueblo, cuando hizo la propuesta de llevar adelante un proyecto nacional, también se puso el uniforme de la patria, gesto con el cual estaba demostrando al pueblo cuál era su ejército, pero también al ejército cuál era su pueblo. (Aplausos.)

Nosotros hemos escuchado atentamente todas las exposiciones, y con interés, porque siempre aprendemos algo nuevo. Ahora estamos aprendiendo los nuevos argumentos que se utilizan desde las posiciones de la oligarquía y del liberalismo para deformar las siempre claras ambiciones del pueblo argentino.

Ahora se quiere identificar terrorismo con Tercer Mundo, cuando el Tercer Mundo es paz, es creación, es desarrollo social, económico, cultural y político para los pueblos. Nosotros no estamos a favor de ningún imperialismo; estamos en contra de todos, porque cuando el general Perón se hizo cargo, en 1946, del gobierno, en ese primer Estado justicialista, llegó a una conclusión a la que antes otros estadistas no habían terminado de arribar. Comprobó que la Argentina estaba a diez mil kilómetros de Washington, a dieciocho mil kilómetros de Moscú y a veintiún mil kilómetros de Pekín, y, si geopolíticamente se puede, ideológicamente se debe estar en una tercera posición, para no ser traidor a las características materiales y humanas que Dios puso en manos de este pueblo argentino.

Se ha hablado con ligereza de lo que ocurre en América latina; se ha tocado el problema de la ALALC, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de otros, muchos de los cuales fueron engendros de la burocracia internacional en sus intentos por retrotraernos hacia años anteriores e impedir el avance poderoso del continentalismo, que se concretó, por ejemplo, con la entrega que hizo Perón de los símbolos que los Mitre y sus aliados le habían robado al pueblo del Paraguay en los esteros del Chaco; cuando Perón hizo los convenios bilaterales con Chile y la unión económica con Nicaragua, con Ecuador y con tantos otros países de América latina; cuando Perón lanzó en 1953 el decálogo latinoamericano, por el cual proponía a los argentinos que consideraran compatriotas a todos sus hermanos de Latinoamérica. Nosotros no tenemos nada en contra de los Estados Unidos de América, pero estamos absolutamente opuestos a cualquier presión del imperialismo yanqui. Tampoco tenemos nada en contra del pueblo ruso, pero nos oponemos a cualquier forma de presión del imperialismo soviético.

Sólo con mucha ligereza y sin datos precisos a la vista se puede decir que se ha aplicado la ley de prescindibilidad con alguna arbitrariedad.

Jamás un gobierno ha sido más prudente que el gobierno del pueblo. Jamás un movimiento

de liberación —como lo es el peronista— habiendo llegado al poder ha utilizado la generosidad, la propuesta para la unidad y ha llevado adelante las banderas de todo el pueblo argentino como lo hizo el general Perón y lo hace ahora Isabel Martínez de Perón.

Sr. Natale. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Fernández Valoni. — No, señor diputado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Busacca). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Falabella. — ¿Cuándo va a hablar de la ley, señor diputado?

Sr. Fernández Valoni. — Le voy a dedicar el mismo tiempo que le dedico a usted, señor diputado.

Se ha tratado con ligereza y superficialidad...

Sr. Natale. — Solicito al señor diputado que rectifique esos términos.

Sr. Fernández Valoni. — No los voy a rectificar.

Sr. Natale. — Es una imprudencia.

Sr. Fernández Valoni. — El movimiento nacional peronista si hubiera sido prudente no habría hecho lo que ha hecho en la República Argentina.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Fernández Valoni. — Con respecto al capítulo I, artículo 5º, en lo referente a las designaciones del Poder Ejecutivo en el ámbito del servicio exterior, en la categoría A del escalafón, el bloque de la mayoría ha hecho llegar a la Secretaría el proyecto de artículo que propone el Frente Justicialista de Liberación.

Obra también en poder de la Secretaría la modificación que proponemos al capítulo IX, artículo 73, incisos a) y c), que refiere al régimen de licencias.

Para terminar, me voy a permitir leer en homenaje a los compañeros del movimiento obrero organizado, que conforman hoy parte de nuestro bloque, y al movimiento nacional peronista, que ha sido verdadero gestor de este maravilloso despertar hacia una política exterior autónoma por la liberación del pueblo argentino, lo que dijera el general Perón, el 8 de abril de 1974 en la Confederación General del Trabajo: «La unidad para que sea efectiva y real debe empezar por los pueblos. Las organizaciones sindicales deben ser la base esencial para el logro de ese objetivo. En este sentido, pienso que las organizaciones obreras de todos los países latinoamericanos deberán establecer conexiones a efectos de alcanzar esa unidad.

»Si los trabajadores de América latina se unen, alcanzarán realmente su destino. Si no lo hacen, las oligarquías, los poderes extraños, las burguesías mismas se alzarán con el santo y la limosna en poco tiempo. Una masa latinoameri-

cana organizada en sindicatos, unida y solidaria, es un freno para todas esas ambiciones desmedidas de los hombres. Llevar la unidad sindical a Latinoamérica es comenzar la integración del continente.

»Para construir esa pirámide no empezaremos por la cúpula, sino que lo haremos por la base, y sólo sobre ella podremos edificar algo seguro y permanente. Esa tarea la recibirán los agregados obreros, porque creemos que en el momento que vive el mundo y que nuestro continente transita, es indispensable que desarrollemos esa unidad.

»No debemos olvidar que el pueblo argentino se unió también sobre la clase trabajadora. Pensamos que ese mismo experimento que nos ha dado tanto éxito en la Argentina nos puede dar el mismo éxito en el continente». (*Aplausos.*)

Sr. Natale. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una breve aclaración tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Como he formulado en este debate algunas manifestaciones relativas a la política de integración latinoamericana y el señor diputado Fernández Valoni al referirse a ellas las ha calificado de expresiones vagas y sin consistencia, sin precisar a su expositor, deseo formular algunas aclaraciones.

Cuando hice algún tipo de observaciones sobre la política exterior en esta Honorable Cámara, más allá de las coincidencias que podamos tener con la formulación que en este campo sigue el actual gobierno, mis críticas estuvieron circunscritas pura y exclusivamente a la no formulación de esa política, pues más allá del enunciado debemos formular la política para terminar definitivamente con la dependencia. El hecho de estar ligados en este momento al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca nos crea una relación de dependencia con los Estados Unidos; asimismo, más allá de las formulaciones concretas de una política de integración latinoamericana, he señalado con datos precisos que en el marco de la ALALC y del Pacto Andino no se han hecho los avances necesarios. En consecuencia, si el señor miembro informante cuenta con los datos que puedan abonar su tesis solicito los ponga a disposición de la Cámara para su conocimiento. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — El debate ha terminado y el señor diputado Fernández Valoni no se ha referido en particular a ningún señor diputado durante su exposición.

Se va a votar en general el proyecto de ley contenido en el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Previsión y Seguridad Social sobre régimen para el Servicio Exterior de la Nación.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Corresponde pasar a la consideración en particular.

Como el proyecto en consideración se encuentra dividido en quince capítulos, se ha propuesto que en lugar de considerarse artículo por artículo se considere capítulo por capítulo; es decir, el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 18; el capítulo II, del artículo 19 al 25, y así sucesivamente.

En consideración, la forma de tratamiento precedentemente expuesta.

Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — La modificación que se ha propuesto para el tratamiento en particular del proyecto en consideración, en virtud de lo dispuesto por el artículo 110 del reglamento, necesita el voto afirmativo de las tres cuartas partes.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar si el tratamiento en la discusión en particular se hace por capítulos.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Si el bloque del radicalismo no tiene inconveniente, la Presidencia sugiere omitir la lectura de las observaciones ya que se dio cuenta de ellas en el momento en que fueron formuladas por los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Señor presidente: en el tratamiento de algunos artículos del proyecto nos vamos a ceñir a la información suministrada por el señor diputado Fernández Bedoya. En otros, sin embargo, vamos a formular aclaraciones para un mayor abundamiento.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Señor presidente: creo que se ha creado una confusión en la Honorable Cámara cuando la Presidencia mencionaba la votación del proyecto por capítulos.

Creo que hay consenso en los señores diputados para votar el proyecto en la forma propuesta por la Presidencia.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Catalano.

Sr. Catalano. — Señor presidente: estimo que es de estricta aplicación lo establecido en el artículo 142 del reglamento de la Honorable Cámara, que determina que «la discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo o período por período, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno». Es decir, que no hay obligación de votar artículo por artículo.

Sr. Suárez (L. M.). — El malentendido, señor presidente, obedece a que se puede haber pensado que se iban a votar los capítulos sin tener la posibilidad de formular las observaciones pertinentes.

Sr. Presidente (Busacca). — No, señor diputado.

Sr. Suárez (L.M.). — Con la aclaración de que se pueden hacer las observaciones necesarias a los artículos observados mientras se considera cada capítulo, podría votarse por capítulos.

Sr. Presidente (Busacca). — La idea, señor diputado, es reducir a quince las ciento nueve votaciones. Este es el único sentido de la propuesta.

Con las aclaraciones formuladas, se va a rectificar la votación anterior.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consecuencia el tratamiento y las votaciones se harán por capítulos.

La Presidencia entiende que los señores diputados integrantes del bloque del radicalismo van a formular las observaciones que crean convenientes. Por lo tanto no sería necesario dar lectura de todas las modificaciones que se han propuesto.

Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura de cada una de las observaciones que hemos planteado. Cuando la bancada radical lo estime conveniente hará las aclaraciones que crea necesarias. En caso contrario, nos limitaremos a la información solicitada por el señor diputado Fernández Bedoya.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en particular el capítulo I.

Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas por los señores diputados Natale y Fernández Bedoya.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Natale propone la siguiente modificación: «Artículo 19: la presente ley se aplicará a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que, como cuerpo de un organismo del Estado nacional entiende en sus relaciones con la comunidad internacional, es el encargado de aplicar la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Secretario (Lavia). — Los señores diputados Natale y Fernández Bedoya proponen la siguiente modificación en el inciso a) del artículo 29: «El cuadro permanente activo constituido por los funcionarios con estado diplomático en actividad que ingresen al servicio exterior conforme a las disposiciones de la presente ley».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Natale propone la siguiente modificación en el artículo 39: «Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación están comprendidos en las siguientes categorías: A) embajador extraordinario y plenipotenciario; B) ministro plenipotenciario; C) ministro consejero; D) consejero de embajada y cónsul general; E) secretario de embajada y cónsul de primera clase; F) secretario de embajada y cónsul de segunda clase; G) secretario de embajada y cónsul de tercera clase».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Natale. — Si me permite, señor presidente...

Sr. Presidente (Busacca). — El señor diputado Fernández Valoni ya ha manifestado que la comisión no acepta.

Sr. Natale. — En su momento hicimos presente a la Presidencia que íbamos a solicitar la palabra cuando así lo estimáramos oportuno.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia entiende que el señor diputado Fernández Bedoya ya ha expuesto en particular sobre el proyecto.

Sr. Natale. — Pero estamos en el debate en particular y deseo exponer el sentido de la proposición que formulamos.

En el artículo 39 solicitamos la inclusión del cargo de ministro consejero en la categoría C, sin acuerdo del Senado. Formulamos esta proposición por entender que si en el escalafón del Servicio Exterior de la Nación hay tres cargos que van a ser cubiertos con acuerdo del Senado, las posibilidades de que el personal escalafonario pueda ascender en su carrera quedan circunscritas pura y exclusivamente al cargo de consejero. De este modo no solamente vamos a agilizar la función en el servicio exterior sino que vamos a premiar a los funcionarios dignos, permitiendo que sin ningún tipo de influencia política puedan llegar a ocupar un lugar importante en el escalafón.

Sr. Merchensky. — Si me permite, señor diputado...

Sr. Natale. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Merchensky.

Sr. Merchensky. — Desearía saber si la modificación propuesta ha sido tratada en alguna instancia por la comisión, porque de lo contrario, después de un año de tratativas que lleva el asunto, nos encontraríamos una vez más con que estamos legislando improvisadamente. Tras el largo descanso que hemos tenido, ello sería un atentado casi contumaz contra las buenas prácticas parlamentarias.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en las demás comisiones de la Honorable Cámara la bancada del radicalismo trabaja con responsabilidad y con dedicación.

Oportunamente hemos formulado nuestras objeciones al artículo 3º, proponiendo la creación del cargo de ministro consejero.

Asimismo, me permito señalar al señor diputado Merchensky que todo aporte que puedan hacer los legisladores durante el tratamiento de una ley no significa perder el tiempo, sino brindar un elemento de juicio más con un sentido constructivo.

Sr. Merchensky. — No he hablado de perder el tiempo, sino de que podría introducirse un elemento de confusión al traer al recinto lo que debe ser estudiado en esa suerte de laboratorio que es la comisión.

Entiendo que deben presentarse a la Honorable Cámara tantos despachos de minoría como opiniones haya sobre un asunto que puede ser fundamental, para que esos dictámenes sean sometidos al estudio y a la consideración de los señores diputados.

Sr. Natale. — Es una tesis original la que está presentando el señor diputado.

Sr. Merchensky. — Es sensata.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Ha concluido el señor diputado Natale la fundamentación de la observación que formula?

Sr. Natale. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Secretario (Lavia). — En el artículo 4º los señores diputados Natale y Fernández Bedoya proponen reemplazar los términos «el personal» por «los funcionarios», y «desempeñará» por «desempeña».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Fariás propone la siguiente redacción para el artículo 5º: «El Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la Nación que lo haya efectuado».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta?

Sr. Fernández Valoni. — Sí, señor presidente.

En oportunidad de mi intervención pronunciada al finalizar el debate en general hice la aclaración de que el bloque del Frente Justicialista de Liberación iba a proponer la modificación del artículo 5º, que es la que ha sido leída por Secretaría. Pregunto si coincide con la que propone el bloque del radicalismo.

Sr. Presidente (Busacca). — Es la misma, señor diputado.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Natale propone que el artículo 8º quede redactado en los siguientes términos: «La jefatura de las misiones diplomáticas será desempeñada por funcionarios de la categoría A. Los funcionarios de la categoría B podrán ser acreditados temporalmente como jefes de misión, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior jerarquía cuando esas razones desaparezcan».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Secretario (Lavia). — El diputado Fariás propone que el artículo 12 exprese: «El ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación».

»Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá designar o promover funcionarios para la categoría A, ad referendum de la Honorable Cámara de Senadores, e igualmente podrá promover funcionarios a las categorías B y C en las mismas condiciones.

»Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán, desde el punto de vista presupuestario, su cargo anterior interinamente, hasta tanto se otorgue el mismo por parte del Senado de la Nación.

»Prestado el acuerdo no se requerirá un nuevo pedido para ulteriores traslados del personal del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de las categorías A, B y C.

»El funcionario cuyo acuerdo fuera rechazado o no hubiere sido solicitado al Senado de la Nación en el término correspondiente, volverá a ocupar el mismo cargo en el que revistaba en el Servicio Exterior de la Nación.»

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — Deseo aclarar que se trata solamente de la corrección de un error de imprenta. La comisión acepta.

Sr. Falabella. — Es necesario que se aclare, dado el vacío que hemos señalado, si este artículo 12 rige con respecto a las designaciones de los artículos 5º y 6º.

Sr. Fernández Valoni. — Rige con respecto a los artículos 5º y 6º.

Sr. Presidente (Busacca). — Queda hecha la aclaración.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Natale propone la siguiente redacción para el artículo 13: «El ingreso al cuerpo permanente activo se efectuará exclusivamente por egreso del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y promoviendo al funcionario de la categoría G».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Natale propone la siguiente redacción del artículo 17: «La junta calificadora deberá preparar el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos, de acuerdo con su respectiva antigüedad y méritos. El funcionario que habiendo sido incluido en la propuesta de ascensos no fuera promovido por causas que no le sean imputables percibirá un suplemento equivalente al 50 % de la diferencia entre su haber mensual y el de la categoría inmediata superior».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone en el artículo 18 introducir las siguientes modificaciones: en el inciso a), se solicita su supresión; en el inciso b): «los funcionarios de las categorías A y B que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación»; en el inciso d): «los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal por delitos dolosos impuesta por los tribunales comunes o federales»; en el inciso f): «los funcionarios de las categorías G a E que habiendo permanecido en sus categorías por un período de diez años y fueran promovidos automáticamente según el artículo 37, inciso e), luego de haber tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango. Los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos según el artículo 37, inciso e), luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar por dos años en su nueva categoría. Estas previsiones serán aplicables, en ambos casos, siempre que el funcionario no alcance el límite de edad establecido en el inciso siguiente».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no las acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo I, artículos 19 al 18, inclusive, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo II.

Por Secretaría se dará cuenta de las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone suprimir en el artículo 21 la frase: «... con arreglo a las disposiciones legales que las reglamenten», y en el artículo 22, inciso j) agregar después de las palabras «por vía administrativa» lo siguiente: «... o judicial».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión las modificaciones sugeridas?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo II, artículos 19 al 25, inclusive.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 26 a 35, y que no ha tenido observación alguna.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo IV, artículos 36 a 38.

Sr. Secretario (Lavia). — En el artículo 37, inciso a), el bloque radical propone substituir la palabra «asistir» por «proponer».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación?

Sr. Fernández Valoni. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo IV, artículos 36 a 38, inclusive.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo V, artículos 39 a 48.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone la supresión del inciso a) del artículo 42, y en el artículo 44, inciso a) que se suprima la palabra «verbal».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo V, artículos 39 a 48, inclusive.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo VI, artículos 49 a 53.

Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone para el inciso e) del artículo 49 la redacción siguiente: «Si hubieren sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República».

Sr. Natale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Nosotros solicitamos la modificación del inciso e) porque entendemos que un funcionario de la Cancillería que pueda ocupar un cargo en un organismo internacional al cual la Nación Argentina se encuentre adherida no tiene que solicitar la autorización pertinente del ministro de Relaciones Exteriores. Además, esto estaría invalidado por el inciso a) del mismo artículo, que contempla la posibilidad de que a solicitud del interesado y por razones particulares se le conceda la disponibilidad por un tiempo dado.

Creemos que se incurre en una incongruencia, por lo que solicitamos que se suprima la frase que se refiere a la previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión la modificación que se propone?

Sr. Fernández Valoni. — Con respecto a las consideraciones que hace el señor diputado Natale, nosotros sabemos que la República está adherida a una serie de organismos internacionales, en los cuales tiene distintos niveles de interés en su participación, y está dado el interés nacional por el hecho de que se produzca la autorización o no por parte del ministro de Relaciones Exteriores al funcionario de la categoría que sea para cumplir funciones en alguno de esos organismos internacionales.

Además, el inciso e) no tiene ninguna incongruencia con el inciso a), por cuanto la disponibilidad por razones particulares contemplada en el inciso a) requiere diez años como mínimo en la carrera. La comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo VI, que incluye los artículos 49 a 53.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo VII, artículos 54 a 61, al que no se han formulado observaciones.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo VIII, artículos 63 al 72, al que no se han formulado observaciones.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo IX, artículo 73.

Por Secretaría se leerán las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Lavia). — El señor diputado Farías propone la siguiente modificación: «Artículo 73. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes licencias: a) Ordinaria anual de treinta días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y con coeficiente, cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior»; b) Sin modificaciones; «c) Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se concederán de acuerdo con las normas que las reglen. En el caso que corresponda percibir haberes serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior»; d) y siguientes, sin modificaciones.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta?

Sr. Fernández Valoni. — Sí, señor presidente.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone para el inciso a) la siguiente redacción: «Ordinaria anual de treinta días corridos. Será

otorgada con la remuneración total y con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior». Para el inciso c): Suprimir las palabras «y tomara en el extranjero su licencia».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — Es exactamente igual a la propuesta del bloque del Frente Justicialista de Liberación que la comisión ha aceptado.

Sr. Secretario (Lavia). — Para el inciso b) el bloque radical propone la siguiente redacción: «Licencia especial de cuarenta y cinco días corridos, para ser utilizados en la República, luego de cada dos años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración total con coeficiente, y las órdenes de pasaje para el funcionario y su familia. Esta licencia excluye durante el año que sea acordada el derecho a lo previsto en el inciso anterior».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación al inciso b)?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo IX, artículo 73, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo X, artículos 74 a 79. Por Secretaría se va a leer la modificación propuesta.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone substituir las palabras «quince como mínimo» por «diez como mínimo».

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación?

Sr. Fernández Valoni. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo X, artículos 74 a 79.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo XI, artículos 80 a 96, que no tiene observaciones.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo XII, artículos 85 a 96.

Por Secretaría se va a leer la modificación propuesta.

Sr. Secretario (Lavia). — El bloque radical propone la siguiente redacción para el artículo 85: «Cuando los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de la carrera del Servicio Exterior de la Nación serán elegidos entre aquellos que posean un mínimo de 10 años de antigüedad ininterrumpida.»

Sr. Natale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale. — Es para aportar una breve aclaración respecto de este artículo.

Cuando nosotros proponemos que los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de la carrera es para que no sean únicamente los embajadores, porque en el Servicio Exterior de la Nación puede haber funcionarios que al tener una permanencia continuada de diez años se encuentren con la idoneidad suficiente para cumplir el mismo tipo de tareas que los embajadores. No entenderlo así sería una actitud limitacionista que en cierto modo invalidaría la posibilidad de que funcionarios de carrera puedan acceder a una responsabilidad política.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta al artículo 85?

Sr. Fernández Valoni. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo XII, artículos 85 a 96.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo XIII, artículos 97 y 98.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo XIV, artículo 99.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración el capítulo XV, artículos 100 a 108.

Tiene la palabra el señor diputado Natale.

Sr. Natale — Nosotros solicitamos en relación con el capítulo XV la supresión total de los artículos 103 y 105, por las razones expuestas por el señor diputado Fernández Bedoya.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fernández Valoni. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el capítulo XV, artículos 100 a 108.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 109 es de forma.

Sr. Presidente (Busacca). — Queda sancionando el proyecto de ley¹. Se comunicará al Honorable Senado.

2

CONVENIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR

Dictamen de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto de resolución del señor diputado Carlos Alfredo

Imbaud sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo, a fin de que indique cuáles serán los organismos nacionales que concurrirán a la séptima reunión de la Organización Internacional del Azúcar, y solicitarle la remisión al Congreso de la Nación del Convenio Internacional del Azúcar 1973; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional remita con carácter de urgente al Congreso Nacional para su consideración, el Convenio Internacional del Azúcar 1973.

Sala de las comisiones, 6 de mayo de 1975.

José Luis Fernández Valoni. — Ricardo Natale. — Carlos Alfredo Imbaud. — Alberto A. Garona. — Ricardo Arturo Sangiácomo. — Carlos Raúl Insúa. — Enrique A. Sursek. — Mariano Fernández Bedoya. — Ricardo Ramón Balestra. — Rafael Francisco Marino. — Vicente Mastolorenzo. — Pedro Alfredo Fuentes. — Arolinda S. A. Bonifatti. — Raúl I. Bajczman. — Mario Lavalle. — Isidro J. Odena. — Manuel I. Cabana. — Guillermo Carlos Fernández Gill. — María Haydée A. de Literas. — Adriano Ariani. — Carlos Alberto Romero. — Jorge Nelson Gualco.

INFORME

Honorable Cámara:

La ratificación del Convenio Internacional del Azúcar 1973 es requisito indispensable para que nuestro país no pierda su calidad de miembro del mismo. Las gestiones de la Cancillería a través de nuestro embajador en Londres ante la Organización Internacional del Azúcar dieron por resultado la consecución de una prórroga para depositar el instrumento de ratificación hasta el 30 de junio de 1975.

Teniendo en cuenta que nuestro país ha sido elegido recientemente y por primera vez para integrar ese organismo, como asimismo la extraordinaria producción de azúcar de la próxima zafra —que probablemente coloque a ese rubro entre los primeros de nuestro comercio exterior—, se considera como imprescindible y urgente el contar con ese convenio a los efectos de su inmediata consideración.

Vicente Mastolorenzo.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Imbaud.

Sr. Imbaud. — Con pocas palabras voy a aclarar el sentido del proyecto que se va a tratar.

Es inminente el comienzo de una nueva zafra azucarera; existe una buena cosecha de caña que va a posibilitar una producción que se estima en un millón setecientas mil toneladas de azúcar. Probablemente será la producción mayor que haya hecho la industria azucarera argentina.

El consumo interno del país se estima en un millón de toneladas, por lo que queda disponible un total de setecientas mil toneladas que deberán ser colocadas en el mercado mundial. Por lo tanto, reviste fundamental importancia la asistencia de la Argentina a los eventos internacionales que fijan la política exportadora azucarera.

La Argentina es miembro, con voz y voto, del Consejo Internacional del Azúcar —que es un organismo creado como consecuencia de una iniciativa de las Naciones Unidas—, donde representa a los productores de la zona. Por ello, y

por la demás información que figura en el expediente, solicito el voto favorable de este proyecto.

Finalmente quiero destacar el apoyo que prestaron a esta iniciativa las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores y Culto, así como el señor diputado Tróccoli.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en particular.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — Queda sancionado el proyecto de resolución.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Queda levantada la sesión.

—Es la hora 21 y 35.

MIGUEL J SILVA REY.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

3

APENDICE

SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

1

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

De los funcionarios del servicio exterior

Artículo 1º — La presente ley se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación que, como organización fundamental del Estado nacional para el desarrollo de sus relaciones en la comunidad internacional, es el instrumento de ejecución de la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial.

Art. 2º — El Servicio Exterior de la Nación estará integrado por:

- a) El Cuerpo Permanente Activo, constituido por funcionarios con estado diplomático en actividad que se desempeñen indistintamente en funciones diplomáticas, consulares y en la Cancillería, y por aquellos que ingresen al servicio exterior conforme a las disposiciones de la presente ley;
- b) El Cuerpo Permanente Pasivo, en jubilación o retiro, constituido por los funcionarios que posean estado diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente hubieran cesado de revistar en actividad conforme al régimen de previsión que les haya sido aplicado;
- c) El Cuerpo de Agregados Laborales, constituido por el personal designado con arreglo al artículo 9º de la presente ley;

d) El Servicio de Agregados Especializados, constituido por el personal designado con arreglo al artículo 10;

e) Los funcionarios designados con arreglo al artículo 5º.

Art. 3º — El personal del Servicio Exterior de la Nación estará comprendido en las siguientes categorías:

- A) Embajador extraordinario y plenipotenciario;
- B) Ministro plenipotenciario de primera clase;
- C) Ministro plenipotenciario de segunda clase;
- D) Consejero de embajada y cónsul general;
- E) Secretario de embajada y cónsul de primera clase;
- F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase;
- G) Secretario de embajada y cónsul de tercera clase.

Art. 4º — El personal del Servicio Exterior de la Nación desempeñará indistintamente funciones en las misiones diplomáticas, en las representaciones consulares y en la Cancillería, conforme al sistema de rotación que se determine.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo podrá designar excepcionalmente embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del presidente de la Nación que lo haya efectuado.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al cuerpo permanente

del Servicio Exterior de la Nación para la realización de cometidos especiales y concretos y mientras duren los mismos.

La asignación de categoría diplomática en rangos inferiores podrá ser efectuada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto a los efectos protocolares.

Art. 7º — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá asignar a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación la categoría inmediata superior a la que posean, al solo efecto del rango protocolar y para la realización de cometidos especiales y concretos, con excepción de los funcionarios de las categorías B y C y en el caso previsto en el artículo siguiente.

Art. 8º — La jefatura de las misiones diplomáticas será desempeñada por funcionarios de la categoría A. Los funcionarios de las categorías B y C podrán ser acreditados temporalmente como jefes de misión, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior jerarquía cuando esas razones desaparezcan. En el caso de que fuera necesaria la designación de encargados de negocios *ad interim*, ella deberá recaer en el funcionario de la representación, perteneciente al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación, que siga en categoría y antigüedad en el grado, al jefe de misión.

Este mismo criterio será aplicado para el reemplazo de los jefes de las oficinas consulares.

Art. 9º — El cuerpo de agregados laborales estará constituido por el personal que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo, propuesto por la Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo. Su organización, régimen y funcionamiento serán regulados por un estatuto especial.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo podrá designar agregados especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía u otras, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios, con afectación a sus respectivos presupuestos. Este servicio de agregados especializados dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el ministerio de origen. Formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango protocolar.

Art. 11. — Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es indispensable:

- a) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad;
- b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- c) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente;
- d) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable;
- e) Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de cultura social adecuadas;
- f) Que, siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por naturalización;
- g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional;
- h) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 12. — El ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional, la presente ley y su reglamentación.

Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá designar o promover funcionarios para la categoría A, ad referendum de la Honorable Cámara de Senadores, e igualmente podrá promover funcionarios a las categorías B y C, en las mismas condiciones.

Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán, desde el punto de vista presupuestario, su cargo anterior interinamente, hasta tanto se otorgue el mismo por parte del Senado de la Nación.

Prestado el acuerdo no se requerirá un nuevo pedido para ulteriores traslados del personal del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de las categorías A, B y C.

El funcionario cuyo acuerdo fuera rechazado o no hubiere sido solicitado al Senado de la Nación en el término correspondiente, volverá a ocupar el mismo cargo en el que revistaba en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 13. — La incorporación al cuerpo permanente activo se efectuará exclusivamente por egreso del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y en calidad de funcionario de la categoría G.

Art. 14. — Anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del cuerpo permanente activo que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus artículos 11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos, en todas las categorías en la proporción que determine la reglamentación, de acuerdo con las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse a la categoría inmediata superior.

Art. 15. — Las vacantes en la categoría A —embajador extraordinario y plenipotenciario— serán cubiertas normalmente por el Poder Ejecutivo mediante el ascenso de los ministros plenipotenciarios de primera clase del cuerpo permanente activo. Estos ascensos podrán ser realizados, si las condiciones del Servicio Exterior de la Nación así lo requieren, sin la periodicidad y plazos exigidos por los artículos 14 y 16, inciso b), de la presente ley.

Art. 16. — Son requisitos indispensables para el ascenso:

- a) Que existan vacantes en la categoría inmediata superior;
- b) Permanecer como mínimo tres años en las respectivas categorías;
- c) Para los funcionarios de las categorías E y D, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — La Junta Calificadora deberá preparar el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos, de acuerdo con su respectiva antigüedad y méritos. El funcionario que habiendo sido incluido en la propuesta de ascensos, y que el Poder Ejecutivo no hubiere decidido ascender, o no fuera promovido por causas que no le sean imputables, percibirá un suplemento equivalente al cincuenta por ciento de la diferencia entre su haber mensual y el de la categoría inmediata superior.

Art. 18. — Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11, previo asesoramiento de la Junta Calificadora;
- b) Los funcionarios de las categorías A, B y C que fueran removidos previo acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación;
- c) Aquellos funcionarios a quienes se aplicara como resultado de un sumario la sanción de cesantía o exoneración;
- d) Los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal impuesta por los tribunales comunes o federales;
- e) Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaran los cursos dispuestos en el artículo 16, inciso c), de la presente ley;
- f) Los funcionarios de las categorías G a E que habiendo permanecido en sus categorías por un período de diez años fueran promovidos automáticamente a propuesta de la Junta Calificadora, según el artículo 37, inciso e), y luego de haber tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango.

Los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar por dos años en su nueva categoría.

Estas provisiones serán aplicables en ambos casos siempre que el funcionario no alcance el límite de edad establecido en el inciso siguiente;

- g) Los funcionarios que hubiesen alcanzado los siguientes límites de edad: setenta años, en la categoría A; sesenta y siete años, en las categorías B y C, y sesenta y cinco años, en las restantes categorías;
- h) Por renuncia expresa del funcionario.

CAPÍTULO II

Del estado diplomático

Art. 19. — El grado correspondiente a la categoría de cada funcionario del Servicio Exterior de la Nación con las funciones, obligaciones, derechos y prohibiciones inherentes al mismo, instituidos por la presente ley y su reglamentación, constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y esta ley.

Art. 20. — Son funciones de los integrantes del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Representar a la Nación;
- b) Promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, velar por su prestigio y fomentar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, y difundir su conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del superior gobierno de la Nación;
- c) Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la Nación correspon-

dieren a los escribanos públicos; su formalización tendrá plena validez en todo el territorio de la República.

Registrarán, asimismo, nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de hijos extramatrimoniales y todos los demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas cuando sean solicitados y/o sean de su conocimiento para su posterior inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales pertinentes;

- d) Sin perjuicio de las facultades previstas en el inciso precedente, los jefes de misiones diplomáticas están autorizados, en caso de urgencias, a tomar juramentos o declaraciones de testigos residentes dentro de su jurisdicción, así como a autenticar cualquier acto notarial con las formalidades y condiciones exigidas por las leyes de la Nación para la validez de los instrumentos públicos. Los testimonios que expidan de dichos actos tendrán en la República el mismo valor que acuerden las leyes a los actos análogos debidamente autorizados.

Art. 21. — Son obligaciones de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con arreglo a las disposiciones legales que las reglamenten, y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos internacionales, los usos y las costumbres internacionales:

- a) Prestar juramento, antes de asumir sus tareas, de guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con sus obligaciones y deberes de funcionario del Servicio Exterior de la Nación en las condiciones estipuladas en las prescripciones de la presente ley y su reglamentación;
- b) Prestar servicios en forma regular con toda su capacidad y diligencia para el mejor desempeño de sus funciones;
- c) Desempeñar las funciones o misiones que les encomiende el Poder Ejecutivo, ya sea en la Cancillería, en las misiones diplomáticas o en los consulados, cargos y destinos, de los cuales no podrán excusarse;
- d) Defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación, y reclamar las ventajas que le acuerden los tratados, las leyes y los usos internacionales;
- e) Difundir ampliamente el conocimiento de la República y fomentar las buenas relaciones políticas, económicas, culturales y sociales con el país en que ejercen sus funciones;
- f) Informar periódica y documentadamente sobre los diversos aspectos del Estado ante el que están acreditados;
- g) Prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses, de acuerdo con las normas pertinentes;
- h) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones que reciban;
- i) Preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial;
- j) Guardar absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejen de pertenecer al servicio exterior;

- k) No abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia, hasta que la misma sea aceptada y se haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante, o a quien corresponda, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
- l) Respetar el orden jurídico y las costumbres vigentes en el lugar de destino;
- m) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que recibieren;
- n) Impartir por escrito las órdenes, directivas o instrucciones que deban cumplir sus subordinados en los casos que por su particular trascendencia puedan afectar a los intereses de la Nación;
- ñ) Efectuar una calificación periódica e individual del personal a sus órdenes, informando de la misma a la superioridad y comunicándola por escrito a sus subordinados;
- o) Mantener y perfeccionar los niveles de capacidad y eficiencia que exige el servicio;
- p) Declarar bajo juramento los bienes que poseyeran y las modificaciones que experimentare su patrimonio;
- q) Observar una conducta pública y privada ajustada a la más estricta honorabilidad en su actuación social y económica;
- r) Solicitar autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para contraer matrimonio;
- s) Cuando por necesidades del servicio sean convocados por el Poder Ejecutivo los funcionarios del cuerpo permanente pasivo, deberán presentarse a prestar servicios, quedando sujetos —salvo dispensa expresa— a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad.

Art. 22. — Son derechos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que lo reglamenten, sin perjuicio de otros establecidos en la legislación nacional:

- a) Gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y no ser separados del mismo sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley;
- b) Usar el título de la categoría y recibir el tratamiento que les acuerda la misma, de conformidad con la presente ley y su reglamentación;
- c) Ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- d) Percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que correspondan a la categoría y a la misión que les fuere encomendada, en orden a las exigencias de representación de su función, jerarquía, permanencia en el cargo, y las distintas obligaciones emergentes de su estado civil;
- e) Percibir las retribuciones en concepto de compensación por gastos de vivienda adecuada, subsidio familiar y escolaridad de sus hijos, conforme a las exigencias que determinen los países de destino;
- f) Percibir semestralmente, y según los países, órdenes de pasaje únicamente para sus hijos cuando las posibilidades de educación en el destino resulten deficitarias y por tal causa se vean obligados a desplazarlos a la República o a otros países;

- g) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos o insalubres, que se calificarán de «régimen especial»;
- h) Introducir libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles de uso personal de los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyen el ajuar de su casa en el exterior, cuando sean trasladados a la República, dentro de un plazo no mayor de doscientos días desde la fecha de su llegada al país. Este plazo podrá ser ampliado por causas debidamente justificadas, debiendo solicitarse tal ampliación dentro del lapso mencionado. De igual forma tendrán derecho a exportar libres de todo derecho y gravamen los bienes muebles, inclusive los de industria nacional, de uso personal y de su familia, así como del personal de servicio, y los que constituyan el ajuar de su casa, en ocasión de ser trasladados al exterior, o adquiridos durante su permanencia en destino, y reintroducirlas en iguales condiciones de exención de derechos y gravámenes, cuando regresen a la República;
- i) Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus bienes muebles que hubieren sufrido ellos o los miembros de su familia, por causas que no proviniere de negligencia o imprevisión del funcionario y en ocasión de sus funciones en el exterior, para lo cual deberán haber presentado previamente a la Cancillería el inventario de sus bienes muebles, sujeto a la reglamentación que se dicte al efecto;
- j) Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma, resolución, medida disciplinaria o calificación que consideren inadecuada o injusta;
- k) Recabar órdenes, directivas o instrucciones escritas del superior jerárquico cuando por la naturaleza del asunto lo estimen aconsejable;
- l) Usar de las licencias ordinarias y extraordinarias;
- m) El uso del pasaporte diplomático por el funcionario, su cónyuge y los hijos menores de dieciocho años; los otros miembros de la familia, que estén a su cargo, tendrán derecho al uso de pasaporte oficial;
- n) Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes;
- ñ) Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del Servicio Exterior de la Nación y por lo tanto mantienen el uso de los atributos de su categoría.

Art. 23. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación:

- a) Intervenir en la política del país extranjero en el que desempeñen sus funciones;
- b) Ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados ajenos o propios en el extranjero;
- c) Formar parte de directorios o ejercer ningún tipo de comercio, representación, gestión ni funciones de carácter honorario o remuneradas, al servicio de firmas comerciales, empresas o intereses extranjeros;

- d) Percibir otras remuneraciones a cargo de la administración nacional, provincial o municipal, excepto las referidas a la docencia universitaria;
- e) Prestar servicios en el país extranjero del que fuera originario su cónyuge, con la excepción prevista en el artículo 94 de la presente ley;
- f) Hacer uso indebido de documentos o noticias reservadas, confidenciales o secretas

Art. 24. — Prohíbese a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, salvo autorización expresa:

- a) Asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales;
- b) Integrar comisiones con el propósito de asumir una actitud colectiva ante el gobierno del país de destino, salvo extrema gravedad y urgencia debidamente comprobadas;
- c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República;
- d) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino, prohibición que alcanza a la familia a su cargo;
- e) Que su cónyuge y/o las personas a su cargo desempeñen tareas, remuneradas o no, en el país extranjero donde estuvieren destinados;
- f) Ejercer la docencia, la que sólo podrá ser autorizada en el ámbito universitario nacional y siempre que no interfiera en la dedicación y el rendimiento debidos a la función específica.

Art. 25. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa a dicho estado;
- b) Por las causas previstas en el artículo 18, inciso c) de la presente ley;
- c) Por condena criminal imputada por delitos dolosos;
- d) Por presentarse en concurso o ser declarado fallido.

CAPÍTULO III

Del Consejo Superior de Embajadores

Art. 26. — Créase un Consejo Superior de Embajadores, de carácter permanente, cuyas funciones serán asesorar al ministro en materia de política exterior y en los asuntos de especial relevancia que conciernan a la conducción general del ministerio.

Art. 27. — Los funcionarios de categoría A del cuerpo permanente activo que hubieren cumplido sesenta y cinco años pasarán a revistar en la Cancillería para integrar el Consejo Superior de Embajadores, salvo la excepción prevista en el artículo 28.

Art. 28. — El límite de edad indicado en el artículo anterior podrá ser ampliado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en forma de excepción, en caso de que lo juzgue conveniente.

Art. 29. — Podrán integrar el Consejo Superior de Embajadores los funcionarios de la categoría A del cuerpo permanente activo que hayan revistado por lo menos doce años en el cargo.

Art. 30. — Una vez integrado el Consejo Superior de Embajadores sus miembros podrán ser trasladados al exterior en misiones permanentes, cuando razones de interés nacional así lo aconsejen, pero podrán cubrir también en cualquier momento misiones especiales y transitorias.

Art. 31. — El consejo funcionará mediante salas que respondan a distintas especialidades.

Art. 32. — El número de integrantes será limitado y sujeto a la proporción que se establezca por reglamentación. El tiempo de permanencia de funcionarios en el Consejo Superior de Embajadores será de tres años.

Art. 33. — Si al tiempo de constitución o renovación del consejo hubiese mayor número de embajadores en situación de revista en la Cancillería para acceder al mismo, los integrantes serán determinados por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 34. — Los funcionarios integrantes del Consejo Superior de Embajadores dejarán de pertenecer automáticamente al mismo:

- a) Por renuncia al servicio activo;
- b) Al cumplir setenta años de edad;
- c) En caso de traslado al exterior o cese de funciones;
- d) Al finalizar el tercer año de su permanencia, si no les fuera expresamente prorrogado el plazo por un nuevo período no superior a dos años;
- e) Por exigencias de la rotación que corresponda efectuar entre sus miembros.

Art. 35. — La misión de asesoramiento, forma de integración, rotación y funcionamiento del Consejo Superior de Embajadores serán establecidos por la reglamentación de la presente ley.

CAPÍTULO IV

De la junta calificadora

Art. 36. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una junta calificadora de cinco miembros, presidida por el subsecretario que tenga a cargo la superintendencia de la administración del personal, e integrada por cuatro miembros en actividad con rango de embajador, designados entre quienes se encuentren en funciones en la Cancillería. El director de personal actuará como secretario asesor. Los cuatro embajadores se renovarán cada dos años.

Art. 37. — Serán funciones de la junta calificadora:

- a) Asistir al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en lo referente a promociones, traslados, sanciones disciplinarias, disponibilidades, retiros, jubilaciones y cualquier otra materia vinculada con el régimen de la presente ley que afecte la relación existente entre el Estado y los funcionarios que pertenezcan o hubieran pertenecido al Servicio Exterior de la Nación;
- b) Asesorarlo con respecto a la resolución de los recursos a que dieran lugar las actuaciones mencionadas en el inciso a) anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo 22 de la presente ley;
- c) Asesorar al ministro en lo referente a la integración del Consejo Superior de Embajadores;
- d) Confeccionar el escalafón del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, teniendo en cuenta la antigüedad en la carrera y en la categoría de cada funcionario. El escalafón tendrá carácter público y será actualizado anualmente;

- e) Proponer la promoción automática de los funcionarios de las categorías G a E que no hayan ascendido en el término de diez años, y los de la categoría D que no lo hubieran hecho en doce años, conforme con las previsiones del artículo 18, inciso f).

Art. 38. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con excepción de los pertenecientes a la categoría A, serán calificados anualmente por sus superiores jerárquicos.

Todo funcionario tiene la obligación de calificar a sus subordinados inmediatos cuando éstos se hayan desempeñado a sus órdenes durante un lapso no menor de cuatro meses.

El informe de calificación será confidencial y estará destinado a reflejar la apreciación del superior sobre la forma en que el subalterno se haya desempeñado durante un período determinado.

Una vez notificado el causante por escrito, quien podrá interponer recurso de acuerdo con lo establecido al efecto en la reglamentación, el informe será elevado por la vía jerárquica correspondiente.

CAPÍTULO V

Del régimen disciplinario

Art. 39. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.

Art. 40. — Cuando un funcionario de la categoría A sea el causante de la transgresión a las normas emergentes de esta legislación, así como también a la conducta ética y moral que debe observar constantemente, será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto ordenará, al efecto, se le instruya el correspondiente sumario.

Art. 41. — El sumario instruido de acuerdo con el artículo anterior puede dar lugar a las siguientes sanciones, que dispondrá el ministro de Relaciones Exteriores y Culto:

- a) Disponibilidad por un período de uno a dos años;
- b) Retiro obligatorio;
- c) Cesantía o exoneración.

Art. 42. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, comprendidos en las categorías B a G, podrán ser objeto de las sanciones disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento por escrito;
- c) Suspensión;
- d) Disponibilidad;
- e) Cesantía;
- f) Exoneración.

Para su aplicación se tendrá en cuenta, en principio, el carácter y la importancia de la falta cometida y los antecedentes del imputado.

Art. 43. — El funcionario del Servicio Exterior de la Nación que violare el juramento establecido en el artículo 21, inciso a), de la presente ley, será pasible de exoneración.

Art. 44. — Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por las siguientes autoridades:

- a) Apercibimiento verbal o escrito, por el superior jerárquico;
- b) Suspensión hasta cinco días, por el jefe de la misión diplomática o consular, como asimismo por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- c) Suspensión hasta diez días, por resolución del subsecretario con superintendencia sobre asuntos de personal a requerimiento del jefe de misión diplomática o de la representación consular, asimismo como por los jefes directos de los organismos en Cancillería;
- d) Suspensión de diez a noventa días y la disponibilidad, por resolución ministerial.

Toda sanción disciplinaria será comunicada de inmediato al causante, al organismo encargado del personal, y por éste a la junta calificadora.

Art. 45. — No se impondrá la suspensión de funciones por más de treinta días ni las medidas disciplinarias indicadas en los incisos e) y f) del artículo 42 sin previa instrucción de un sumario administrativo.

La reglamentación determinará las normas necesarias para garantizar la defensa del funcionario sumariado.

Art. 46. — Cuando la gravedad de la imputación requiera apartar al inculcado de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrá disponer la suspensión preventiva por un período no mayor de noventa días.

Art. 47. — Cuando el funcionario estuviere procesado criminalmente por un delito doloso cuya gravedad requiera apartar previamente al imputado de sus funciones, y en el caso en que la substanciación del proceso criminal supere al plazo establecido en el artículo precedente, dicho plazo será ampliado hasta el momento en que quede consentida la sentencia.

Art. 48. — Los sumarios se iniciarán por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO VI

De la disponibilidad

Art. 49. — Los funcionarios podrán ser declarados en disponibilidad:

- a) A su solicitud, por razones particulares, cuando tuvieren más de diez años en el Servicio Exterior de la Nación, en cuyo caso queda en suspenso la prohibición establecida en el artículo 23, inciso b), siempre que las actividades a que se refiere el mismo no sean gestiones de intereses extranjeros;
- b) Cuando la licencia por lesión o enfermedad contraída por causas o en ocasión de sus funciones exceda los períodos de dos años, con el ciento por ciento de sus haberes, y el año de extensión con el cincuenta por ciento, previsto por la legislación general previsional de la Nación;
- c) Los que desempeñaren funciones electivas nacionales, provinciales o municipales, mientras dure su mandato;
- d) Si hubieren sido designados en un organismo nacional, provincial o municipal;

- e) Si hubieran sido designados en un organismo internacional del que sea miembro la República, previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores y Culto;
- f) Por aplicación de la sanción del artículo 42, inciso d), en cuyo caso no podrá exceder de un año.

Art. 50. — En el caso de los incisos a) y b) del artículo anterior, la disponibilidad tendrá en su totalidad o fraccionadamente una duración máxima de un año. En el caso del inciso d), el funcionario podrá solicitar una prórroga no mayor de un año sobre el plazo máximo fijado por el inciso a) o por el período que dure el desempeño de la designación, siempre que ésta, justificadamente, responda a un alto interés nacional. En el caso del inciso e), la disponibilidad se otorgará por dos años, pudiendo extenderse a cuatro a solicitud del interesado siempre que el ministerio juzgue que la designación responde a intereses del Estado. En el caso del inciso f) no podrá ser nunca mayor de un año.

Art. 51. — El tiempo transcurrido en la disponibilidad prevista en el inciso b) del artículo 49 será computado a los fines del ascenso. En los demás incisos dicho lapso no será computable.

El tiempo transcurrido por los motivos señalados en los incisos b), c), d) y e) del artículo 49 y en el artículo 42, inciso d), serán computados a los fines del retiro o jubilación.

Art. 52. — La disponibilidad será ordenada por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Si el funcionario, al vencer los plazos previstos en el artículo 50 no hubiere solicitado su reincorporación o una prórroga en el caso que corresponda, se decretará su cesantía.

Art. 53. — Los funcionarios declarados en disponibilidad en virtud del artículo 49, no percibirán sueldo alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hasta la fecha de su reintegro a sus funciones, salvo el caso del inciso b) en que percibirán el cincuenta por ciento de sus haberes cuando la licencia exceda el período de un año y el ciento por ciento de sus haberes cuando supere los dos años.

La disponibilidad impuesta de acuerdo con el artículo 42, inciso d), no podrá ser aplicada sin el previo traslado a la República del funcionario que se encontrase en el extranjero.

El cargo del funcionario en disponibilidad podrá ser cubierto presupuestariamente. La reincorporación se producirá por resolución ministerial.

CAPÍTULO VII

De los traslados

Art. 54. — Todos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación están sujetos a ser trasladados.

Todo traslado será dispuesto por resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y deberá ser cumplido como orden de servicio.

A los efectos de la aplicación de la presente ley y su reglamentación se entiende por traslado el pase de un país a otro y, dentro del mismo país, de una ciudad a otra.

El funcionario tendrá un plazo de cuarenta y cinco días continuos, a contar del día siguiente al de su notificación, para hacerse cargo de sus nuevas funciones. Este plazo podrá ser modificado por disposición ministerial, cuando necesidades de servicio así lo requieran.

Art. 55. — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tendrá en cuenta en las designaciones y traslados que los funcionarios con mejor calificación deberán ser destinados prioritariamente a los países de América latina.

Todo funcionario en el transcurso de su carrera deberá servir en dos períodos como mínimo en países latinoamericanos, y alternar en países de los cinco continentes; asimismo deberá prestar servicios por lo menos en dos oportunidades en funciones consulares, tanto en la Cancillería como en el exterior.

Art. 56. — Los funcionarios de las categorías D a G deberán prestar funciones en forma alternada por los períodos siguientes:

- a) Dos años consecutivos como mínimo y seis como máximo durante su permanencia en la República;
- b) Cuatro años consecutivos como mínimo y seis como máximo durante su permanencia en el exterior.

Estos límites podrán prorrogarse o reducirse por disposición del Poder Ejecutivo.

Art. 57. — Los funcionarios del servicio exterior destinados por primera vez a un cargo permanente en una misión diplomática consular, independientemente de los gastos de embalaje y fletes, recibirán, en esa única oportunidad, para gastos de instalación, con el coeficiente correspondiente al país de destino, el importe igual a dos meses de retribución si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si en el momento de iniciar el viaje estuvieran casados. Esta última asignación también la recibirán los viudos y solteros que deban atender las necesidades de los miembros de su familia conforme lo determina el artículo 92, siempre que los familiares a su cargo viajen con él.

Art. 58. — Cuando los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con familiares a su cargo sean trasladados percibirán, antes de emprender viaje, para compensar los gastos de instalación, la suma equivalente a dos meses de retribución, y si se tratase de solteros o viudos sin hijos la equivalente a un mes de retribución, calculadas conforme al país de coeficiente más favorable, así como los gastos de embalaje y flete, salvo que el traslado fuese dentro de la misma ciudad. Al pasar a prestar servicios en la Cancillería se aplicará, para los gastos de instalación, el coeficiente del último destino.

Art. 59. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que deban viajar en cumplimiento de un traslado recibirán los pasajes correspondientes para ellos y los miembros de su familia. Cuando se tratare de una misión especial o comisión de servicio de la República al extranjero, el funcionario podrá requerir un pasaje más para su cónyuge si debiera permanecer fuera de su destino permanente más de cuarenta y cinco días.

Art. 60. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación podrán ser llamados en comisión a la República, por razones de servicio, mediante resolución del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y por el plazo que fije la reglamentación. En tales desplazamientos, durante su permanencia en la República, los viáticos serán liquidados sin el coeficiente del país de destino y en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 61. — Los funcionarios de las categorías A, B y C en todos los casos, y los de las restantes cate-

gorias que tuvieran por lo menos un hijo menor de doce años, tendrán derecho a un pasaje para un empleado personal.

Art. 62. — En el caso de que un funcionario del Servicio Exterior de la Nación sea trasladado al país por cualquier motivo no contemplado específicamente en esta legislación, le corresponden todos los derechos inherentes al traslado.

En caso de cesación de funciones en el exterior como consecuencia de la pérdida del estado diplomático el funcionario tendrá derecho, dentro del plazo que fije la reglamentación, a los pasajes para él, su familia y el empleado personal previsto en el artículo 61, así como a los gastos de embalaje y flete.

CAPÍTULO VIII

De los haberes y asignaciones

Art. 63. — Los haberes, asignaciones, suplementos y gastos previstos en la presente ley, que correspondan al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las representaciones diplomáticas y consulares, serán liquidados y abonados por trimestre anticipado en el exterior, y desde la fecha de partida, en la divisa que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará o reajustará el Poder Ejecutivo, siempre que la ley no disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se aplicará al sueldo anual complementario.

La reglamentación establecerá la asignación con coeficiente que, en concepto de salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el exterior.

Cuando pasen a prestar servicios en la Cancillería se liquidarán sus haberes hasta la llegada a la República con el coeficiente del último destino.

Art. 64. — Los funcionarios de las categorías B y C que, de acuerdo con el artículo 8º, fuesen acreditados como jefes de misión con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario percibirán, mientras se desempeñen como tales, un sobresueldo equivalente a la diferencia entre su propia remuneración y la que correspondería al funcionario de la categoría A. Asimismo, los encargados de negocios *ad interim* recibirán desde el momento en que invistan ese carácter y por el término del interinato un sobresueldo por responsabilidad de funciones equivalente al veinte por ciento de la remuneración que le correspondería al funcionario de la categoría A.

Art. 65. — Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que superen en sus respectivas categorías los plazos establecidos en el artículo 16, inciso b) de la presente ley, y que no se encuentren sometidos a sumario administrativo, cobrarán mensualmente un suplemento por tiempo mínimo cumplido equivalente al veinticinco por ciento de la diferencia entre el haber de su categoría y el correspondiente a la inmediata superior.

Art. 66. — Todo funcionario del Servicio Exterior de la Nación que estuviere acreditado ante varios gobiernos podrá solicitar el reintegro de los gastos de representación y de oficina que se ocasionaren con motivo de sus funciones concurrentes, y percibirá los viáticos correspondientes a los períodos en que deba permanecer en los países en que no tuviera su residencia habitual.

Asimismo se le otorgarán las órdenes de pasajes pertinentes.

Art. 67. — El funcionario que en virtud de usos o exigencias transitorias de servicio deba trasladarse a otra ciudad, dentro del mismo país, podrá modificar su residencia previa autorización del ministerio.

En ese caso recibirá una retribución extraordinaria equivalente a la tercera parte de su remuneración total y se le otorgarán pasajes para él y su familia.

Art. 68. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que fueren designados para el desempeño de misiones especiales u otras comisiones de servicio tendrán derecho a pasajes y a los viáticos que fijará la respectiva reglamentación.

Cuando para el cumplimiento de dicho cometido deban desplazarse desde el ministerio, y la permanencia en el exterior exceda de treinta días, recibirán, en substitución de los viáticos, la remuneración que percibiría el funcionario de igual categoría en el país donde desempeñará su misión. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá anticiparles los viáticos o remuneraciones que correspondan y las órdenes de pasaje, así como también en caso necesario una suma para gastos de representación con cargo de rendir cuenta.

Las personas que el Poder Ejecutivo designe para el desempeño de misiones especiales ante gobiernos extranjeros o congresos, conferencias y reuniones internacionales, así como los miembros que integren las delegaciones, recibirán los pasajes, los viáticos y gastos de representación que se determinarán en cada caso.

Art. 69. — Las representaciones diplomáticas y consulares recibirán los gastos de representación que para cada una de ellas determine anualmente el ministerio conforme a las exigencias propias de su función.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares para las rendiciones de cuentas de dicha partida, teniendo presente que esos gastos no se asignan con carácter personal a dichos jefes sino que tienen como objeto atender los compromisos protocolares oficiales de todos los funcionarios de la representación.

Art. 70. — En los países donde la embajada no posea para residencia del jefe de misión diplomática una propiedad del Estado, se destinará con cargo a rendir cuenta la suma necesaria para su arrendamiento y se determinarán, también anualmente, las partidas destinadas a las representaciones diplomáticas y consulares para alquilar de sus oficinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establecerá las normas a que deberán ajustarse los jefes de las representaciones diplomáticas y consulares para arrendamiento de inmuebles a fin de que los contratos de locación que suscriban *ad referendum* puedan ser ratificados de oficio por el ministerio.

Art. 71. — El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determinará anualmente los gastos e inversiones que demande el funcionamiento de cada misión diplomática y oficina consular, y establecerá la forma y responsabilidad emergente de la aplicación de dichas partidas.

Art. 72. — A fin de determinar las sumas que corresponda asignar en virtud de los artículos 69, 70 y 71, las representaciones diplomáticas y consulares elevarán anualmente al ministerio, en el plazo y forma que determine la reglamentación, el presupuesto detallado de sus necesidades.

CAPÍTULO IX

Del régimen de licencias

Art. 73. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes licencias:

- a) Ordinaria anual de treinta días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y con coeficiente, cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- b) Licencia especial de cuarenta y cinco días corridos, para ser utilizada en la República, luego de cada tres años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración total con coeficiente, y las órdenes de pasaje para el funcionario y su familia. Esta licencia excluye durante el año que sea acordada el derecho a lo previsto en el inciso anterior;
- c) Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se concederán de acuerdo con las normas que las regien. En el caso de que corresponda percibir haberes serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior;
- d) Semestral de diez días para los funcionarios destacados en los países denominados de «régimen especial», de acuerdo con el artículo 21, inciso j), y que serán otorgadas según lo establezca la reglamentación;
- e) Extraordinaria, que no podrá exceder de tres meses, para los funcionarios que por razones de servicio no hayan podido tomar las licencias establecidas en los incisos a) y b) durante un período de tres años, y para aquellos que hayan prestado servicios durante cinco años consecutivos en el exterior. En este último caso interrumpe el plazo para gozar de las licencias de los incisos b) y d) y excluye durante el año en que sea acordada el derecho a la licencia del inciso a).

Las licencias ordinarias deberán ser usadas en el año calendario correspondiente caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas.

Solamente por razones de servicio autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto podrán usarse al año siguiente.

CAPÍTULO X

De las jubilaciones, retiros y pensiones

Art. 74. — El régimen de previsión aplicable a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación estará integrado por las normas generales establecidas para los agentes de la administración pública nacional, y las normas específicas referidas a ellos que modificaren aquéllas.

Art. 75. — La prestación de servicios en los destinos indicados en el artículo 22, inciso g), será computada doble a los efectos del retiro o jubilación.

Art. 76. — Los funcionarios del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación que, sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del artículo 18, estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, podrán ser jubilados de oficio.

Art. 77. — Los funcionarios que sin tener derecho a la jubilación tuvieran una antigüedad de veinte años en la administración pública, de los cuales quince, como mínimo, computables en el Servicio Exterior de la Nación, y hubieran cesado en sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, con excepción de los incisos c) y d) del mismo, o hayan sido separados por razones ajenas a su voluntad, tendrán derecho al haber de retiro siempre que no hubieran percibido ningún tipo de indemnización en razón del cese de funciones, en cuyo caso deberán reintegrarla.

Art. 78. — Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un haber de retiro mensual equivalente al 2,5 por ciento de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República por cada año de servicio computable para el retiro. Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario tenga sesenta años de edad, si estuviere entonces en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y hasta los sesenta y cinco años en caso contrario.

Art. 79. — Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que se acogieren a los beneficios de la jubilación o fueren jubilados de oficio de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, desde el momento en que dejaren de pertenecer al cuerpo permanente en actividad y hasta que obtuvieren el beneficio de la caja respectiva, percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un anticipo de jubilación equivalente al setenta por ciento del que presumiblemente les correspondiere, calculado sobre los importes que por todo concepto hubieren constituido su última retribución, excluidos los viáticos sujetos a rendición de cuentas. La liquidación será efectuada por el ministerio previa acreditación por parte del interesado de haber iniciado el trámite jubilatorio ante la caja, y se computará como pago a cuenta del haber jubilatorio, deduciéndose de la retroactividad que se acumulare. Si el monto de los anticipos excediere la retroactividad a percibir, la diferencia será deducida por la caja de los haberes del beneficiario mediante un descuento que no podrá exceder del veinte por ciento del importe mensual de los mismos. El ministerio deberá comunicar que efectúa el anticipo a la caja, la que a su vez le hará saber la fecha en que comienza el pago de los haberes jubilatorios. En el caso de que en definitiva no se acordara el beneficio por la caja el ministerio formulará los cargos de reintegro correspondientes.

CAPÍTULO XI

Del Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Art. 80. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación es un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con las facultades que le son atribuidas por la presente ley y su reglamentación.

Art. 81. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación constituye el organismo único de selección, formación e incorporación del personal para el Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación y tiene como misión fundamental afirmar y desarrollar la vocación profesional, los principios éticos y morales y la convicción patriótica que informan la conducta de los aspirantes a integrantes del Servicio Exterior de la Nación.

Art. 82. — El Instituto del Servicio Exterior de la Nación complementa su cometido con sujeción a la misión señalada en el artículo anterior, mediante:

- a) La selección —por el medio que establezca la reglamentación— de los candidatos a ingreso al instituto, los que deben reunir las condiciones establecidas en el artículo 11, ser menores de treinta y cinco años de edad y poseer título universitario de validez nacional en disciplinas afines con la carrera;
- b) La incorporación, en calidad de aspirantes, de quienes resulten admitidos en el instituto a los efectos de su formación y capacitación profesional, teórica y práctica;
- c) La propuesta de promoción a la categoría de secretario de embajada y cónsul de tercera clase (categoría G) de los aspirantes que hayan aprobado los cursos y exigencias correspondientes y con arreglo a la reglamentación de la presente ley;
- d) La capacitación teórica y práctica de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación conforme lo exige el inciso c) del artículo 16;
- e) El cumplimiento de todas las actividades docentes, de investigación, estudio y divulgación que determine la reglamentación.

Art. 83. — Los aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación tendrán dedicación exclusiva, por lo que serán becados hasta su egreso, oportunidad en que serán promovidos a funcionarios de la categoría G del Cuerpo Permanente Activo e inscritos en el escalafón del Servicio Exterior de la Nación, reconociéndoseles como antigüedad en la carrera, al solo efecto de la jubilación o retiro, el tiempo de permanencia en el instituto.

Asimismo quedan sujetos a las obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias establecidas en la presente ley en cuanto sea de aplicación a su calidad de aspirantes al Servicio Exterior de la Nación, de acuerdo con la reglamentación.

Art. 84. — La dirección del Instituto del Servicio Exterior de la Nación estará a cargo de un funcionario de la categoría A del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, quien dependerá directamente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

CAPÍTULO XII

De las disposiciones generales

Art. 85. — Cuando los subsecretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sean designados entre funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación, serán elegidos entre los de la categoría A.

Art. 86. — Queda prohibida toda designación honoraria en el Servicio Exterior de la Nación.

Art. 87. — Cuando un funcionario del Servicio Exterior de la Nación se lesionara o contrajera alguna enfermedad por causa o en ocasión de sus funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de asistencia médica, internación y medicamentos, sin perjuicio del retiro, jubilación o indemnización que pudiera corresponderle.

Art. 88. — En caso de fallecimiento de un funcionario del Servicio Exterior de la Nación mientras estuviese designado en el extranjero, el Estado se

hará cargo de la repatriación de los restos del extinto hasta el domicilio fijado en la República por su familia, y de los siguientes gastos:

- a) De acondicionamiento y sepelio;
- b) De los pasajes de regreso a la República de los miembros de su familia y del empleado previsto en el artículo 61;
- c) De embalaje, fletes y acarreo que se originen como consecuencia del derecho acordado en el artículo 58.

Asimismo se reconocerá a la familia el derecho a los gastos de traslado que le hubieran correspondido al extinto.

Art. 89. — Cuando falleciere un miembro de la familia, el Estado repatriará los restos y se hará cargo de todos los gastos de acondicionamiento y traslado hasta el lugar de la República que determine el funcionario. El pasaje de regreso de la o las personas que acompañen los restos será también abonado por el Estado y se otorgará al funcionario una licencia especial a establecer por reglamentación.

Art. 90. — Los títulos otorgados por universidades extranjeras o establecimientos de enseñanza de nivel primario, secundario o terciario a los funcionarios del servicio exterior destinados en el extranjero, así como a los miembros de su familia, serán reconocidos en la República de acuerdo con las reglamentaciones de las universidades nacionales o de los organismos de conducción de la enseñanza de los respectivos niveles. Si los interesados no hubieran terminado sus estudios en el exterior, las universidades nacionales o los respectivos organismos reconocerán la validez de los estudios hasta el último curso completo aprobado en el extranjero. Si los estudios seguidos no lo fueran por el sistema de cursos completos, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero que tengan su equivalente en el respectivo plan de estudios argentino. Igual criterio se seguirá si hubiera completado cursos en el extranjero, en el caso de que la correspondiente carrera esté organizada por materias en la República.

Art. 91. — Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, o de cualquier funcionario argentino de carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazcan en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte de los padres.

Art. 92. — Se entiende por familia a los fines de esta ley: el cónyuge, los hijos e hijastros menores de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas e hijastras solteras y los ascendientes de primer grado, tanto del funcionario como del cónyuge, cuando aquél compruebe que subviene a sus necesidades.

Art. 93. — A partir de la publicación de la presente ley queda prohibido a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros que no se hayan comprometido previamente a obtener la carta de ciudadanía argentina.

Art. 94. — Únicamente se destinará un funcionario al país de origen del cónyuge cuando razones de interés nacional así lo impongan, y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a) El cónyuge deberá tener ocho años en el ejercicio de la ciudadanía argentina;

- b) El cónyuge debe haber residido en la República durante ocho años, ya sea en forma continua o discontinua.

Art. 95. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que desempeñan funciones en el exterior conservarán su domicilio legal en la República.

Art. 96. — El jefe de la misión diplomática permanente será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado y, en virtud de tal investidura, les serán subordinados jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal.

CAPÍTULO VIII

Del personal administrativo, técnico, profesional y de servicios generales

Art. 97. — El personal administrativo, técnico, profesional y de servicios generales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mientras preste servicios en las representaciones diplomáticas y consulares de la República, tendrá el rango, los derechos y obligaciones establecidos en esta ley para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, dentro de las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 98. — Al personal administrativo, técnico, profesional, mientras permanezca en funciones en el exterior, se le asignará rango diplomático entre las categorías G y E del Servicio Exterior de la Nación, según su categoría administrativa.

CAPÍTULO XIV

Del Ceremonial del Estado

Art. 99. — Dependiente directamente del ministro de Relaciones Exteriores y Culto funcionará el Ceremonial del Estado, organismo único de gestión protocolar de carácter nacional, que estará a cargo del jefe superior del Ceremonial del Estado, con categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario.

La reglamentación establecerá la forma de su integración, funciones y competencia.

CAPÍTULO XV

De las disposiciones transitorias

Art. 100. — Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se encuentren en actividad a la fecha de publicación de la presente, así como también todos aquellos reincorporados, designados o nombrados de conformidad con las leyes 20.508, 20.549 y 20.713, con excepción de los que fueran designados de acuerdo con los artículos 5º, 9º y 10 de esta ley, formarán parte integrante del cuerpo permanente activo.

El régimen de estabilidad consagrado por esta ley no deroga los efectos de la ley 20.713, durante el término de su vigencia.

Art. 101. — Establécense que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que actualmente revistan en la categoría B, ministros plenipotenciarios y que pasaron a integrarla por o durante la vigencia del decreto ley 19.300/71, ya sea por pertenecer entonces a la categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase o por promoción, respectivamente, revisitarán, a partir de la publicación de la presente ley, en la categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase. El resto pasará a integrar la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase.

Art. 102. — Previo a la aplicación de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e), la junta calificadora procederá, dentro de los noventa días desde la publicación de la presente ley, a proponer, en base a sus antecedentes y demás elementos de juicio, al reescalafonamiento, por esta única vez, de aquellos funcionarios que hayan sido evidentemente postergados en sus ascensos sin que mediaren justificativos para esa postergación.

Art. 103. — Como caso de excepción, a efectos de reorganizar adecuadamente el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, facúltase, por esta única vez, al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para que, por un periodo de ocho meses a partir de la publicación de la presente ley, pueda efectuar promociones siempre que existan vacantes y sin necesidad de cumplir los requisitos de los incisos b) y c) del artículo 16.

Art. 104. — Dentro de los ciento ochenta días de publicación de la presente ley, el Ministerio de Bienestar Social, de común acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estudiarán un régimen previsional para el personal del Servicio Exterior de la Nación, que contemple las particularidades y naturaleza de las funciones que presta el mismo.

Art. 105. — Los distintos ministerios, secretarías de Estado u organismos descentralizados nacionales, provinciales o municipales, adoptarán los recaudos necesarios para instruir a sus dependencias respecto a lo determinado en el artículo 96, dentro de los treinta días de la publicación de la presente.

Igualmente, en el plazo y forma que establezca la reglamentación, quedarán disueltas las oficinas de ceremonial o de audiencias diplomáticas de todas las dependencias del Estado nacional, las que transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para facilitar la gestión del Ceremonial del Estado mencionado en el artículo 99, los créditos existentes en sus respectivos presupuestos destinados a la atención de gastos protocolares.

Art. 106. — La reglamentación de la presente ley será dictada por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dentro de los noventa días de la fecha de su publicación y teniendo en cuenta lo establecido en la ley 20.615 artículo 30, inciso 5). Hasta tanto se concrete esa medida, regirán las disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto 5.182 del 24 de febrero de 1948 y sus modificaciones, en cuanto sean aplicables a la presente.

Art. 107. — Dentro de los noventa días de la publicación de la presente ley, será puesto en vigencia el estatuto a que se refiere el artículo 9º, el que deberá ser confeccionado por una comisión integrada por tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y tres representantes designados por la Confederación General del Trabajo.

Art. 108. — Derógase el decreto ley 19.300/71 y todas las otras disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 109. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional remita, con carácter de urgente, al Congreso Nacional, para su consideración, el Convenio Internacional del Azúcar 1973.